



RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2002–2006

Compilación de las recomendaciones de la sociedad civil presentadas a la Organización de los Estados Americanos y al Proceso de Cumbres de las Américas sobre los temas de la Agenda Interamericana

2002-2006 CIVIL SOCIETY RECOMMENDATIONS

Compilation of civil society recommendations presented to the Organization of American States and the Summits of the Americas Process on issues pertaining to the Inter-American Agenda

Secretaría de Cumbres de las Américas
Organización de los Estados Americanos
Washington, DC
2006

Summits of the Americas Secretariat
Organization of American States
Washington, DC
2006

Secretary General
José Miguel Insulza

Assistant Secretary General
Albert R. Ramdin

Summits of the Americas Secretariat
Director
Luis Alberto Rodríguez

ISBN 0-8270-4987-0

All rights reserved

Rights and Permissions

The material in this work is copyrighted. Copying and/or transmitting portions or all of this work without permission may be in violation of applicable law. The Summits of the Americas Secretariat encourages dissemination of its work and will normally grant permission promptly.

For permission or photocopy or reprint any part of this work, please send a request with complete information to:

Organization of American States
Summits of the Americas Secretariat
1889 "F" Street, N.W.
Washington, D.C. 20006 USA
Telephone: 202 458 3127

Internet: www.summitsoftheamericas.org
www.civil-society.oas.org

Email: summit-info@oas.org
summitcso@oas.org

ÍNDICE	<i>iii</i>
INTRODUCCIÓN	<i>1</i>
MESA REDONDA CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA SESIÓN ESPECIAL DE LA CISC: “GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”, WASHINGTON, DC, 2 Y 3 DE MAYO DE 2006	<i>3</i>
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD DE CONOCIMIENTO	<i>3</i>
PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA DECLARACIÓN DE FLORIDA	<i>4</i>
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y LA DECLARACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN DE MAR DEL PLATA	<i>6</i>
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	<i>8</i>
REUNIÓN DE AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, ISLA DE MARGARITA, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 14 AL 17 DE MARZO DE 2006	<i>10</i>
TRATA DE PERSONAS	<i>10</i>
FORO REGIONAL CON LA SOCIEDAD CIVIL: "CREAR TRABAJO PARA ENFRENTAR LA POBREZA Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA", BUENOS AIRES, ARGENTINA, 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2005	<i>13</i>
DEMOCRACIA	<i>13</i>
<i>Lucha contra la corrupción</i>	<i>14</i>
<i>Procesos y procedimientos electorales</i>	<i>14</i>
<i>Transparencia y buena gestión gubernamental</i>	<i>14</i>
DERECHOS HUMANOS	<i>14</i>
<i>Migración</i>	<i>15</i>
<i>Libertad de opinión y de expresión</i>	<i>15</i>
JUSTICIA	<i>15</i>
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	<i>15</i>
DIVERSIDAD CULTURAL	<i>16</i>
TRABAJO	<i>16</i>
IGUALDAD DE GÉNERO	<i>17</i>
EDUCACIÓN	<i>17</i>
<i>Ciencia y Tecnología</i>	<i>17</i>
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CUMBRES	<i>17</i>
COMERCIO Y FINANZAS	<i>17</i>
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	<i>17</i>
DESARROLLO SOSTENIBLE	<i>17</i>
CRECIMIENTO CON EQUIDAD	<i>18</i>

MESA REDONDA "EL ROL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN EN CIENCIAS EN EL MARCO DE DISCUSIÓN DE LA CUARTA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS", BUENOS AIRES, ARGENTINA, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2005	18
EDUCACIÓN	18
<i>Ciencia y Tecnología</i>	18
FORO INTERAMERICANO DE AFRO-DESCENDIENTES: "PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA DE LOS AFRO-DESCENDIENTES EN LA IV CUMBRE DE LAS AMÉRICAS", SAN JOSÉ, COSTA RICA, 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2005	19
IGUALDAD DE GÉNERO	19
TRABAJO	19
EDUCACIÓN	19
<i>Ciencia y Tecnología</i>	19
CRECIMIENTO CON EQUIDAD	19
DERECHOS HUMANOS	20
<i>Cumplimiento de obligaciones internacionales y respeto de las normas internacionales</i>	20
<i>Migración</i>	20
<i>Derechos humanos de la mujer</i>	20
<i>Derechos humanos de la niñez y la adolescencia</i>	20
<i>Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos</i>	20
SALUD	20
DIVERSIDAD CULTURAL	21
FORO SUBREGIONAL DEL CARIBE DE LA SOCIEDAD CIVIL: "CREAR TRABAJO PARA ENFRENTAR LA POBREZA Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA", BRIDGETOWN, BARBADOS, 21 Y 22 DE JULIO DE 2005	21
DEMOCRACIA	21
DERECHOS HUMANOS	21
<i>Derechos humanos de la niñez y la adolescencia</i>	21
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	21
COMERCIO Y FINANZAS	22
TRABAJO	22
CRECIMIENTO CON EQUIDAD	22
EDUCACIÓN	23
IGUALDAD DE GÉNERO	23
DIVERSIDAD CULTURAL	23
CONECTIVIDAD	23

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA REUNIÓN DE MINISTROS DE SALUD Y DE AMBIENTE DE LAS AMÉRICAS, MAR DEL PLATA, ARGENTINA, 16 Y 17 DE JUNIO DE 2005	23
EDUCACIÓN	23
DESARROLLO SOSTENIBLE	24
SALUD	25
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	26
DERECHOS HUMANOS	26
SEMINARIO SUBREGIONAL ANDINO “LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y EL PROBLEMA DEL EMPLEO EN LA SUBREGIÓN ANDINA”, LIMA, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2005	26
DEMOCRACIA	26
TRABAJO	27
FORO HEMISFÉRICO DE LA SOCIEDAD CIVIL: “HACER REALIDAD LOS BENEFICIOS DE LA DEMOCRACIA”, WASHINGTON, DC, 11 Y 12 DE ABRIL DE 2005	28
DEMOCRACIA	28
DERECHOS HUMANOS	29
<i>Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos</i>	29
<i>Cumplimiento de obligaciones internacionales y respeto de las normas internacionales</i>	29
<i>Migración</i>	30
<i>Derechos humanos de la mujer</i>	31
SEGURIDAD HEMISFÉRICA	31
<i>Lucha contra el terrorismo</i>	32
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	32
DESARROLLO SOSTENIBLE	33
CRECIMIENTO CON EQUIDAD	33
EDUCACIÓN	33
<i>Ciencia y Tecnología</i>	33
IGUALDAD DE GÉNERO	33
FORO DE GÉNERO DE LAS AMÉRICAS, BUENOS AIRES, ABRIL DE 2005	34
DERECHOS HUMANOS	34
JUSTICIA	34
<i>Acceso a la justicia</i>	34
COMERCIO Y FINANZAS	34
DESARROLLO SOSTENIBLE	35
TRABAJO	35
CRECIMIENTO CON EQUIDAD	35

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2002-2006

EDUCACIÓN	35
SALUD	35
IGUALDAD DE GÉNERO	36
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	36

REUNIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DE LA XXXVII REUNIÓN DEL GRUPO DE REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CUMBRES (GRIC), PALACIO SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 10 DE MARZO DE 2005.

	36
DEMOCRACIA	36
DERECHOS HUMANOS	37
JUSTICIA	37
<i>Independencia del Poder Judicial</i>	37
SEGURIDAD HEMISFÉRICA	38
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	38
DESARROLLO SOSTENIBLE	38
TRABAJO	38
EDUCACIÓN	39

TALLER “INNOVACIÓN Y TRABAJO DECENTE”, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 7 Y 8 DE MARZO DE 2005

DEMOCRACIA	40
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	40
TRABAJO	40
IGUALDAD DE GÉNERO	41
COMERCIO Y FINANZAS	41
EDUCACIÓN	41
<i>Ciencia y Tecnología</i>	41

FORO VIRTUAL “SOCIEDAD CIVIL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”, OFICINA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (OECT), SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL,

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS	41
EDUCACIÓN	41
<i>Ciencia y Tecnología</i>	41

MESA REDONDA CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA SESIÓN ESPECIAL DE LA CISC: “CREAR TRABAJO PARA ENFRENTAR LA POBREZA Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA”, WASHINGTON, DC, 24 Y 25 DE ENERO DE 2005

DEMOCRACIA	42
DERECHOS HUMANOS	42

<i>Derechos humanos de la niñez y la adolescencia</i>	42
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	42
COMERCIO Y FINANZAS	42
TRABAJO	43
CRECIMIENTO CON EQUIDAD	43
EDUCACIÓN	43
IGUALDAD DE GÉNERO	43
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CUMBRES	43
DIVERSIDAD CULTURAL	44
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, QUITO, ECUADOR, 6 DE JUNIO DE 2004	44
DEMOCRACIA	44
<i>Procesos y procedimientos electorales</i>	44
<i>Lucha contra la corrupción</i>	45
DERECHOS HUMANOS	46
JUSTICIA	47
SEGURIDAD HEMISFÉRICA	48
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	48
DESARROLLO SOSTENIBLE	49
COMERCIO Y FINANZAS	49
FORO HEMISFÉRICO DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUITO, 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2004	50
DEMOCRACIA	50
<i>Procesos y procedimientos electorales</i>	51
<i>Transparencia y buena gestión gubernamental</i>	51
<i>Lucha contra la corrupción</i>	52
DERECHOS HUMANOS	53
JUSTICIA	54
SEGURIDAD HEMISFÉRICA	54
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	55
COMERCIO Y FINANZAS	55
DESARROLLO SOSTENIBLE	56
FORO AVANCES Y DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DE LA CUMBRE EXTRAORDINARIA DE LAS AMÉRICAS, MONTERREY, MÉXICO, 10 DE ENERO DE 2004	56
DERECHOS HUMANOS	56
COMERCIO Y FINANZAS	57

CRECIMIENTO CON EQUIDAD	57
FORO REGIONAL, LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN HEMISFÉRICA EN EL MARCO DE LA CUMBRE EXTRAORDINARIA DE LAS AMÉRICAS, MONTERREY, MÉXICO, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2003	58
DEMOCRACIA	58
<i>Procesos y procedimientos electorales</i>	58
<i>Fortalecimiento de los gobiernos locales</i>	58
<i>Transparencia y buena gestión gubernamental</i>	59
DERECHOS HUMANOS	59
<i>Migración</i>	60
<i>Libertad de opinión y de expresión</i>	60
SEGURIDAD HEMISFÉRICA	60
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	61
CRECIMIENTO CON EQUIDAD	62
COMERCIO Y FINANZAS	63
AGRICULTURA	63
EDUCACIÓN	63
SALUD	63
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	64
FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL CON OCASIÓN DE LA XXXIII ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, SANTIAGO DE CHILE, 7 DE JUNIO, 2003	64
DEMOCRACIA	64
<i>Procesos y procedimiento electorales</i>	64
<i>Transparencia y buena gestión gubernamental</i>	65
DERECHOS HUMANOS	65
SEGURIDAD HEMISFÉRICA	67
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	67
CRECIMIENTO CON EQUIDAD	67
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CUMBRES	67
REFLEXIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA I REUNIÓN INTERAMERICANA DE MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE LA CULTURA EN EL ÁMBITO DEL CIDI, CARTAGENA DE INDIAS, 12 DE JULIO DE 2002	68
DIVERSIDAD CULTURAL	

CONTENTS	<i>ix</i>
INTRODUCTION	2
ROUNDTABLE WITH CIVIL SOCIETY AND SPECIAL SESSION OF THE CISC: “GOOD GOVERNANCE AND DEVELOPMENT IN THE KNOWLEDGE-BASED SOCIETY”, WASHINGTON, DC, UNITED STATES OF AMERICA, MAY 2 AND 3, 2006	69
GOOD GOVERNANCE AND DEVELOPMENT IN THE KNOWLEDGE-BASED SOCIETY	69
PROMOTION OF DEMOCRACY AND THE DECLARATION OF FLORIDA	70
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE DECLARATION AND PLAN OF ACTION OF MAR DEL PLATA	72
PROMOTION OF HUMAN RIGHTS	74
MEETING OF NATIONAL AUTHORITIES ON TRAFFICKING IN PERSONS, ISLA DE MARGARITA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA, MARCH 14 - 17, 2006	
TRAFFICKING IN PERSONS	76
CIVIL SOCIETY REGIONAL FORUM: "CREATING JOBS TO FIGHT POVERTY AND STRENGTHEN DEMOCRATIC GOVERNANCE", BUENOS AIRES, ARGENTINA, SEPTEMBER 6 AND 7, 2005	79
DEMOCRACY	79
<i>Fight against corruption</i>	79
<i>Electoral processes and procedures</i>	80
<i>Transparency and good governance</i>	80
HUMAN RIGHTS	81
<i>Migration</i>	81
<i>Freedom of opinion and expression</i>	81
JUSTICE	81
CIVIL SOCIETY PARTICIPATION	81
CULTURAL DIVERSITY	81
LABOR	82
GENDER EQUALITY	82
EDUCATION	82
<i>Science and Technology</i>	82
SUMMITS FOLLOW-UP PROCESS	83
TRADE AND FINANCE	83
RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES	83
SUSTAINABLE DEVELOPMENT	83

2002-2006 CIVIL SOCIETY RECOMMENDATIONS

EQUITABLE GROWTH	83
ROUND TABLE “THE FUNDAMENTAL ROLE OF SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, INNOVATION AND SCIENCE EDUCATION WITHIN THE FRAMEWORK OF DISCUSSION FOR THE FOURTH SUMMIT OF THE AMERICAS”, BUENOS AIRES, ARGENTINA, SEPTEMBER 5, 2005	84
EDUCATION	84
<i>Science and Technology</i>	84
INTER-AMERICAN FORUM OF AFRO-DESCENDANTS: “PARTICIPATION AND ADVOCACY OF AFRO-DESCENDANTS IN THE FOURTH SUMMIT OF THE AMERICAS”, SAN JOSE, COSTA RICA, SEPTEMBER 1 AND 2, 2005	84
GENDER EQUALITY	84
LABOR	85
EDUCATION	85
<i>Science and Technology</i>	85
EQUITABLE GROWTH	85
HUMAN RIGHTS	85
<i>Fulfillment of international obligations and observance of international standards</i>	85
<i>Migration</i>	86
<i>Human rights of women</i>	86
<i>Human rights of children and adolescents</i>	86
<i>Strengthening systems for the promotion and protection of human rights</i>	86
HEALTH	86
CULTURAL DIVERSITY	86
CARIBBEAN SUB-REGIONAL CIVIL SOCIETY FORUM: “CREATING JOBS TO FIGHT POVERTY AND STRENGTHEN DEMOCRATIC GOVERNANCE”, BRIDGETOWN, BARBADOS, JULY 21 AND 22, 2005	87
DEMOCRACY	87
HUMAN RIGHTS	87
<i>Human rights of children and adolescents</i>	87
CIVIL SOCIETY PARTICIPATION	87
TRADE AND FINANCE	88
LABOR	88
EQUITABLE GROWTH	88
EDUCATION	88
GENDER EQUALITY	89
CULTURAL DIVERSITY	89
CONNECTIVITY	89

CIVIL SOCIETY IN THE MEETING OF HEALTH AND ENVIRONMENT MINISTERS OF THE AMERICAS, MAR DEL PLATA, ARGENTINA, JUNE 16 AND 17, 2005	89
EDUCATION	89
SUSTAINABLE DEVELOPMENT	89
HEALTH	90
CIVIL SOCIETY PARTICIPATION	91
HUMAN RIGHTS	92
SEMINAR WITH ANDEAN COMMUNITY “DEMOCRATIC GOVERNANCE AND THE PROBLEM OF EMPLOYMENT IN THE ANDEAN SUB REGION”, LIMA, PERU, APRIL 14 AND 15, 2005	92
DEMOCRACY	92
LABOR	92
CIVIL SOCIETY HEMISPHERIC FORUM: “DELIVERING THE BENEFITS OF DEMOCRACY”, WASHINGTON, DC, UNITED STATES OF AMERICA, APRIL 11 AND 12, 2005	94
DEMOCRACY	94
HUMAN RIGHTS	94
<i>Strengthening systems for the promotion and protection of human rights</i>	94
<i>Fulfillment of international obligations and observance of international standards</i>	95
<i>Migration</i>	96
<i>Human rights of women</i>	96
HEMISPHERIC SECURITY	96
<i>Fight against terrorism</i>	98
CIVIL SOCIETY PARTICIPATION	98
SUSTAINABLE DEVELOPMENT	98
EQUITABLE GROWTH	98
EDUCATION	99
<i>Science and Technology</i>	99
GENDER EQUALITY	99
GENDER FORUM OF THE AMERICAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA, APRIL 2005	99
HUMAN RIGHTS	99
JUSTICE	100
<i>Access to justice</i>	100
TRADE AND FINANCE	100
SUSTAINABLE DEVELOPMENT	100
LABOR	100
EQUITABLE GROWTH	100

2002-2006 CIVIL SOCIETY RECOMMENDATIONS

EDUCATION	101
HEALTH	101
GENDER EQUALITY	101
RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE	102
MEETING WITH CIVIL SOCIETY IN THE FRAMEWORK OF THE XXXVII MEETING OF THE SUMMIT IMPLEMENTATION REVIEW GROUP (SIRG), BUENOS AIRES, ARGENTINA, MARCH 10, 2005	102
DEMOCRACY	102
HUMAN RIGHTS	102
JUSTICE	103
<i>Independence of the Judiciary</i>	103
HEMISPHERIC SECURITY	103
CIVIL SOCIETY PARTICIPATION	103
SUSTAINABLE DEVELOPMENT	104
LABOR	104
EDUCATION	104
WORKSHOP ON “INNOVATION AND DECENT WORK”, BUENOS AIRES, ARGENTINA, MARCH 7 AND 8, 2005	105
DEMOCRACY	105
CIVIL SOCIETY	105
LABOR	105
GENDER EQUALITY	106
TRADE AND FINANCE	106
EDUCATION	106
<i>Science and Technology</i>	106
VIRTUAL FORUM “CIVIL SOCIETY ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION”, OFFICE OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY (OEST), EXECUTIVE SECRETARIAT FOR INTEGRAL DEVELOPMENT, ORGANIZATION OF AMERICAN STATES	107
EDUCATION	107
<i>Science and Technology</i>	107
ROUNDTABLE WITH CIVIL SOCIETY AND THE SPECIAL SESSION OF THE CISC: “CREATING JOBS TO FIGHT POVERTY AND STRENGTHEN DEMOCRATIC GOVERNANCE”, WASHINGTON, DC, UNITED STATES OF AMERICA, JANUARY 24 AND 25, 2005	107
DEMOCRACY	107
HUMAN RIGHTS	107

<i>Human rights of children and adolescents</i>	107
CIVIL SOCIETY PARTICIPATION	108
TRADE AND FINANCE	108
LABOR	108
EQUITABLE GROWTH	108
EDUCATION	108
GENDER EQUALITY	108
SUMMITS FOLLOW-UP PROCESS	109
CULTURAL DIVERSITY	109
CIVIL SOCIETY PARTICIPATION IN THE THIRTY-FOURTH OAS GENERAL ASSEMBLY, QUITO, ECUADOR,	
JUNE 6, 2004	109
DEMOCRACY	109
<i>Electoral processes and procedures</i>	109
<i>Fight against corruption</i>	110
HUMAN RIGHTS	111
JUSTICE	112
HEMISPHERIC SECURITY	112
CIVIL SOCIETY PARTICIPATION	113
SUSTAINABLE DEVELOPMENT	114
TRADE AND FINANCE	114
CIVIL SOCIETY HEMISPHERIC FORUM, QUITO, ECUADOR, APRIL 26 AND 27, 2004	115
DEMOCRACY	115
<i>Electoral processes and procedures</i>	115
<i>Transparency and good governance</i>	116
<i>Fight against corruption</i>	117
HUMAN RIGHTS	118
JUSTICE	119
HEMISPHERIC SECURITY	119
CIVIL SOCIETY PARTICIPATION	120
TRADE AND FINANCE	120
SUSTAINABLE DEVELOPMENT	121
FORUM “ADVANCES AND CHALLENGES FACING CIVIL SOCIETY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SUMMITS OF THE AMERICAS”, MONTERREY, MEXICO, JANUARY 10, 2004	121
HUMAN RIGHTS	121
TRADE AND FINANCE	121

2002-2006 CIVIL SOCIETY RECOMMENDATIONS

EQUITABLE GROWTH	122
REGIONAL FORUM, CIVIL SOCIETY IN THE PROCESS OF HEMISPHERIC INTEGRATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SPECIAL SUMMIT OF THE AMERICAS, MONTERREY, MEXICO, NOVEMBER 24 AND 25, 2003	122
DEMOCRACY	122
<i>Electoral processes and procedures</i>	122
<i>Local government strengthening</i>	123
<i>Transparency and good governance</i>	123
HUMAN RIGHTS	124
<i>Migration</i>	124
<i>Freedom of opinion and expression</i>	125
HEMISPHERIC SECURITY	125
CIVIL SOCIETY PARTICIPATION	125
EQUITABLE GROWTH	126
TRADE AND FINANCE	127
AGRICULTURE	127
EDUCATION	127
HEALTH	128
RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE	128
CIVIL SOCIETY FORUM ON THE OCCASION OF THE XXXIII GENERAL ASSEMBLY OF THE OAS, SANTIAGO, CHILE, JUNE 7, 2003	129
DEMOCRACY	129
<i>Electoral processes and procedures</i>	129
<i>Transparency and good governance</i>	129
HUMAN RIGHTS	130
HEMISPHERIC SECURITY	131
CIVIL SOCIETY PARTICIPATION	131
EQUITABLE GROWTH	131
SUMMITS FOLLOW-UP PROCESS	132
CIVIL SOCIETY'S REFLECTIONS ON THE FIRST INTER-AMERICAN MEETING OF MINISTERS OF CULTURE AND HIGHEST APPROPRIATE AUTHORITIES IN THE FRAMEWORK OF CIDI, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, JULY 12, 2002	132
CULTURAL DIVERSITY	132

INTRODUCCIÓN

El Proceso de Cumbres de las Américas ha sido un poderoso instrumento para promover la participación de la sociedad civil en la Agenda Interamericana, tanto en las Cumbres de las Américas como en las demás actividades y sectores de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las reformas que, en materia de sociedad civil, puso en marcha la OEA nos coloca, hoy por hoy, a la vanguardia de las organizaciones multilaterales en lo que se refiere a la participación pública.

En el marco de este Proceso, se han desarrollado varias reuniones y foros donde las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han aportado valiosas ideas para la agenda interamericana, reforzando y legitimando el papel de estas organizaciones en el ámbito regional. En este documento presentamos una compilación de las recomendaciones resultantes de las deliberaciones de las OSC en dichos encuentros hemisféricos y regionales.

A través de estas “Recomendaciones de la Sociedad Civil 2002-2006” la Secretaría de Cumbres de las Américas de la OEA—cumpliendo su rol de encargada de coordinar las actividades relacionadas con la participación de la sociedad civil en el proceso de Cumbres—busca resaltar la importancia de la sociedad civil en el sistema interamericano, haciendo visibles y accesibles a toda la comunidad de las Américas los aportes y recomendaciones hechas por las OSC. De esta manera, se asegura la transparencia en el resultado de la participación de estas organizaciones en las actividades de la OEA, y también se garantiza que los gobiernos y los responsables de la toma de decisiones en el sistema de la OEA puedan contar con un valioso instrumento de consulta.

La OEA y el Proceso de Cumbres de las Américas se basan en la cooperación y en valores compartidos, y por lo tanto, deben ser entendidos como espacios inclusivos y abiertos que sean permeables a todas las voces de nuestras sociedades. Por ello las OSC, como actores centrales de las democracias en la Américas, tienen en este Proceso un lugar muy importante. Y este documento es el reflejo de ello.

*Secretaría de Cumbres de las Américas
Organización de los Estados Americanos*

INTRODUCTION

The Summits of the Americas Process has been a powerful instrument for promoting civil society participation in the Inter-American Agenda, not only within the Summits of the Americas Process but also in other activities and sectors of the Organization of American States (OAS). Recognizing the important contributions of civil society, the Member States of the OAS approved resolutions to further promote civil society involvement in all its areas of work, which has made the OAS the vanguard multilateral organization in terms of citizen participation.

Several meetings and forums have been held in the framework of this process in which civil society organizations (CSOs) have contributed valuable ideas to the inter-American agenda and strengthened and legitimized the role of such groups across the region. This document contains a compilation of the recommendations that have come out of the discussions of CSOs at those hemispheric and regional encounters.

Through this compilation, “2002-2006 Civil Society Recommendations”, the Summits of the Americas Secretariat of the OAS, in performing its assigned role of coordinating activities connected with civil society participation in the Summits Process, seeks to enhance the importance of civil society in the inter-American system, and to draw attention to, and make accessible the whole community in the Americas, the contributions and recommendations of CSOs. This compilation ensures the transparency of the results of the participation of these organizations in OAS activities. It also ensures that governments and decision makers in the OAS system have a valuable consultative instrument at their disposal.

The OAS and the Summits of the Americas Process is based on cooperation and shared values. Therefore, they should be regarded as inclusive, open forums in which all voices in our societies are able to make themselves heard. Accordingly, this document reflects the very important place that CSOs occupy in Summits Process and as key players in the democracies of the Americas.

*Summits of the Americas Secretariat
Organization of American States*

MESA REDONDA CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA SESIÓN ESPECIAL DE LA CISC: “GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”, WASHINGTON, DC, 2 Y 3 DE MAYO DE 2006

GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Consideraciones

- Al hablar de sociedad de la información, y sociedad del conocimiento, con frecuencia existe una sobre ponderación del aspecto tecnológico, y en esta sobre valoración, además se dejan de lado las tecnologías tradicionales frente a las digitales (emisoras de radio comunitarias, televisión comunitaria, video, etc.)
- En la fórmula “sociedad del conocimiento” se deja fuera generalmente la reflexión sobre la producción del conocimiento y su transformación en aplicaciones concretas que aporten al bienestar de las personas y sociedades.

Principios

- Elevar el debate en el sentido que la sociedad del conocimiento no sólo se refiera a temas de infraestructura y tecnología, sino que debe darse dentro del marco del respeto y protección de los derechos humanos y la obligación de los Estados de garantizarlos en tanto responsabilidad pública.
- Las tecnologías de información y comunicación (TIC) no deben ser vistas sólo como herramientas, sino como factores estratégicos para el diseño de políticas de desarrollo. Esto significa que debe existir un acuerdo sobre protocolos de conectividad, accesibilidad, usabilidad, inclusión, respeto a la diversidad, asegurando calidad, eficacia y eficiencia de dichas tecnologías.
- En el camino hacia la construcción de una sociedad del conocimiento, el desarrollo local de capacidades no sólo debe orientarse a las capacidades técnicas, sino a aquellas que propicien la autonomía y autosuficiencia en la gestión, organización, y desarrollo sustentable.
- Cualquier iniciativa de gestión del conocimiento en el continente, deberá considerar como ejes transversales la interculturalidad, interamericanidad, y en general, todos los aspectos de diversidad que son constitutivos de la región.
- Cualquier acuerdo en materia de acceso y uso de TIC, tanto las tecnologías tradicionales como el conjunto de tecnologías digitales, así como las que se deriven de las emergentes convergencias de medios, debe asegurar que todos los grupos y segmentos de la población contarán con condiciones de acceso equitativas.
- El rezago en conocimientos científicos y tecnológicos, su mala distribución regional y la inequidad para su alcance que marcadamente discrimina a las mujeres, es un tema que debe ser resuelto para alcanzar niveles adecuados en la producción y distribución de nuevos saberes. Las instituciones de educación superior, los centros de investigación y desarrollo tecnológico tienen un papel central en las dinámicas hacia la construcción de la sociedad del conocimiento.
- En el escenario de la sociedad del conocimiento, es preciso reconocer un principio de corresponsabilidad entre los gobiernos, el sector privado y la participación activa de las organizaciones civiles.

Recomendaciones

- Los Estados Miembros consideren asignaciones suficientes y equilibradas que aseguren la distribución y acceso equitativo a infraestructura y servicios de comunicación y telecomunicación

y aseguren el derecho humano del libre acceso a la información pública y a la libertad de expresión a través de todos los medios técnicos y mediante todas las prácticas legales.

- Los gobiernos aseguren asignaciones suficientes para el desarrollo de investigación científica y de innovación tecnológica propia y articulen programas de transferencia de conocimientos entre instituciones de educación superior y centros de investigación en la región. Asimismo, los gobiernos deben aceptar que en una sociedad del conocimiento basada en los principios de pluralidad y respeto a la diversidad, se obligan al reconocimiento de los saberes tradicionales y deben asegurar su sustentabilidad. Así también, recomendamos convocar a las instituciones de educación superior a contribuir con todas las iniciativas vinculadas con los temas de gobernabilidad, desarrollo y sociedad del conocimiento en general, y en particular en la formación de recursos humanos.
- Los Estados propicien el mejoramiento y articulación de circuitos de distribución del conocimiento aprovechando la infraestructura existente y reforzando nueva infraestructura (Internet 2, CLARA). Asimismo continuar en la búsqueda de mejores prácticas en la aplicación de los principios de propiedad intelectual. Los gobiernos, las agencias internacionales y las instituciones de educación superior, deben reforzar políticas y programas de fortalecimiento de las capacidades de los docentes mediante la incorporación de TIC, no sólo en aspectos técnicos, sino en el uso y aprovechamiento de los saberes para el fortalecimiento de competencias educativas y de promoción del desarrollo.
- Se adopten acciones positivas que permitan el acceso al conocimiento y el desarrollo de capacidades con el uso de TIC, así como el ejercicio pleno de sus derechos a los afrodescendientes, los pueblos indígenas, las poblaciones desplazadas, los migrantes, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y los jóvenes y en general, a todos los grupos social y económicamente desfavorecidos.
- Las TIC sean herramientas que se sumen a los recursos que los ciudadanos deben tener en las sociedades democráticas para asegurar procesos de rendición de cuentas, transparencia en la gestión de los gobiernos en sus distintos niveles, por ejemplo, con la incorporación del concepto de compras y obras públicas como un sistema de adquisición que no sólo hace más eficiente la inversión de los fondos del Estado, sino que aumente la publicidad, el control social, y disminuye el riesgo de corrupción en los países.
- Los gobiernos y las agencias internacionales correspondientes, promuevan el uso de las TIC para el logro de los Objetivos del Milenio en la región, y de manera especial en lo relativo a la lucha por la reducción del VIH/SIDA, malaria y tuberculosis.
- Los gobiernos establezcan políticas y tratados que aseguren la protección, y el respeto íntegro de las poblaciones migrantes a sus derechos civiles, laborales y humanos, Esta recomendación se aplica tanto a la atención de los migrantes transfronterizos, como a las migraciones internas. Un componente de dichas políticas será la incorporación de TIC y la generación de estrategias y recursos para la creación de capacidades tanto en las comunidades de origen, como en los sitios de destino de los migrantes.

PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA DECLARACIÓN DE FLORIDA

- Solicitamos a los gobiernos diseminar y promover la Carta Democrática Interamericana a la sociedad civil y a la ciudadanía como asimismo educar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) sobre las potencialidades y limitaciones de la OEA en su papel sobre los asuntos interamericanos.

- Recomendamos a los Estados Miembros a incrementar los recursos que destinan a la OEA para asegurar que esta institución cumpla con su misión y los mandatos resultantes del Proceso de Cumbres de las Américas que los mismos Estados libremente han firmado.
- Solicitamos que en la Declaración de Santo Domingo, la sociedad civil sea considerada con carácter de Promotores de la Democracia, entendida esta como el poder de los pueblos, así como también considerar los Objetivos de Desarrollo del Milenio como un piso mínimo que debe contar cada país y no como una meta a ser alcanzada por nuestros países.
- Instamos a los gobiernos a impulsar mecanismos que den seguimiento a los mandatos de las Cumbres de las Américas y de la Asamblea General de la OEA a fin de asegurar que las Declaraciones y Planes de Acción no queden como letras muertas sino se constituyan en instrumentos efectivos que orienten agendas con acciones específicas.
- Solicitamos que los gobiernos establezcan mecanismos de seguimiento que monitoreen las acciones que los gobiernos realizan para la superación de la pobreza y la integración de los grupos excluidos (entre ellos, mujeres, etnias, discapacitados, personas víctimas de la violencia política armada, pueblos indígenas, etc.)
- Instamos a los gobiernos a instaurar y/o mejorar marcos normativos que regulen el acceso a la información y a utilizar las TIC como una herramienta que agilice y favorezca el acceso de las personas a la información pública en poder del Estado.
- Solicitamos incorporar las TIC a los sistemas judiciales con el propósito de lograr mejorar su eficiencia, transparencia y así promover agilidad en la resolución de los casos.
- Requerimos a los Estados Miembros impulsar campañas que fomenten la participación de las mujeres en la vida política y pública de los Estados para lograr el balance de género, la cual debe contar con mecanismos que monitoreen el cumplimiento de este postulado.
- Invitamos a los Departamentos Técnicos y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, como así también a los Estados Miembros y sus respectivas agencias de cooperación a apoyar las iniciativas de redes hemisféricas de la sociedad civil cuyo propósito es monitorear, apoyar, o contribuir al efectivo cumplimiento de los mandatos surgidos del Proceso de Cumbre de las Américas y de las Actividades de la OEA.
- Requerimos que se apoye la gobernabilidad de la región mediante el uso de las TIC, así como también el involucramiento de la sociedad civil en los procesos relacionados con la revisión de la democracia en el hemisferio, especialmente en relación con los sistemas de alerta temprana a las crisis de la democracia.
- Recordamos a los Estados Miembros la vital importancia de articular canales efectivos de participación pública a nivel nacional estableciendo mecanismos de diálogos permanentes y trabajos colaborativos que aporten a la gobernabilidad democrática, cuyo ejemplo deben ser las cancillerías de cada país.
- Recomendamos estudiar mecanismos que ayuden a combatir y prevenir el mal uso del Internet a fin de evitar la propagación de practicas nocivas para el desarrollo, tales como la pornografía infantil, el ciber-espionaje, los virus informáticos, y propagación de hackers, entre otros.
- Con el fin de avanzar en la lucha regional contra la corrupción solicitamos:
 - La incorporación de las TIC en los mecanismos de seguimiento en la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como también con el fin de transparentar y agilizar el proceso de negociación de la segunda ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2002-2006

- Que los Estados Miembros que aún no han firmado la Convención Interamericana contra la Corrupción, como demás instrumentos internacionales en la materia, lo hagan de inmediato. Igualmente a los Estados que no se han incorporado al MESICIC.
 - Que se informe a la sociedad civil sobre los avances en el cumplimiento de la resolución de la Asamblea General de la OEA AG/RES.2071 “.,” que fija el año en curso como Año Interamericano contra Corrupción.
 - Que se formalice la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las reuniones del Comité de Expertos del MESICIC y que se reincorporen las visitas de seguimiento al Mecanismo.
 - Que las organizaciones de la sociedad civil puedan presentar sus respuestas al cuestionario dentro de los 30 días siguientes a la fecha otorgada a los Estados.
 - Que los poderes legislativos aprueben iniciativas legales que permitan incluir los delitos contemplados en el Artículo 6 de la CICC en sus legislaciones.
 - Que durante el año 2006 sesione la Conferencia de Estados Parte del MESICIC.
- Consideramos fundamental impulsar mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos, los cuales son centrales y estratégicos para la promoción de la democracia. Nuestras democracias se debilitan en la medida en que se transgreden los derechos fundamentales de las personas.
 - Instamos a los gobiernos a mejorar los espacios de diálogo con la sociedad civil en las actividades oficiales de la OEA a fin de garantizar que sea un efectivo intercambio de ideas y propuestas, construyendo un diálogo productivo y no monólogos unilaterales que sólo presentan diversas agendas sin relacionarse unas con otras.
 - Solicitamos a los Estados Miembros que en el marco de fortalecer la participación de la sociedad civil se ofrezcan espacios de capacitación, información y articulación permanente con los organismos de la OEA.

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y LA DECLARACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN DE MAR DEL PLATA

Inclusión y protección de poblaciones vulnerables

- Se propone que los programas de la OEA destinados a la inclusión y protección de poblaciones vulnerables tengan en cuenta el rol de la cultura e identidad.
- En el tema de empleo de poblaciones jóvenes, es necesario que se busquen formas creativas para utilizar las tecnologías de información y multimedia como herramientas que posibiliten la documentación de la auto-corrección de conductas no apropiadas. Asimismo, se propone el acceso y fortalecimiento de centros comunales en los que los jóvenes puedan congregarse y eliminar el aislamiento que los hace caer en la criminalidad. También se propone que se haga un esfuerzo por establecer formas que propicien y celebren las experiencias exitosas de los jóvenes en la contribución del desarrollo social y económico.
- Se propone que los Estados faciliten el acceso de la población femenina a programas para la generación de autoempleo. Paralelamente, que se facilite el acceso a información sobre salud sexual y reproductiva a jóvenes de ambos sexos.
- Se propone romper con la tendencia a establecer programas asistencialistas para solucionar los problemas de los grupos más vulnerables, más bien se recomienda poner énfasis en la sustentabilidad de los mismos.
- Se insta a los Estados a reafirmar la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra con Discapacidad. Se deben hacer gestiones que apoyen la

integración laboral de personas discapacitadas a través del uso de políticas de capacitación organizada e inclusiva de modo que se tengan las habilidades y cualidades de empleo, autoempleo y micro-emprendimiento.

- Se recomienda a los Estados garantizar, a través de gestiones de sensibilización de la integración de la comunidad discapacitada en el marco laboral a los sectores público y privado a partir de los avances legislativos que se han logrado en muchos países.
- Se recomienda a los Estados diseñar e implementar políticas y acciones afirmativas, tomando en cuenta los temas de raza y género como causa y no sólo como efecto de la pobreza.

Modelo de desarrollo e inserción en el sistema económico internacional

- La situación actual, en un contexto de globalización, de generalización de la sociedad del conocimiento y de asimetrías de condiciones de competencia con otras regiones, hace necesaria una revisión del modelo económico de inserción de los países de América Latina y el Caribe con miras hacia acciones por parte de nuestros Estados para aumentar la ventaja competitiva de nuestras naciones a través del aumento de valor agregado de nuestra producción y de la búsqueda de una complementariedad productiva regional. Asimismo, se recomienda estudiar la factibilidad del uso de sistemas alternativos, pero paralelos de valoración, en el intercambio y comercio de bienes y servicios.

Generación de empleo

- Se recomienda a los Estados Miembros a pensar en nuevos modelos de trabajo para nuestras poblaciones que estén de acorde con el respeto de los derechos humanos de los trabajadores.
- Se recomienda crear empleo y trabajo en sectores de alta tecnología pero sin descuidar la generación de empleo en sectores complementarios aunque pertenezcan a sectores tradicionales de la economía.

Rol de la sociedad civil y los mandatos y compromisos adquiridos de los Estados

- Se recomienda que la sociedad civil sea vigilante de los compromisos que los Estados han suscrito en el marco del proceso de las Cumbres de las Américas y de ser necesario, que la OEA establezca los mecanismos para revisar dichos compromisos. Asimismo, se recomienda que la OEA genere modalidades de promoción de relacionamiento de los Estados con la sociedad civil.
- Se insta a los Estados a cumplir con lo dispuesto en los artículos 64 y 66 de la Declaración y Plan de Acción de Mar del Plata referidos a reafirmar una gobernabilidad democrática transparente y responsable; que la rendición de cuentas sea un instrumento fundamental para el logro de la transparencia y la eficiencia de los recursos administrados por los gobiernos; y que los Estados cumplan con el llamado a implementar la Convención Interamericana contra la Corrupción y participen plenamente del Mecanismo de Seguimiento.
- También se insta a cumplir con lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la Declaración y Plan de Acción de Mar del Plata para que se identifiquen antes de diciembre de 2006 iniciativas concretas de cooperación e intercambio de experiencias para el desarrollo de capacidades técnicas en los países que contribuyan con la plena aplicación de las normas de la Convención Interamericana contra la Corrupción y con el fortalecimiento del MESICIC, dando especial consideración a las recomendaciones emanadas de la primera ronda de dicho Mecanismo.
- Se recomienda a los Estados en poner esfuerzo al monitoreo y la medición de la efectividad de los programas nacionales y regionales.

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

- Aprovechar los avances tecnológicos en la información y las comunicaciones para dar a conocer buenas prácticas y bases de datos, con el objeto de fortalecer a la sociedad civil en su rol contralor de la gestión estatal.
- Mejorar los canales para la participación de la sociedad civil, especialmente en aquellos espacios donde se discutan políticas que puedan impactar negativamente al respeto de los derechos humanos en las Américas.
- Fortalecer los órganos de protección de los derechos humanos mediante el reconocimiento de la independencia y la autonomía del Sistema interamericano de derechos humanos, la garantía de un presupuesto que permita el funcionamiento y la eficacia de los mismos, el acatamiento de sus decisiones y el establecimiento de mecanismos para sancionar los incumplimientos.
- Considerar los criterios de idoneidad, independencia, moralidad y competencia notorias para proponer candidatos y candidatas a ocupar cargos en los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese marco, además, se debe atender la paridad de género.
- Ampliar los espacios de participación de la sociedad civil en el proceso de selección de las y los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CIDH”) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”). Para ello, además de continuar publicando en Internet los currículum vitae de las personas aspirantes, entre otras acciones se deben impulsar debates públicos con las mismas.
- Integrar un grupo de trabajo que promueva intercambios regionales periódicos sobre las mejores prácticas para el cumplimiento de recomendaciones de la CIDH y la ejecución de sentencias de la Corte, con la participación de los Estados y organizaciones de la sociedad civil, la CIDH y la Corte, y expertos y expertas en el tema.
- Reconocer que las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel apartidista, fundamental, competente y proactivo en la solución de problemas regionales.
- Urgir a los Estados Miembros a proteger a defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo.
- Instar a las oficinas nacionales de las defensorías del pueblo, a jugar un papel más activo en la difusión de los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos.
- Instar a los Estados Miembros de la OEA que no lo han hecho, a que ratifiquen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos interamericanos e internacionales.
- Instar a los Estados Miembros de la OEA que no lo han hecho, a que reconozcan la competencia contenciosa de la Corte.
- Instar a los Estados Miembros a crear mecanismos legales en el ámbito nacional, con el fin de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones y sentencias del sistema interamericano de derechos humanos.
- Exhortar al Consejo Permanente de la OEA a recibir y discutir regularmente los informes especiales de los países, los informes de los relatores especiales y el informe anual de la CIDH.

- Incluir en el Proyecto de Declaración de Santo Domingo la perspectiva de derechos humanos con especial énfasis en los problemas de desigualdad social en el hemisferio, para buscar formas de superarlos y garantizar el acceso universal a la sociedad del conocimiento.
- Incluir en el Proyecto de Declaración de Santo Domingo el rechazo expreso al racismo y la exclusión social.
- Avanzar en la aprobación de una Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que haga mayor énfasis en la exclusión por razones de género.
- Incorporar a la Declaración de Santo Domingo que, en el marco de la sociedad del conocimiento, se garantice el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
- Solicitar a los Estados Miembros que den un tratamiento respetuoso de los derechos humanos a la población deportada y que, además, establezcan mecanismos de colaboración e intercambio de información entre sí sobre personas deportadas.
- Instar a los Estados Miembros a eliminar la práctica de expulsión masiva de personas.
- Recordar que todas las personas que habitan en el continente americano gozan de todos los derechos humanos de manera indivisible e interdependiente, sin importar cuál sea su nacionalidad y en qué país residan.
- Reconocer la condición especial de vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia en la región, y promover su participación en las decisiones que les afectan.
- Solicitar informes de país sobre avances en el cumplimiento del derecho a la información, en el marco de la Declaración de Nuevo León.
- Apoyar y colaborar con iniciativas que busquen establecer estándares mínimos de protección al derecho a la información como la gratuidad, el acceso libre y otros.
- Solicitar a los Estados Miembros la creación de un fondo de asistencia a las víctimas, para garantizar el acceso a la justicia en el sistema interamericano de derechos humanos.
- Solicitar a los países señalados por la CIDH como “de atención especial” que adopten las medidas necesarias para salir de esa categoría y superen, además, las causas que los colocaron dentro de la misma.
- Incluir a la sociedad civil en la recomendación 14 del Proyecto de Resolución “Apoyo a la Agenda Hemisférica de la Sociedad del Conocimiento”, cuya redacción quedaría redactada así: *“Encomendar a la Secretaría General la creación de un espacio electrónico de la OEA dedicado a los ciudadanos de las Américas y a las organizaciones de la sociedad civil, de fácil acceso y manejo, en el cual se privilegien aquellas actividades y programas interamericanos que el individuo y la sociedad civil pueden usar, tales como las que se relacionan con la promoción y protección de los derechos humanos y el programa de becas de la OEA.*
- Requerir al Estado colombiano la protección eficaz de los derechos humanos de sus comunidades afrodescendientes desplazadas.
- Solicitar a la República Dominicana que cumpla la sentencia de la Corte en el caso Yean y Bosico, teniendo en cuenta que no puede existir una sociedad de conocimiento mientras se afecte el derecho a la educación.

- Solicitar se le brinde más atención a los informes de la CIDH y las conclusiones de la Corte por parte de los Estados Miembros y la Secretaría General de la OEA. Exhortar al Secretario General convocar una reunión entre los varios Jefes de los Departamentos de la Secretaría General y los representantes de los varios órganos del sistema interamericano de derechos humanos para asegurar coherencia en la planificación de elecciones, la calidad de la ciudadanía y la prevención de conflicto.
- Urgir a los Estados Miembros identificar las medidas necesarias que les permitan actuar como garantes colectivos del sistema interamericano de derechos humanos.
- Urgir a los Estados Miembros adoptar las medidas legislativas necesarias para asegurarse de que los mecanismos legales existan para implementar internamente las decisiones adoptadas por la Comisión y la Corte. Además, las magistraturas deben aplicar completamente las provisiones del tratado y la jurisprudencia que emana de la Comisión y de la Corte.
- Impulsar a la OEA a apoyar a los defensores de los derechos humanos quienes son los abogados de primer orden de los derechos civiles, políticos y sociales y cuyo trabajo todavía implica el riesgo de la represión.

I. REUNIÓN DE AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, ISLA DE MARGARITA, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 14 AL 17 DE MARZO DE 2006

TRATA DE PERSONAS

Principios Generales

- Es de fundamental importancia que en la prevención, el combate y la represión de la trata de personas y la protección de las víctimas de trata, los Estados Miembros consideren como marco de referencia el corpus juri de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional de los refugiados, así como adopten un enfoque transversal de género y edad.
- Es necesario que los Estados Miembros aborden la problemática de la Trata de Personas reconociendo las especificidades asociadas a sus diversos fines y manifestaciones, según afecten a distintos sectores: niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres y personas solicitantes de asilo y refugio.
- Hasta hoy enfrentamos una lucha desigual frente a las redes de crimen organizado transnacional y nacional. Los Estados y la sociedad civil contamos con recursos insuficientes y dispersos. Es urgente la asignación de los recursos necesarios por parte los Estados Miembros, que potencien la acción coordinada con la sociedad civil y los gobiernos para enfrentar este problema desde un mejor posicionamiento.
- El carácter transnacional de algunas expresiones de este delito hace impostergable la implantación y puesta en marcha por parte de los Estados Miembros de mecanismos de coordinación bilateral y multilateral, especialmente para proporcionar protección para testigos, víctimas y sus familias.
- Instamos a los Organización de los Estados Americanos a que impulse el reconocimiento y la acción de sus Estados Miembros para el combate de la modalidad de Trata interna, así como para la debida protección de las víctimas de esta modalidad de trata.
- Exhortamos a que los Estados Miembros establezcan mecanismos participativos para el seguimiento, monitoreo evaluación de las políticas publicas y de la eficacia del marco legal

nacional, para la reformulación de los programas y el perfeccionamiento o fortalecimiento de los ya establecidos.

- Instamos a la Organización de los Estados Americanos para que se constituya en garante de la continuidad de las acciones emprendidas por sus Estados Miembros en este ámbito con el fin de que éstas sean sostenidas en el tiempo hasta el logro de los objetivos buscados, más allá de los cambios de administración gubernamental.

Prevención

- Reconocer la importancia de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos culturales, así como el impacto de la creación de políticas públicas dirigidas a la población mas vulnerables recogidos en el Documento Declarativo.
- Profundizar y fortalecer el Estado de Derecho como requisito esencial para combatir la trata de personas.
- Garantizar el derecho a la educación de todas las personas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes como medida de prevención de la trata de personas.
- Coordinar las políticas laborales de inmigración y la demanda de trabajo insatisfecha y asegurar los derechos de los trabajadores inmigrantes sin documentos para evitar su explotación.
- Focalizar las políticas públicas enfocadas a campañas de prevención hacia grupos vulnerables en zonas geográficamente identificadas para la trata de personas, en colaboración con la sociedad civil.
- Establecer fondos económicos contra la trata de personas por parte de los estados para el trabajo conjunto con la sociedad civil.
- Establecer mecanismos de control nacionales e internacionales para la emisión de documentos (pasaportes y visas) con el objeto de evitar la falsificación de los mismos por redes organizadas con fines de trata de personas.

Persecución

- Reconocer que es necesario avanzar en la armonización de las legislaciones de los países de la región con las normas del derecho internacional que existen al respecto. Si bien regulan la trata de personas, algunos de estos cuerpos legales lo hacen sin abarcar todas las formas de trata; o tienden a reproducir los vacíos existentes en la normativa internacional (solo se tipifica como delito la trata internacional dejando impune la trata interna de personas, solo se sanciona la trata con fines de explotación sexual comercial, entre otros).
- Garantizar la persecución penal de los autores intelectuales y materiales del delito de trata en cualquiera de sus modalidades así como sancionar la corrupción de los funcionarios públicos u otras autoridades de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y a su Protocolo Facultativo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. Los tratantes pueden ser personas naturales (físicas) o jurídicas (morales) y que provienen de todas las clases sociales, tales como individuos, familiares, redes pequeñas y grandes del crimen organizado, diplomáticos, policías, funcionarios públicos corruptos, agencias de viaje o de trabajo, empleadores de las personas tratadas.
- Reconocer que la Trata de Personas es un crimen que termina impune en muchos países de la región. Existen pocos datos disponibles proporcionados por parte de las dependencias de los Gobiernos.

- Garantizar que todos los investigadores y fiscales tengan la formación adecuada para reunir las pruebas necesarias que posibiliten la condena de los culpables. La falta de la evidencia debido a la poca formación para recoger pruebas efectivas y presentar los casos por parte de investigadores, policías y fiscales; imposibilita probar la existencia del crimen. Reconocer que la falta de formación técnica o especializada por parte de los funcionarios públicos y otras autoridades que tienen posibilidad de entrar en contacto con las víctimas de trata. Existe confusión entre trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Es crucial proporcionar formación a las agencias de servicios y a los organismos de justicia para la correcta identificación y asistencia a las víctimas a fin de sensibilizar sobre su situación desde su perspectiva. La mayoría de las víctimas no son conscientes de que están siendo sometidas a trata hasta que llegan a su destino, lo que hace difícil la tarea de identificar al tratante.
- Garantizar que la persona víctima de trata tenga el derecho de acceso a la justicia cualquiera sea su estatus legal para denunciar a los tratantes e iniciar un proceso judicial en su contra. Esta opción no es muy utilizada porque, las personas tratadas son deportadas antes de presentar su denuncia.
- Garantizar la realización de programas de protección para testigos, peritos y víctimas de trata y sus familias. Reconocer la dificultad que tienen las víctimas a la hora de colaborar y testificar en una investigación así como asegurar que no sean traumatizados doblemente. Es necesario proteger los derechos de las víctimas y asegurar que los beneficios que obtengan a partir de la investigación no dependan de su cooperación.
- Realizar procesos de monitoreo y seguimiento a esta problemática que generen registros sistemáticos de los casos de trata con la finalidad de contar con bases de datos que permitan tener estadísticas actualizadas y segregadas por género, edad, tipo de trata, tratantes, número de investigaciones realizadas y sentencias dictadas.

Protección y Asistencia a las Víctimas

- Garantizar que los derechos humanos de las víctimas deben ser centrales y prioritarios a la hora de adoptar medidas legislativas, políticas y acciones estratégicas.
 - Derecho a la no discriminación;
 - Derecho a entrar y salir libremente del propio país;
 - Derecho a un retorno seguro y voluntario que incluya asistencia para la reintegración;
 - Derecho a la protección de las víctimas, testigos y sus familias frente a daños, amenazas e intimidación;
 - Obligación de respetar el derecho de asilo, refugio o proporcionar permiso de residencia temporal en los casos correspondientes;
 - Derecho al respeto de la privacidad y confidencialidad de las víctimas y testigos;
 - Derecho a compensación, restitución y reparaciones; y,
 - Derecho a la asistencia y servicios adecuados que estén de acuerdo con la cultura y lenguaje de dicha víctima
- Reconocer la importancia de proporcionar plataformas y herramientas efectivas a las víctimas para que puedan tomar control de sus vidas y ejercer sus derechos. Después de no tener ningún control durante la victimización, es extremadamente importante valorar el derecho de las mismas a la autodeterminación. Es necesario facilitar que las víctimas aprendan y desarrollen sus habilidades de líderes y sean independientes de tal manera que puedan tener una recuperación y reinserción social y familiar.
- Reconocer el trauma sufrido y otorgar prioridad a los servicios de la salud mental para que las víctimas puedan reconstruir sus vidas y ser testigos efectivos en una investigación. Es importante prestar asistencia que incluya la reunificación familiar, un componente de salud mental, salud

física y reconocer la importancia y urgencia de facilitar a las víctimas ayuda para lograr documentación, empleo, formación, orientación cultural, alojamiento y otras necesidades básicas.

Cooperación

- Crear un Grupo de Trabajo permanente en la OEA integrado por personas que sean puntos focales en materia de Trata de Personas en sus respectivas unidades trabajando en áreas relacionadas como derechos humanos, migración, mujeres, temas laborales y niñez. El Grupo de Trabajo será responsable de incorporar el tema de Trata de Personas en sus respectivos mandatos. Los representantes informaran periódicamente al Grupo sobre el progreso y logros obtenidos en su trabajo.
- Desarrollar un Plan de Acción Regional sobre Trata de Personas con resultados y marco temporal específico en el que se incluya una colaboración estrecha entre los Estados Miembros, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales.
- Promover acuerdos regionales sobre:
 - Intercambio de información, cooperación e identificación inmediata de los tratantes;
 - Extradición de aquellos presuntos autores del crimen de trata;
 - Repatriación voluntaria de personas que han sido sujetas a trata;
 - Protección de personas que hayan sido sujetas a trata, sus familias y los testigos;
 - Reunificación familiar de las víctimas.
 - Desarrollar una red de agencias de servicios sociales para mejorar la capacidad de estados y agencias a dar servicios a las víctimas;
 - Identificación, comiso e incautación de bienes de los tratantes;
 - Identificación de víctimas de trata que han sido repatriadas, pueden testificar en casos contra tratantes y pueden tener derecho a recibir una reparación del daño;
 - Facilitación de la cooperación entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil en países de origen, tránsito y destino;
- Promover un dialogo regional sobre acuerdos en material de inmigración, derechos laborales y estándares internacionales de derechos humanos.
- Realizar investigaciones de ámbito regional y con enfoque en el tema de trata de personas, incluyendo visitas en el terreno por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

II. FORO REGIONAL CON LA SOCIEDAD CIVIL: “CREAR TRABAJO PARA ENFRENTAR LA POBREZA Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA”, BUENOS AIRES, 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2005

DEMOCRACIA

- Reconocer expresamente que la democracia conlleva el compromiso implícito - y no sólo la promesa - de ayudar a todos los ciudadanos a alcanzar su potencialidad en la sociedad.
- Ahondar en conceptos como descentralización y gobierno local, entendiendo que son el único camino para que los beneficios de la democracia alcancen a todos los ciudadanos.
- Reconocer la importancia de los derechos ambientales, junto con los económicos, sociales y culturales, como ejes fundamentales del funcionamiento de las sociedades democráticas.
- Fortalecer el ejercicio efectivo de la democracia representativa a partir del compromiso con la Carta Democrática Interamericana.

Lucha contra la corrupción

- Promover, a través de políticas públicas y organismos responsables, la incorporación de la lucha contra la corrupción, y específicamente contra el soborno, en las iniciativas de responsabilidad social empresarial. Asimismo, promover prácticas de autorregulación en el sector privado destinadas al desarrollo de la responsabilidad social empresarial, el buen gobierno corporativo y a la ética organizacional.
- Fortalecer las administraciones y jurisdicciones laborales. Este fortalecimiento se debe efectuar a través de la implementación de políticas, mecanismos y estándares de transparencia y de combate a las prácticas corruptas, especialmente aplicables en las instituciones públicas destinadas a la protección laboral y social, así como de la promoción de mayores niveles de independencia, transparencia e integridad en los tribunales de justicia que resuelven los conflictos del trabajo.
- Tomar acciones efectivas de combate contra la corrupción, la delincuencia organizada, la trata de personas, rechazando la prostitución como trabajo.
- Reforzar la importancia de la lucha contra la corrupción en todas sus formas -pública y privada- y por todos los medios, y remarcar la necesidad que los países se adhieran a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Remarcar además la centralidad del fortalecimiento institucional orientado a la participación ciudadana, abriendo espacios para permitir el seguimiento de políticas públicas en especial aquellas orientadas a la transparencia.

Procesos y procedimientos electorales

- Garantizar elecciones limpias y libres.

Transparencia y buena gestión gubernamental

- Garantizar el compromiso de los gobiernos hacia la rendición de cuentas a en todos sus niveles, informando sobre la evolución del gasto estatal.

DERECHOS HUMANOS

- Generar políticas que promuevan el acceso a empleos dignos teniendo en cuenta asuntos de carácter étnico, de género y de edad, así como al universo de grupos vulnerables como los refugiados y las personas discapacitadas.
- Generar mecanismos que garanticen el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, reclamándose la adecuación de los derechos internos a los mandatos internacionales en esta materia.
- Asegurar que las políticas de empleo y aquellas que buscan combatir la pobreza y la desigualdad tengan como marco el respeto y la promoción de los derechos humanos y que en caso de conflicto entre los DH laborales y otros derechos, especialmente de naturaleza económica, se respete la primacía de los DH.
- Crear políticas públicas orientadas a la inclusión de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en las actividades económicas, políticas y ambientales.
- Promover el fortalecimiento del rol del Estado y sus obligaciones indelegables de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Los procesos de debilitamiento del Estado limitan las capacidades de los mismos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

- Fortalecer las normas y mecanismos orientados a garantizar la defensa de los derechos humanos y su primacía sobre las políticas económicas y de seguridad, ya que los procesos de integración económica y los tratados de libre comercio en la región no siempre han garantizado la plena vigencia de los derechos humanos. En el mismo sentido, reconocer el rol esencial que desempeñan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Reforzar la importancia de la Carta Social de las Américas y hacer de esta, el medio para una definición integral de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos.
- Ratificar todos los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
- Garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
- Cambiar la expresión “protección social” por “seguridad social”.

Migración

- Aplicar políticas de integración para solicitantes de refugio, conforme al Plan de Acción de México acordado por los países del continente americano.

Libertad de opinión y de expresión

- Mantener y fomentar la existencia de una prensa libre que permita desarrollar una opinión pública autónoma.

JUSTICIA

- Garantizar la responsabilidad social en todas las instituciones del sistema de administración de justicia, así como la independencia política y financiera de la justicia.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

- Fomentar la participación ciudadana y reconocer el acceso a la información como garantía de contralor. Revalorar el presupuesto como instrumento para la implementación de las políticas públicas. Asignación presupuestaria para financiar las políticas.
- Promover el diálogo social y el establecimiento de mecanismos que garanticen los espacios de participación de la sociedad civil, así como la libertad, seguridad y dignidad de las personas que representan a las organizaciones sociales.
- Establecer mecanismos permanentes de evaluación de la ejecución de los compromisos de las Cumbres, y que estos contemplen la opinión e información de las organizaciones de la sociedad civil como fuentes indispensables a considerar.
- Crear un observatorio ciudadano para el monitoreo del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción de la IV Cumbre.
- Declarar la importancia del derecho al acceso de la información pública, libre y gratuitamente, para así permitir y fomentar la participación y el monitoreo de ciudadanos y organizaciones de base, y de todo tipo, en el tratamiento de la cosa pública.
- Apoyar las capacidades de la sociedad civil a partir de la capacitación y la educación integral de los ciudadanos, entendiendo que sólo así es posible consolidar las instituciones democráticas.

Asimismo, reconocer la importancia de la participación de la sociedad civil en la defensa colectiva de la democracia.

- Establecer mecanismos reales y efectivos para la participación de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los respectivos recursos económicos para garantizarla.
- Promover el diálogo social y la participación de todas las organizaciones de base.

DIVERSIDAD CULTURAL

- Incorporar legislación que proteja debidamente el acervo nacional en todos sus ámbitos, tales como patentes y propiedad intelectual.

TRABAJO

- Incorporar una fundamentación ética del trabajo (empleo) y la estrategia para llevarla a cabo. Al respecto, se puede afirmar la importancia de incorporar la dimensión ausente en los '90 en este tema luego del economicismo y pragmatismo de la década pasada y los pobres resultados que ello tuviera precisamente en la creación de empleo y cohesión social. Bien, la fundamentación ética de una estrategia de creación de trabajo podemos hacerla desde tres dimensiones:
 - El empleo como fuente de la cohesión social,
 - El empleo como fuente de dignidad de las personas,
 - El empleo como garantía de ciudadanía, porque la constitución de sujetos libres, portadores de derechos y obligaciones en la comunidad política democrática está directamente vinculado al tema del empleo.
- Explicitar a que se hace referencia cuando se habla de empleo digno/decente.
- Poner más énfasis en la problemática del empleo rural, no focalizar las propuestas al ámbito del empleo urbano. Destacar la elevada ponderación de las actividades campesinas en los países de la región y la necesidad de implementar políticas específicas que atiendan la realidad de este universo.
- Enfocarse en el rol de las cooperativas en la generación de empleo digno y por ende la necesidad de implementar políticas que alienten el desarrollo del cooperativismo en concordancia con la Organización Internacional del Trabajo.
- Reconocer la libertad sindical como un derecho humano.
- Implementar políticas macroeconómicas que alienten la industrialización de los recursos naturales y la incorporación de valor agregado.
- Reconocer e incentivar el papel de las organizaciones y de las micro y pequeñas empresas y cooperativas en el desarrollo integral de nuestros países, por su contribución a la cohesión social, a la generación de puestos de trabajo dignos, al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo de la ética de la solidaridad y a la responsabilidad social.
- Fomentar el encadenamiento productivo de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) en alianzas virtuosas.
- Asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad sindical.

IGUALDAD DE GÉNERO

- Tomar medidas más efectivas para combatir la discriminación laboral por razones de género, particularmente superando la brecha salarial arbitraria entre hombres y mujeres, y facilitando un mayor acceso de las mujeres a la educación, al crédito y a la tecnología.

EDUCACIÓN

- Reconocer la educación como derecho humano fundamental.

Ciencia y Tecnología

- Plantear como tema central la necesaria asociación entre conocimiento y trabajo con el uso extensivo de la ciencia, aplicando el uso de tecnología e incorporando el concepto de la innovación.
- Reconocer el acceso a la información científica como derecho fundamental y viabilizar la apropiación de la ciencia por la sociedad mediante la educación y la divulgación.
- Proveer financiamiento público de la ciencia, la tecnología y la innovación para la generación de empleo de mayor calidad. La transferencia del conocimiento debería ser parte de las políticas nacionales y regionales y ser coordinada a los niveles más alto del gobierno.

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CUMBRES

- Establecer adecuados mecanismos de seguimiento, evaluación y monitoreo los mandatos y compromisos asumidos en las Cumbres de las Américas,.

COMERCIO Y FINANZAS

- Generar condiciones que alienten la inversión en forma consistente con la ampliación y fortalecimiento del mercado interno. Otorgarle menos ponderación al rol de la inversión transnacional colocando el énfasis en la generación de actores locales que encaren el proceso de formación de capital.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

- Expresar la necesidad que se amplíe y fortalezca el diálogo entre los Estados y los pueblos indígenas en pos de aprobar la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

DESARROLLO SOSTENIBLE

- Plantear políticas y regulaciones para el uso racional de los recursos naturales. Desarrollar políticas públicas en materia hidroenergética que permitan desarrollar estrategias sostenibles del agua.
- Incorporar y reconocer todos los compromisos y tratados en materia ambiental tanto en la Declaración como en el Plan de Acción.
- Adoptar estrategias para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, tomando en cuenta la dimensión y el impacto de las actividades productivas, particularmente en relación a la deforestación y la sobreexplotación pesquera.

CRECIMIENTO CON EQUIDAD

- Hacer una evaluación crítica de las consecuencias del modelo neoliberal en los países subdesarrollados, reconociendo la elevada correlación entre los procesos de apertura comercial y financiera, desregulación de los mercados (con especial énfasis en el mercado de trabajo), privatizaciones y desindustrialización y la crisis del mercado de trabajo, el aumento de la pobreza y la acentuación de la desigualdad. Hacer explícito que ese modelo fracasó, que los parches no resuelven los problemas de fondo y que es necesario plantear un nuevo paradigma de desarrollo para la región con particular énfasis en la recomposición del mercado de trabajo, y la generación de empleo digno como un articulador fundamental de la recomposición social.
- Promover el concepto del *desarrollo con identidad* en los convenios y declaraciones internacionales relativas a pueblos indígenas y afrodescendientes y generar políticas públicas específicas para la niñez, adolescencia y juventud, indígena y afrodescendientes sobre educación, empleo, justicia penal y participación.
- Defender la soberanía nacional frente a los acuerdos de libre comercio, en materia laboral, educación, género, salud, acceso a medicamentos, protección intelectual y patentes industriales.

III. MESA REDONDA: “EL ROL FUNDAMENTAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN EN EL MARCO DE DISCUSIÓN DE LA IV CUMBRE DE LAS AMÉRICAS”, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2005

EDUCACIÓN

Ciencia y Tecnología

- Solicitamos a los Estados Miembros de la OEA que reconozcan y reafirmen los compromisos para respaldar y promover los mandatos adoptados en la Declaración y Plan de Acción de Lima de la Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en el ámbito del CIDI de la OEA, así como los compromisos adoptados en Cumbres anteriores, orientados al desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el Hemisferio Occidental.
- Una educación de calidad en ciencia y tecnología debe de ser incorporada desde los niveles de educación primaria de modo de aumentar el interés de niñas y niños así como de hombres y mujeres en la promoción del pensamiento científico y de una cultura de la innovación.
- El financiamiento público de la ciencia, tecnología e innovación debe de ser integrado en políticas nacionales y regionales, y coordinado a los niveles más altos de gobierno.
- Como corolario de la Carta de la OEA, y en particular con relación a los objetivos de su Capítulo IV sobre Desarrollo Integral, el acceso a la información científica debe de ser reconocido como un derecho fundamental para todos los ciudadanos de las Américas.
- La perspectiva de género debe de ser integrada en todos los sistemas y políticas de CTIIEC de modo que se asegure que los intereses y las capacidades de las mujeres y de los varones se tomen en cuenta y se aprovechen para la creación y utilización de conocimiento científico y tecnológico
- Para finales de la próxima década, la inversión privada en CTI en América Latina y el Caribe debe de ser más alta que la inversión pública. El estímulo y la responsabilidad de elaborar marcos legales y reglamentarios para esta urgente necesidad recaen sobre los gobiernos de la región.
- Crear redes de centros de excelencia que, través de la sinergia y de la construcción de un adecuado nivel de masa crítica, produzcan investigación e innovación al más alto nivel.

IV. FORO INTERAMERICANO DE AFRO-DESCENDIENTES: "PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA DE LOS AFRO-DESCENDIENTES EN LA IV CUMBRE DE LAS AMÉRICAS"

IGUALDAD DE GÉNERO

- Garantizar la participación equitativa de las mujeres afro-descendientes en políticas públicas.
- Establecer mecanismos de gestión de políticas públicas para mujeres afro-descendientes.
- Garantizar una legislación específica y acciones afirmativas.
- Promover programas de empleo y regulación que garanticen la seguridad social para el sector informal de las mujeres afro-descendientes.

TRABAJO

- Generar programas de formación y capacitación para el empleo por parte de los Estados dirigidos a las mujeres afro-descendientes.
- Evaluar y monitorear las prácticas de contratación, promoción y despido para identificar patrones de discriminación.
- Adoptar los estándares de seguridad en el empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- Exigir a las empresas privadas la adopción y plena implementación de los códigos de responsabilidad social empresarial, incluyendo el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación en el empleo.

EDUCACIÓN

- Asegurar la asistencia y permanencia de las mujeres afro-descendientes en los niveles educativos que garanticen la inserción laboral en equidad de condiciones sociales.
- Ampliar el concepto en los Ministerios de Educación de los países para la dimensión de educación multicultural y etno-educación.

Ciencia y Tecnología

- Adoptar mecanismos de acceso del desarrollo tecnológico.

CRECIMIENTO CON EQUIDAD

- Generar fondos blandos de capital, tecnología de punta de garantía específica para la generación de emprendimiento productivo para mujeres afro-descendientes, potenciando los saberes y semilleros culturales de las mujeres y comunidades afro-descendientes
- Expresar preocupación ante las medidas de reforma fiscal y del Estado, pues las mismas no contemplan sus impactos discriminatorios tales como la reducción en el financiamiento de programas sociales, la privatización de la gestión pública y la reducción en el empleo en el sector público, como también la negación del derecho a la organización sindical de las trabajadoras y los trabajadores.
- Asegurar que los y las afro-descendientes sean sujetos y sujetas de crédito: legalizando sus tierras; dotándoles de medios de producción.

DERECHOS HUMANOS

- Garantizar la no discriminación laboral por razón de interseccionalidad agravada por género, etnia, discapacidades, VIH/SIDA, y grupos etarios.
- Prohibir el hostigamiento racial y de género en el empleo.
- Aplicar acciones afirmativas, incentivándolas a través de eximir de impuestos a las empresas que adopten acciones afirmativas a favor de las poblaciones afro-descendientes.
- Instaurar políticas públicas de equidad racial.

Cumplimiento de obligaciones internacionales y respeto de las normas internacionales

- Cumplir con la Declaración y el Plan de Acción de Santiago 2000 - Capítulo Afro-descendiente; en la pronta elaboración, aprobación y ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que se encuentra en discusión en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Migración

- Expresar preocupación por la situación de vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes, las cuales generalmente ocupan empleos inestables, de bajos salarios y de explotación.
- Igualmente, rechazar la negación del derecho al trabajo de las trabajadoras y los trabajadores inmigrantes.

Derechos humanos de la mujer

- Exigir protección específica de los derechos humanos laborales de las mujeres afro-descendientes y sus familias, en su condición de inmigrantes, refugiadas o desplazadas, que releva el racismo estructural en las sociedades.
- Crear programas de apoyo a las mujeres trabajadoras, tales como servicios de salud, cuidado de niños y niñas y ofertas de educación continuada.

Derechos humanos de la niñez y la adolescencia

- Articular políticas sociales sobre la niñez, adolescencia y juventud afro-descendientes.
- Apoyo al sector privado a las acciones y medidas afirmativas para el empleo juvenil afro-descendiente.
- Regular el sistema penal de justicia para adolescentes, particularmente afro-descendientes.

Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos

- Incorporar las variables raza-etnia-género en censos, encuestas nacionales y municipales, con la participación de las organizaciones de mujeres afro-descendientes.

SALUD

- Adoptar políticas de salud pública que tienen como tareas prioritarias la violencia y el uso / abuso de drogas.

DIVERSIDAD CULTURAL

- Redactar e incluir políticas a favor de las poblaciones afro-descendientes en las áreas de cultura y biodiversidad.
- Crear una base de datos sobre información de juventud, niñez y mujeres desagregada en los censos e incluir la perspectiva étnica afro-descendiente.
- Promover instancias de participación política y democrática de los jóvenes afro-descendientes.
- Reafirmar la identidad afro en la niñez, la adolescencia y la juventud, además las diferentes lenguas garífuna, criollo e inglés del legado de las poblaciones afro-descendientes.

V. FORO SUBREGIONAL DEL CARIBE DE LA SOCIEDAD CIVIL “CREAR TRABAJO PARA ENFRENTAR LA POBREZA Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA”, BARBADOS, 21-22 de JULIO DE 2005

DEMOCRACIA

- Desarrollar acuerdos cooperativos con la sociedad civil que promuevan la transparencia y la responsabilidad para contrarrestar los efectos de la corrupción en un esfuerzo para tomar acciones efectivas contra la corrupción y el crimen organizado.
- Reformar y financiar adecuadamente los sistemas de administración municipal.

DERECHOS HUMANOS

- Desarrollar una carta regional de derechos humanos para los Estados miembros del CARICOM en la que el empleo de calidad se refleje como un derecho humano fundamental, como un esfuerzo para garantizar la seguridad humana, la creación de empleo, y el alivio de la pobreza.
- Establecer un plan nacional de derechos humanos a veinte años enfocado especialmente al desarrollo de la juventud, el desarrollo y la diversidad cultural, un plan nacional de salud, la integración total de los discapacitados y los grupos minoritarios e indígenas.
- Adoptar políticas más eficientes para luchar contra la discriminación por razones de enfermedades crónicas tales como VIH/SIDA en el lugar de trabajo.
- Continuar promoviendo planes de asistencia social y programas necesarios para las personas de grupos marginados tales como discapacitados e indígenas, que carecen de acceso a condiciones de trabajo decente.

Derechos humanos de la niñez y la adolescencia

- Ratificar los acuerdos multilaterales existentes y desarrollar políticas nacionales que prohíban el trabajo infantil.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

- Establecer un mecanismo para permitir la participación de la sociedad civil y sus aportes a las políticas y toma de decisiones que generen crecimiento y desarrollo sostenibles.

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2002-2006

- Desarrollar consultas con la sociedad civil y procesos nacionales de generación de políticas a través de un sistema de registro de actores no estatales y un marco legal para la participación obligatoria en los procesos de toma de decisiones.
- Aumentar la participación de la sociedad civil en el nivel nacional, regional y hemisférico.
- Aplicar la Carta de la Sociedad Civil para que los gobiernos nacionales, las administraciones municipales, ONGs, las empresas y los gremios tengan roles definidos en su participación en la economía y la sociedad, basados en los derechos humanos y la conciencia social y económica, con miras al buen gobierno en las naciones del Caribe; y hacer uso de la mejor manera el potencial del Caribe en el interés de sus pueblos, de manera que la región se pueda convertir en un actor y socio global en igualdad de condiciones.
- Proporcionar apoyo técnico y financiero para el establecimiento de un foro de ONGs en cada Estado del Caribe para posicionar al sector de las ONGs a un nivel de organización y representación semejante al del sector privado y laboral.
- Crear consejos nacionales y regionales para coordinar estrategias y abogar por sus objetivos.
- Promover más asociaciones de desarrollo entre ciudadanos y actores no estatales.

COMERCIO Y FINANZAS

- Tomar en cuenta, reconocer y fomentar más conexiones con la Diáspora del Caribe como un medio para aumentar la cuota del mercado, estableciendo una comisión regional de caribeños con sede en el exterior para aprovechar los recursos accesibles.

TRABAJO

- Implementar programas específicos para pequeñas y medianas empresas, proporcionando asistencia técnica, micro-créditos, capacitación, y servicios de mediación laboral. Esos programas deben ser diseñados para incrementar la iniciativa empresarial, el desarrollo de sistemas de capacitación, la elegibilidad para recibir créditos y acceso a mercados financieros; facilitar la participación en el comercio internacional y proporcionar la pericia técnica para permitir a las comunidades valorar, evaluar y desarrollar micro y macro empresas.
- Cooperar con la sociedad civil y representantes claves del sector privado como socios para discutir y generar estrategias de generación de empleo.
- Desarrollar políticas y estímulos fiscales para alentar y persuadir al sector privado de crear y mantener puestos trabajos en la comunidad.
- Promover políticas para la sostenibilidad de los negocios y la inversión productiva, ya que son claves para generar trabajo decente, y especialmente, el respeto a los derechos fundamentales del trabajo; proporcionando empleo con seguros sociales; y fomentando el diálogo social.
- Aumentar la atención a grupos vulnerables, tales como indígenas, minorías, y personas con discapacidades, para reducir las desigualdades en el trabajo por razones de posición social, carrera, sexo, edad, o cualquier otra clase discriminación.

CRECIMIENTO CON EQUIDAD

- Desarrollar y aplicar nuevas medidas para despolitizar el asunto de la reducción de la pobreza, teniendo en cuenta políticas adecuadas para combatirla.

- Crear programas especiales para individuos que sufren desplazamiento por desajustes estructurales en circunstancias económicas.
- Continuar el seguimiento de los mandatos y los compromisos tomados en las Cumbres de las Américas, la Cumbre del Milenio, y la Conferencia Internacional en el Financiamiento para el Desarrollo (el Consenso de Monterrey) para fomentar el bienestar y una distribución más equitativa del crecimiento económico, engendrar nuevas oportunidades de empleo, promover el trabajo decente, erradicar el hambre, y aumentar el nivel de vida en el Hemisferio, basándose en las metas de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos; aplicando políticas y programas que permitan a los mercados laborales funcionar apropiadamente.

EDUCACIÓN

- Promover la adopción de nuevos planes educativos que acentúen las culturas afro-descendientes y las culturas indígenas del Caribe.
- Desarrollar mejores programas de servicio de empresa joven para ampliar la exposición de jóvenes, personas discapacitadas, e indígenas a la formación técnica y profesional.
- Diseñar políticas que acentúen y hagan de la educación, la capacitación y la actividad económica, la base para las estrategias de erradicación de la pobreza.

IGUALDAD DE GÉNERO

- Instituir políticas de género obligatorias para construir una cultura de aceptación de las mujeres como una parte crítica del desarrollo nacional para eliminar la pobreza basada en el género y para reducir las disparidades entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo, con un enfoque integrado que incorpore una perspectiva de género en políticas de empleo.

DIVERSIDAD CULTURAL

- Identificar y reconocer las prácticas culturales tradicionales específicas, y su potencial como una parte crítica de la creación de la riqueza, el alivio de la pobreza y la creación de empleo.

CONECTIVIDAD

- Construir mecanismos para recopilar y compartir información más eficazmente.

VI. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA INICIATIVA DE LOS MINISTROS DE SALUD Y AMBIENTE DE LAS AMÉRICAS, MAR DEL PLATA, ARGENTINA, 16 Y 17 DE JUNIO DE 2005

EDUCACIÓN

- Capacitar, sensibilizar y promover la participación de la población poniendo a su disposición la información disponible.
- Capacitar a la sociedad en general, a los sectores responsables de la toma de decisión, la industria y la producción sobre la gestión adecuada de químicos.
- Producir información sencilla e implementar los medios para que la comunidad se informe (por ejemplo, información veraz y correcta en el etiquetado de los productos en el comercio).

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2002-2006

- Aprovechar los recursos disponibles en la región para desarrollar investigación, estudios, controles y acciones tendientes a la protección de la salud humana y ambiental.
- Integrar a los Ministerios de Educación y otras áreas relevantes en las acciones de capacitación para acelerar el proceso de introducción de los conceptos por las vías formales e informales disponibles.
- Promover la investigación, sin que paralice la acción, para establecer el “estado de la ciencia”.

DESARROLLO SOSTENIBLE

- Adoptar como “Política de Estado” los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) especialmente con relación al acceso a los servicios de agua potable y saneamiento.
- Incrementar las partidas presupuestarias e identificar nuevas fuentes de financiación para hacer frente a estos desafíos.
- Acordar a corto plazo (menor a un año), el diseño, aprobación y aplicación de indicadores comunes de contaminación y salud que permitan el monitoreo uniforme, acciones de prevención, remediación y recomposición.
- Impulsar el manejo adecuado de las aguas residuales y los residuos sólidos desde su producción, en su tratamiento y disposición final.
- Promover procesos de producción limpia y consumo responsable, medidas preventivas y el uso de mejores tecnologías y prácticas ambientales y de salud para la reducción de emisiones contaminantes que afectan los cursos de agua.
- Promover la utilización de tecnologías sustentables adaptadas a la realidad de nuestra región.
- Priorizar en las grandes regiones metropolitanas la evaluación de la capacidad de soporte del territorio de implantación, buscando definir un escenario realista para la sustentabilidad frente a la disminución de la producción de agua y reservas estratégicas para el abastecimiento de las actividades humanas.
- Impulsar el manejo integral y participativo de cuencas y micro cuencas.
- Priorizar y tomar acciones urgentes en las cuencas hídricas donde se desarrolla una importante actividad económica y con gran impacto sobre los grandes núcleos poblacionales que la habitan. Por ejemplo las cuencas Paraná, Río de la Plata, Reconquista y Matanza – Riachuelo (Argentina); Río Neverí y otros que alimentan las principales represas (Venezuela), Río Pilcomayo (Bolivia), Río Guayas, (Ecuador), Río Piracicaba y Alto Tiete (Brasil), entre otros.
- Aplicar el Principio Precautorio (Principio 15, de la Declaración de Río de Janeiro): “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente”.
- Asegurar la definición de políticas públicas efectivas para el control en el uso de plaguicidas.
- Ratificar e instrumentar los compromisos adquiridos en los tratados y convenciones internacionales y regionales sobre manejo seguro de sustancias químicas.
- Incluir las recomendaciones del Foro Intergubernamental de Seguridad Química (IFCS), Foro IV, en los planes de trabajo intersectorial e informar a la población y otros sectores interesados sobre los compromisos adquiridos, por ejemplo sobre:

- comercio ilegal transfronterizo de químicos (en los que se incluye plaguicidas),
- protección de los niños de las exposiciones químicas peligrosas,
- depósitos de químicos (pesticidas, PCBs y otros),

recordando que los países deben reportar los avances sobre estos temas al Foro V IFCS programado para el 2006.

- Abordar la problemática planteada por las fracturas inter-jurisdiccionales creada por las diferentes competencias, buscando una solución a las dificultades planteadas y para facilitar el control.
- Revisar la legislación y normativa vigente para facilitar su aplicación, identificando los vacíos y superposiciones, fijando un sistema de actualización continúa, por ejemplo de los límites de permisibilidad para el uso de químicos implementando controles más efectivos.
- Facilitar la reconversión industrial incorporando tecnologías limpias.
- Impedir la importación de químicos que hayan sido prohibidos en su producción, comercialización o uso en otras regiones (por ejemplo EEUU, Canadá y Unión Europea).
- Implementar políticas públicas a largo plazo en salud ambiental de los niños, que incluyan una mirada preventiva de manera que la propuesta se mantenga en el tiempo y no tenga efecto de campaña, tomando en cuenta los altos costos que las enfermedades implican para la familia y el sistema de salud.
- Elaborar e implementar políticas públicas de seguridad química promoviendo la realización del mapeo de áreas contaminadas químicamente y la elaboración de programas de intervención y recuperación ambiental priorizando las áreas que significan un peligro para salud humana.
- Generar un ámbito que permita el intercambio de experiencias, actualizaciones y acceso a registros de la gestión segura de químicos (aforos, balances hídricos actualizados, otros).

SALUD

- Asegurar que los químicos que se produzcan, utilicen y comercialicen puedan ser usados sin riesgo para la salud humana y del ambiente.
- Aplicar el Principio Precautorio y atender prioritariamente aquellos casos en que se identifiquen urgencias y/o emergencias debido a los graves efectos sobre la salud pública por el uso indiscriminado, inadecuado, intensivo o extensivo de plaguicidas (por ejemplo Quibor en VENEZUELA ;Taucamarca en PERU) tomando en cuenta los casos transfronterizos. Debe prestarse especial atención a las fumigaciones con herbicidas en la frontera entre Colombia y Ecuador.
- Sensibilizar, informar y capacitar sobre Salud Ambiental de los Niños a todos los sectores. Informar sin alarmar a la comunidad, desarrollando planes atractivos de educación pública y popular por mecanismos activos y pasivos.
- Incorporar los temas de salud y ambiente en las curricula desde la formación pre-escolar hasta los niveles de grado de formación profesional. Capacitar especialmente a los profesionales de la salud, ambiente y educación.
- Promover la realización de perfiles de Salud Ambiental de los Niños para:
 - identificar rápidamente los principales problemas, a efectos de conocer sus características y decidir la toma de acciones inmediatas,
 - preparar Planes Nacionales de Acción con participación de sectores gubernamentales, ONGs y la comunidad.

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2002-2006

- Promover Estudios Longitudinales de Cohorte para determinación y seguimiento de las situaciones ambientales y su injerencia en la salud de los niños.
- Promover campañas de difusión masiva agresivas sobre pautas de higiene, de cuidado infantil, consumo de alimentos locales y disponibles, tabaquismo, alcohol, adicciones, HIV-SIDA, embarazo precoz y trabajo infantil protegiendo a los niños de la exposición a residuos, aguas servidas, químicos peligrosos y otros factores de riesgo ambientales.
- Organizar Unidades Pediátricas Ambientales (UPAs).
- Solicitar el cumplimiento de los compromisos internacionales donde Salud Ambiental de la Niñez es el tema específico de discusión e introducirlo en aquellas en que aun no se ha considerado como determinante o parámetro (como en la negociación de Cambio Climático).

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

- Fomentar la participación y compromiso de la comunidad y otros sectores interesados permitiendo de esa manera la vigilancia en el tiempo de la calidad de provisión de agua potable y saneamiento.
- Crear redes de acción donde se promueva la participación de todos los sectores interesados.
- Iniciar acciones a corto plazo con socialización y coordinación de planes que incluyan a los diferentes sectores de la comunidad desde la generación de las políticas públicas y en todo el proceso.
- Fomentar la colaboración inter-regional e internacional.
- Instamos la participación plena de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la protección del ambiente y la salud, en los procesos de toma de decisiones desde la gestación, en la implementación y hasta el monitoreo de las políticas publicas.

DERECHOS HUMANOS

- Asegurar el derecho de acceso a la información sobre los químicos y su gestión.

VII. SEMINARIO SUBREGIONAL ANDINO “LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y EL PROBLEMA DEL EMPLEO EN LA SUBREGIÓN ANDINA”, LIMA, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2005

DEMOCRACIA

- Existen tres escenarios para hacer gobernables las democracias. El primero es el de: una gobernabilidad precaria que amenaza persistentemente la existencia misma de la democracia. El segundo es la gobernabilidad autoritaria, que termina por negar hasta las apariencias de la democracia, como se ha visto con frecuencia en la región. El tercero, el deseable, es la construcción de la gobernabilidad democrática.
- En la situación andina actual para afirmar la gobernabilidad democrática es preciso poner en el centro de la agenda pública la construcción de la cohesión social. Frente a la erosión de la confianza y la solidaridad en las sociedades andinas, gobernar democráticamente es mucho más que tener un origen electoral: gobernar es construir sociedad.
- Para tener gobernabilidad democrática fundada en la cohesión social son necesarios acuerdos nacionales amplios, siempre que deriven de genuinos consensos en unas pocas políticas públicas – metas, plazos, seguimiento y evaluación- y existan gobiernos con la fuerza política suficiente para

poner en práctica esos acuerdos. De lo contrario se corre el riesgo de desprestigiar aún más –por ineficaz e inefectiva- a la política y a los partidos políticos.

TRABAJO

- Necesidad de enfrentar los problemas de desempleo, informalidad, empleo precario, baja productividad y pobreza, colocando el fomento al trabajo digno y de calidad como objetivo prioritario de las estrategias nacionales de desarrollo, como un medio efectivo para la superación de la pobreza;
- El inicio del Siglo XXI enfrenta a nuestros países a una doble agenda del desarrollo: superar las brechas internas y buscar una beneficiosa inserción internacional. Las crecientes demandas sociales, las dificultades para atenderlas y los problemas para una efectiva gobernabilidad democrática requieren un nuevo consenso andino y latinoamericano que, superando las limitaciones del pensamiento prevaleciente en la última década, integre, en un solo enfoque, la competitividad, el empleo decente y la inclusión social.
- Para retomar la dimensión del desarrollo en las políticas nacionales y de integración subregional, se requiere, más allá de los esquemas rígidos, de una estrategia de inserción ventajosa en el mercado global, un ambiente macroeconómico estable, una dinámica agenda de transformación productiva, una infraestructura adecuada, unas instituciones sólidas y una cohesión social, que permita asegurar la gobernabilidad democrática.
- En un sentido amplio la cohesión social puede considerar tres campos de acción: creación de oportunidades de empleo, efectiva protección social y políticas de largo plazo para fortalecer el capital humano y mejorar el funcionamiento del mercado laboral. Ello, con el propósito de reducir la pobreza, mejorar la distribución del ingreso y disminuir la exclusión.
- La transformación productiva de nuestras sociedades deberá, desde la articulación de las políticas económicas y sociales y de la generación de amplios consensos en torno a los objetivos de bienestar y desarrollo, garantizar la creación de nuevas fuentes de empleo digno y decente - remuneración apropiada, productividad, estabilidad, seguridad social y salud y seguridad en el trabajo-, con el propósito de contribuir a la conformación de sociedades a la vez que solidarias, competitivas. En ese sentido, deberá propiciarse el establecimiento de una estrategia de crecimiento con objetivo de empleo, a través de la consolidación del tripartismo y el diálogo social.
- Para que los países andinos puedan mejorar su competitividad estructural, a la vez que aumentan su productividad para reducir la desigualdad y la pobreza, deberán aplicar políticas sectoriales y territoriales que promuevan la inversión – para todo tamaño de empresa –, incrementen la productividad y generen empleos en los sectores intensivos en el uso de mano de obra.
- En materia de políticas activas en el ámbito subnacional, se ha acumulado abundante evidencia referida a casos exitosos de economías de base territorial, de gran dinamismo relativo. Las instancias técnicas y políticas de nuestros países, comienzan a identificar los denominados “núcleos de desarrollo territorial” o “ciudades – región” como espacios propicios para el diseño de políticas y acciones institucionales.
- La articulación de las micro, pequeñas y medianas empresas en clusters y redes productivas con base territorial adquiere un carácter de prioridad estratégica en los países andinos, porque son uno de los principales soportes del empleo estable y del desarrollo económico local.
- Los esfuerzos de transformación productiva e inserción internacional deben llegar al sector rural, estimulando el incremento de la productividad, para asegurar la inclusión de este vasto sector de la población andina, asegurando el uso sostenible de los recursos naturales, la generación de empleo productivo y el mejoramiento en las condiciones de vida de sus habitantes.

- Deberá ampliarse y mejorarse la atención a poblaciones en desventaja, como son las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los inmigrantes y las personas con algún grado de discapacidad. Especial atención debe darse a los jóvenes, que presentan tasas de participación laboral, de desempleo y de informalidad elevadas, a la par que registran bajas tasas de escolaridad.
- Una estrategia fundamental para promover el capital humano y social tanto en el orden nacional como territorial es la educación. Entre otros aspectos, ésta tiene un rol diverso en el crecimiento y la cohesión social, como instrumento que facilita la difusión del conocimiento y como elemento central en la movilidad social de las personas y en el acceso a un empleo digno y estable.
- Se debería tender hacia una gradual modificación de la estructura productiva de los países como forma de aumentar el empleo. Esta opción no se opone a la propuesta de aumentar la competitividad por vía del desarrollo de cadenas productivas o clusters, que implican redes y relaciones intersectoriales.
- Se deberían revisar los procesos de reforma laboral llevados a cabo en la década de 1990, en aras de establecer y reforzar un marco laboral promotor y estable, que respetando los derechos laborales promueva relaciones laborales armoniosas.
- Se requiere definir una estrategia de crecimiento con equidad, colocando la generación del empleo digno y decente, así como la mayor inclusión social como objetivos centrales del desarrollo.
- Para que los países andinos puedan mejorar su competitividad estructural, a la vez que aumentan su productividad para reducir la desigualdad y la pobreza, deberán aplicar políticas sectoriales que promuevan la inversión –para todo tamaño de empresa-, incrementen la productividad y generen empleos en los sectores intensivos en el uso de mano de obra.
- La lucha por superar la exclusión y la pobreza pasa por lograr un trabajo decente para todos y todas, debiendo enfrentarse la pobreza y el desempleo de manera conjunta. Lo anterior implica: i) el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo; ii) crear mayores oportunidades de empleo para las mujeres y los hombres, con el objeto de que dispongan de ingresos y empleos decentes; iii) extender la cobertura y la eficacia de la protección social para todos y todas, y iv) consolidar el tripartismo y el diálogo social.

VIII. FORO HEMISFÉRICO DE LA SOCIEDAD CIVIL: “HACER REALIDAD LOS BENEFICIOS DE LA DEMOCRACIA”, WASHINGTON, DC, 11 Y 12 DE ABRIL DE 2005

DEMOCRACIA

- Establecer criterios objetivos y compartidos que permitan hacer operativas las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana frente a situaciones de interrupción y/o alteración constitucional o frente al grave deterioro de las instituciones democráticas.
- Con base a los criterios y objetivos compartidos establecidos por la Carta Democrática Interamericana, invitar a las organizaciones de la sociedad civil registradas ante la OEA a hacer presentaciones anuales frente al Consejo Permanente acerca del “estado de la democracia” en sus países.
- Con el apoyo de la OEA, en base a la existencia de parámetros objetivos y compartidos, sentar las bases para la construcción de un Observatorio Interamericano de la Democracia, integrado por redes y organizaciones de la sociedad civil, que permitan establecer señales de alarmas tempranas frente a situaciones de deterioro institucional y organizar la acción colectiva en su defensa.

DERECHOS HUMANOS

Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos

- Con motivo de la próxima Asamblea General de la OEA, garantizar un proceso de elección de nuevos integrantes de la CIDH, que sea participativo, equitativo y transparente, como condición esencial para asegurar que quienes sean elegidas o elegidos sean idóneos e independientes, garantizando así el fortalecimiento de los órganos del sistema, en especial su autonomía.
- Fortalecer el rol político de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se dirija a los Estados a fin de identificar los problemas estructurales en la región que permiten la violación de los derechos humanos y, al interior de la OEA que se consideren los derechos humanos como elemento indispensable para el fortalecimiento de los sistemas democráticos.
- Garantizar un presupuesto acorde con el volumen de trabajo que permita el funcionamiento y la eficiencia de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
- Establecer las normas para la elaboración de los informes periódicos de las medidas progresivas que hayan adoptado los Estados de conformidad con el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Avanzar en la elaboración y/o adopción de nuevos instrumentos interamericanos para la protección de los derechos humanos, en especial:
 - La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, garantizando la libre determinación y el derecho a sus tierras, territorios y recursos.
 - Una Convención Interamericana contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación Racial, reconociendo que éstos representan un problema fundamental en la región.
- Fortalecer los sistemas nacionales de promoción y protección de los derechos humanos.

Cumplimiento de obligaciones internacionales y respeto de las normas internacionales

- Garantizar el cumplimiento de las decisiones de los órganos de protección mediante la creación de mecanismos internos en los Estados y a través de los órganos políticos de la OEA.
- Asegurar la universalización del sistema, lo que implica la firma y ratificación, o ratificación, por parte de los Estados Miembros de todos los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos.
- Garantizar el funcionamiento permanente de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
- Concluir el proceso de reflexión sobre el sistema interamericano que han llevado a cabo los Estados, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, los órganos del sistema y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- Asegurar que las medidas para el establecimiento de la seguridad se den en total cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido, es necesaria la adopción de directrices por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para orientar la lucha contra el terrorismo en la región.
- Supeditar los objetivos y tratados comerciales a la obligación de los Estados de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos.

- Solicitar al Consejo Permanente que exija a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPPOEA) el cumplimiento de su mandato de conformidad con la resolución CP/RES.859 (1397104), y el respeto pleno del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
- Difundir y aplicar los instrumentos del sistema interamericano y las decisiones de sus órganos en materia de defensores de derechos humanos, dándole seguimiento a la Resolución 2036 de la Asamblea General de la OEA.
- Designar un grupo de trabajo para avanzar en el cumplimiento de los mandatos¹ de las resoluciones sobre el derecho de acceso a la información pública, remarcando las resoluciones sobre el tema dentro del marco de la próxima Asamblea General, y a tal efecto poner especial énfasis en el mandato de la Cumbre Extraordinaria de Nuevo León².
- Adecuar y fortalecer los sistemas de justicia internos a los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos. Asimismo, se deben crear legislaciones que protejan a grupos vulnerables como mujeres, niñas y niños, migrantes, afrodescendientes y pueblos indígenas.
- Modificar las estructuras que permiten la violación de los derechos humanos. En este sentido, se debe asegurar el establecimiento de medidas en contra de la corrupción, en especial la impunidad, pues esta perpetúa la violación de los derechos humanos.
- Garantizar la independencia de poderes como condición esencial de la democracia y respeto de los derechos humanos.
- Adaptar e implementar legislación interna y políticas públicas de conformidad con las medidas recomendadas en los Principios y Directrices Recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas (Naciones Unidas E/2002/68/Add.1.) para cumplir con el compromiso de proteger los derechos humanos de todas las personas dentro de sus territorios.
- Promover la educación en derechos humanos en la región.
- Considerar de manera especial la situación de los derechos humanos en Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador y Estados Unidos.

Migración

- Adoptar medidas tendientes a resolver la preocupante situación de violación de los derechos humanos que viven millones de migrantes en la región.
- Considerar la grave situación de las personas refugiadas en los países de la región.
- Considerar la situación de desplazamiento forzado de personas en la región.

¹ El grupo de trabajo se encargaría de la redacción de estándares mínimos de protección de este derecho al momento de regularlo y garantizarlo. Esto puede estar en sintonía a la declaración de principios de libertad de expresión de la CIDH y puede tener forma de declaración de principios.

² La Declaración de Nuevo León reza: “El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, en condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos. Nos comprometemos a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho de acceso a la información”.

Derechos humanos de la mujer

- Garantizar la independencia en el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
- Asegurar la coordinación de esfuerzos que realiza la OEA y sus Estados Miembros con el fin de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y hacer realidad los derechos humanos de las mujeres en el continente, con los que se efectúan en la Organización de las Naciones Unidas y en otros foros y organizaciones intergubernamentales regionales y subregionales, en las que también participan los Estados Miembros de la OEA.
- Adoptar medidas que eliminen la violencia y discriminación en contra de las mujeres en la región.

SEGURIDAD HEMISFÉRICA

- Profundizar la participación e involucramiento de la sociedad civil en la formulación de políticas y la presentación de temas relativos a la seguridad hemisférica como un componente crucial de la prevención de conflictos y la construcción de la paz, y como un mecanismo fundamental para evitar la securitización de los temas políticos, económicos, sociales y ambientales, especialmente en el marco de la priorización del terrorismo como principal amenaza a la región.
- En este sentido, entendemos que la construcción de la paz requiere, entre otras cosas, de un tránsito de una cultura de reacción frente a las crisis y conflictos emergentes, asociada a las concepciones tradicionales de seguridad, a una cultura de prevención, enmarcada en el concepto de seguridad multidimensional suscrita por los gobiernos del Hemisferio en la citada Conferencia, que permita la detección temprana de conflictos violentos y/o armados, tanto de carácter interestatal como doméstico y transnacional, y la formulación e implementación de políticas conjuntas entre los gobiernos, los organismos intergubernamentales y las redes y organizaciones de la sociedad civil para prevenirlos. Asimismo, entendemos que los costos de vidas humanas y las pérdidas de bienes materiales inherentes a estos conflictos pueden ser evitados si son prevenidos con la suficiente antelación y con una activa participación de la ciudadanía, en el marco del pleno respeto por el estado de derecho y el derecho internacional.
- Promover el fortalecimiento de la conducción civil de la seguridad para la consolidación de la institucionalidad y gobernabilidad democrática en la región.
- Profundizar la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas de seguridad y en el monitoreo de la defensa a través de una mayor interacción con agencias de gobierno, parlamentarios y partidos políticos. Por ejemplo, a través de foros abiertos para la edición y actualización de libros blancos, de audiencias públicas para discusión de las misiones y organización de los órganos de seguridad y defensa; y la creación o fortalecimiento de mecanismos parlamentarios de fiscalización de las entidades y las políticas de seguridad pública, particularmente en lo referente al gasto público dedicado a la seguridad.
- Profundizar la participación de la sociedad civil en la discusión y el debate de las políticas de seguridad regional y hemisférica a través de mecanismos más elaborados de enlace y diálogo con los organismos intergubernamentales y, en especial, con el Consejo de Seguridad Hemisférico. Por ejemplo, en el intercambio de experiencias y análisis de prácticas que tiendan a disminuir la expansión de prácticas de secuestro como instrumento terrorista.
- Apoyar el desarrollo de las capacidades de la sociedad civil a nivel local, nacional y regional para el tratamiento de los temas de la paz y de la seguridad a través de la educación y capacitación formal e informal. Por ejemplo, contribuir a la preparación, uso y difusión de materiales de capacitación para el desarrollo de una visión preventiva de los conflictos y de una mayor capacidad en la ciudadanía para la incidencia y el monitoreo de estos temas.

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2002-2006

- Contribuir a desarrollar un sistema de alerta temprana para la prevención de conflictos en la región sobre la base de un activo involucramiento de la sociedad civil en correspondencia con la participación de gobiernos y organismos intergubernamentales en el entendido que la sociedad civil cumple un rol crucial en la prevención y, eventualmente, en la resolución y en la reconstrucción post-conflicto. Por ejemplo, a través del impulso para la creación de un sistema infográfico de alerta temprana sustentado en las redes y organizaciones de la sociedad civil.
- Propender a la modernización de las fuerzas de seguridad y de las normativas nacionales de los sistemas de defensa y seguridad en búsqueda de una mayor transparencia y rendición de cuentas, aplicando cabalmente la Convención Interamericana contra la Corrupción. Por ejemplo, precisando el alcance y profundidad de la información confidencial que se pretende amparar en las leyes de secreto de Estado de forma que esto resulte compatible con las leyes de acceso a la información de cada país y estipulando la exclusiva utilización de los gastos secretos para actividades de inteligencia, fijando para ellos efectivos mecanismos de supervisión legislativa.
- Contribuir a construir un Registro Interamericano de Gastos de Defensa y Seguridad como un mecanismo de confianza mutua entre los países.
- En tanto la violencia de pandillas o maras (gangs) en América Central constituye un problema serio y presenta una amenaza al orden público en Guatemala, El Salvador, Honduras y el sur de México, y teniendo en cuenta la complejidad del problema, enfatizar la necesidad de que el tratamiento por parte de los Estados de la delincuencia de las pandillas debe enmarcarse en un enfoque interdisciplinario y holístico que incluya políticas de prevención y de rehabilitación articuladas en consonancia con el marco legal vigente.
- En tanto la solución a los problemas de seguridad de los Estados debe ser enmarcada en el derecho internacional, reiterar el llamado a los Estados que aún no lo han hecho, a suscribir el Pacto de Bogotá.

Lucha contra el terrorismo

- Reiterar que la naturaleza del terrorismo corresponde a una conducta delictiva que debe competencia exclusiva de las fuerzas policiales y no de las militares, quedando los responsables de actos terroristas sujetos a las sanciones penales correspondientes, en el marco de procesos judiciales que respeten las garantías fundamentales.
- Reiterar a los gobiernos la necesidad de que la lucha contra el terrorismo sea abordada en el marco de una perspectiva de pleno respeto de los instrumentos de derechos humanos del Sistema Interamericano, en especial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con especial referencia al Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos. En este sentido, recomendar a los Estados que adopten directrices sobre el respeto a los derechos humanos en el diseño e implementación de políticas anti-terroristas.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

- Con base a los criterios y objetivos compartidos establecidos por la Carta Democrática Interamericana, invitar a las organizaciones de la sociedad civil registradas ante la OEA a hacer presentaciones anuales frente al Consejo Permanente acerca del “estado de la democracia” en sus países.
- Con el apoyo de la OEA, en base a la existencia de parámetros objetivos y compartidos, sentar las bases para la construcción de un Observatorio Interamericano de la Democracia, integrado por redes y organizaciones de la sociedad civil, que permitan establecer señales de alarmas tempranas frente a situaciones de deterioro institucional y organizar la acción colectiva en su defensa.

- La participación de la sociedad civil es fundamental, pero esta sólo puede garantizarse si se respeta el derecho humano de acceso a la información, establecido en diversos instrumentos interamericanos. Para ello, es necesario el acceso a todos los borradores de documentos en el marco de la OEA y de la Cumbre.
- Reafirma la recomendación del Foro Hemisférico realizado en el 2004 de crear un grupo de trabajo con la Sociedad Civil que efectivice las disposiciones contenidas en la Declaración de Nueva León y que abarque temas tales como:
 - a. Acceso a información pública;
 - b. Participación efectiva de la Sociedad Civil en toma de decisiones; y,
 - c. Rendición de cuentas.

DESARROLLO SOSTENIBLE

- Que en el futuro en las discusiones que se conduzcan en la OEA en el marco de las Asambleas Generales y del proceso de Cumbres de las Américas se utilice el término desarrollo sustentable o sostenible, conforme a la Declaración de la Cumbre de Santa Cruz, Bolivia y que supone que el desarrollo no solo es económico y social, sino que debe asegurar la protección al ambiente; de acuerdo además, a lo que consigna el artículo 15 de la Carta Democrática Interamericana.

CRECIMIENTO CON EQUIDAD

- Para impulsar la redistribución de los recursos, adoptar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como la EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), para que nuestros gobiernos aseguren la publicidad de los ingresos fiscales que se genera con la explotación de minerales y petróleo. Así mismo, profundizar los éxitos en base a las lecciones aprendidas, entre ellas el impacto positivo que el micro crédito ha tenido en la región, especialmente el crédito a las mujeres.
- Que la OEA conduzca un estudio que cuantifique los niveles de pobreza en la región, considerando la incidencia de la economía informal, así como los niveles de inversión que los países realizan actualmente para disminuir la pobreza; y promueva foros regionales, con la participación de representantes de los gobiernos, de la empresa privada y de la sociedad civil – asegurando la representatividad de genero y de grupos vulnerables como los pueblos indígenas y afro americanos, y los jóvenes, con el objeto de evaluar en forma sistemática las estrategias nacionales y regionales de lucha contra la pobreza.
- Que los Estados de la región deben tomar acciones concretas para prevenir todas las formas de discriminación e intolerancia, aprobando la propuesta que a este respecto se ha incorporado en la agenda de la próxima Asamblea General de la OEA.

EDUCACIÓN

Ciencia y Tecnología

- Acoge las recomendaciones de la sociedad civil sobre el Papel Fundamental de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Innovación y Educación en Ciencias dentro del Marco de Discusión de la Cuarta Cumbre de las Américas.

IGUALDAD DE GÉNERO

- Asegurar la coordinación de esfuerzos que realiza la OEA y sus Estados Miembros con el fin de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y hacer realidad los derechos humanos de las

mujeres en el continente, con los que se efectúan en la Organización de las Naciones Unidas y en otros foros y organizaciones intergubernamentales regionales y subregionales, en las que también participan los Estados Miembros de la OEA.

IX. FORO DE GÉNERO DE LAS AMÉRICAS, BUENOS AIRES, ABRIL DE 2005

- Que solo será posible avanzar en el cumplimiento de los consensos y los compromisos asumidos por los Estados Miembros, en el marco de la paz, con la eliminación de conflictos armados y de todas las formas encubiertas de la misma; ya que la paz, la Autodeterminación de los Pueblos y la erradicación de la pobreza, generada en nuestros países principalmente por la pesada Deuda Externa, son indispensables para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y especialmente de las mujeres.

DERECHOS HUMANOS

- Que adopten medidas eficaces, en el ámbito interno y regional, para terminar con la discriminación por orientación sexual, identidad, expresión de género, capacidades diferentes, condenando y combatiendo las manifestaciones de racismo y todas las formas de discriminación e intolerancia y xenofobia contra los/las migrantes y los/las refugiados/as y sus familias en todos los campos.
- Que se garanticen los dispositivos nacionales de prevención y el combate al Delito de Trata de Personas y Protección a las víctimas, sea por razones laborales, trabajo esclavo de niños/as para adopción ilegal, explotación sexual y otras formas de trata y que para ello se incluya la participación de expertos/as, con mecanismos de cooperación integral entre los Estados para facilitar el intercambio de información y experiencias, el diálogo político y la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino de la trata de personas, así como la creación de registros estadísticos cumpliendo las resoluciones, tratados y compromisos en la materia.

JUSTICIA

Acceso a la justicia

- Que los procedimientos judiciales permitan cada vez más el acercamiento de los ciudadanos y ciudadanas que ven vulnerados sus derechos en la desigualdad de oportunidades para ejercerlos y que sientan en la justicia de nuestros países un ámbito de defensa de los y las más vulnerables.

COMERCIO Y FINANZAS

- Rechazamos los tratados bilaterales y multilaterales (ALCA) basados en relaciones desiguales entre los países que profundizan la dependencia. Las mujeres de las Américas vemos con mucha preocupación todo tipo de acuerdo comercial bilateral o multilateral basado en una supuesta igualdad entre los estados firmantes. Es sabido que en la actualidad existe un polo de poder cuasi hegemónico en el continente que limita y recorta la capacidad de nuestros estados para tomar decisiones, condiciona nuestra economía y obstaculiza el pleno goce de nuestros derechos humanos y los de nuestros niños/as, jóvenes y ancianos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Con estos acuerdos, América Latina está retrocediendo sobre acuerdos mundiales previos, como la Carta fundacional de la OEA, la cumbre de la OMC realizada en Doha (noviembre de 2001, en la que se prioriza la salud de los seres humanos por sobre los intereses corporativos de las empresas farmacéuticas. También la Carta Democrática Interamericana de la OEA afirma en su art 13: "La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.

DESARROLLO SOSTENIBLE

- Que tenga en cuenta que la pobreza no podrá ser erradicada sin adoptar un modelo de desarrollo sustentable y equitativo, fortaleciendo los procesos de integración regional, con un estado presente y responsable que regule la acción del mercado, que proteja los recursos naturales y su explotación al cuidado del medio ambiente, garantice el acceso y provisión de servicios públicos de calidad (agua potable, energía comunicaciones etc) comprometiéndose a tomar medidas para que sus tarifas sean accesibles para todos/as. Termine con la corrupción, que trabaje con transparencia y garantice el derecho a la información; que promueva la rendición de cuentas a todos los niveles, y la participación de la sociedad civil en todas las instancias de gobierno, garantizando en particular una representación equitativa de mujeres en los niveles de decisión en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y en los mecanismos internacionales;

TRABAJO

- Que se trabaje para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en el mundo laboral, y para erradicar las condiciones culturales, económicas y sociales que son condición necesaria para sostener la discriminación. Que se promueva el acceso a la formación, al empleo, a la promoción, a la organización y a la toma de decisiones y lograr la igualdad de condiciones en lo que se refiere a los salarios, las ventajas, la seguridad social y las prestaciones de carácter social que van ligadas al empleo. Que se considere en las cuentas públicas con instrumentos de medición apropiados el trabajo “reproductivo”, no remunerado, que mayoritariamente realizan las mujeres. Que se fomente el cooperativismo como estrategia de desarrollo.

CRECIMIENTO CON EQUIDAD

- Que centren todos sus esfuerzos, determinación y compromiso, a todos los niveles de sus gobiernos y también en los acuerdos de integración y con los organismos del sistema interamericano, las agencias internacionales y regionales de desarrollo, para combatir los graves problemas de la pobreza, la exclusión social y la inequidad que afectan en distinta medida a los países del hemisferio, a enfrentar las causas que los generan y sus consecuencias, y a crear condiciones favorables para el desarrollo socioeconómico con equidad, teniendo en cuenta las condiciones que afectan y empobrecen particularmente a las mujeres, esforzándose para que los/las descendientes de la región se reflejen en la historia de sus antepasados, sus costumbres, su cultura, y tradiciones.
- Que las políticas de ajuste han convertido a América Latina y el Caribe en el continente más inequitativo del mundo que han desembocado en niveles de pobreza nunca vistos en la región, con su terrible secuela de desnutrición infantil, analfabetismo, destrucción del trabajo y donde las mujeres, debieron paliar con mayores horas de trabajo la reducción de sus ingresos en el ámbito del hogar.

EDUCACIÓN

- Que aseguren el derecho universal para todos los/las niños/as a una educación laica, obligatoria e integral, basada en valores democráticos y solidarios, y libre de estereotipos culturales que reproducen la discriminación por género. Que los presupuestos de educación pongan especial énfasis en las mujeres y niñas rurales, donde son mayores los índices de analfabetismo.

SALUD

- Que teniendo en cuenta el avance de la feminización del VIH – SIDA, se implementen campañas masivas de educación e información para combatirlo.

IGUALDAD DE GÉNERO

- Que tanto el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas; como la orientación del trabajo dentro del Estado y la asignación presupuestaria a nivel nacional y local debe tener en cuenta la perspectiva de género y la apertura de instancias institucionales que garanticen la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
- Que en las cuentas nacionales se contabilice el trabajo no remunerado de las mujeres como parte del P.B.I., dado que sigue siendo las dos terceras partes del producto bruto mundial.
- Que se lleven adelante políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia por razones de género, sea física, sexual, doméstica, económica, laboral y acoso sexual, en los distintos aspectos de la esfera pública y privada, tomando como base la convención interamericana de Belem do Para.
- Que, todos los Estados Miembros que aún no lo han hecho, ratifiquen los instrumentos internacionales y regionales, para garantizar los derechos de las mujeres adecuando sus legislaciones nacionales a las mismas, y que se implemente el mecanismo de seguimiento de los tratados y declaraciones incorporando a expertas independientes y las organizaciones de la sociedad civil.
- Que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, asegurando el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, proveyendo los necesarios servicios – tanto en el campo de la salud como de la educación - e insumos de forma gratuita, alentando que puedan llevar adelante un proyecto de vida autónoma; que se garanticen el derecho universal a la educación sexual (Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, el Consenso de Lima de 2000 y México de 2005 .
- Que se revisen las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que tienen abortos ilegales, y se legalice el derecho al aborto seguro y gratuito.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

- Que se lleven a cabo diálogos consultivos con los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y otras comunidades discriminadas, a fin de generar políticas públicas pluriculturales que contribuyan al desarrollo con identidad de los mismos, implementando declaraciones, tratados y convenios internacionales atinentes a las mujeres y los pueblos indígenas ratificados por los estados.

X. REUNIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DE LA XXXVII REUNIÓN DEL GRUPO DE REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CUMBRES (GRIC), PALACIO SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 10 DE MARZO DE 2005.

DEMOCRACIA

- Continuar los esfuerzos realizados hasta el momento en la lucha anticorrupción y en la lucha por garantizar la seguridad ciudadana, para así asegurar la estabilidad de la democracia y la posibilidad de generación de empleos.
- Armonizar las iniciativas de generación de empleo con las políticas de transparencia, buscando que éstas prevalezcan en los manejos laborales, las contrataciones y las dinámicas y beneficiarios de la protección social. Esto resulta de fundamental importancia para asegurar el buen funcionamiento y la optimización de los recursos de estos sistemas.

- Desarrollar estándares e indicadores para evaluar los procesos de modernización del Estado y facilitar su monitoreo por parte de la sociedad civil.
- En Nuevo León la Declaración de la Cumbre Extraordinaria hay un compromiso específico con respecto al acceso a la información en poder del Estado. Dice: “El acceso a la información en poder del Estado, es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos. Nos comprometemos a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho de acceso a la información.” Consideramos desde la Sociedad Civil que en este año desde la Cumbre deben haber ya resultados en el cumplimiento de este mandato por la misma relevancia que los mismos Estados le han dado en el texto. Las leyes sobre acceso a la información deberán asimismo cumplir con los estándares internacionales y procurar que todas las excepciones sean explícitas y justificadas y susceptibles de ser revisadas por el poder judicial. En este sentido, exigimos también a los Estados un estricto cumplimiento del respeto a la libertad de expresión en toda su acepción y dimensión como condición indispensable y previa a una posibilidad ejecutiva tangible del acceso a la información. Las leyes o decretos que limitan la libertad de expresión hacen utópico el acceso a la información.

DERECHOS HUMANOS

- Promover que las políticas que se diseñen para la generación de empleo, y en general las políticas públicas que combaten la pobreza y procuran el desarrollo sostenible, tengan como marco el respeto y la promoción de los derechos humanos y que, en caso de conflicto de intereses, se respete la supremacía de la normativa de derechos humanos.
- Reconocer que el respeto y promoción de los derechos humanos en su totalidad, considerando los derechos civiles y políticos, como así los económicos, sociales y culturales, como indivisibles, universales e interconectados, es condición indispensable para el logro del desarrollo sustentable. Asimismo se debe garantizar su protección, lo que implica un eficaz y eficiente acceso a la justicia ante su violación.
- Partiendo de un enfoque integrado de los derechos humanos, la salud pública y la equidad, y teniendo en cuenta los tratados de carácter vinculante ratificados por los Estados participantes de la IV Cumbre de las Américas, afirmamos que la creación de más y mejor empleo requiere de la instrumentación de una serie de políticas de Estado que promuevan, protejan y garanticen el cumplimiento del derecho a la salud desde un enfoque integral e interdependiente con el resto de los derechos humanos. Para esto, será decisivo que se trabaje en la eliminación de las inequidades de género y clase en el acceso y utilización de los servicios de salud, especialmente en el área de la salud sexual y reproductiva, considerando su fundamental impacto en las posibilidades de las mujeres pobres para acceder a un trabajo decente.
- Fortalecer en el marco hemisférico el sistema de protección de los derechos humanos dentro de la OEA, mediante la garantía de su independencia y su efectiva capacidad de funcionamiento. Los Estados deben no solo garantizar esto sino también promover la ratificación de los instrumentos y tratados de derechos humanos como marcos necesarios para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible.

JUSTICIA

Independencia del Poder Judicial

- Garantizar la autonomía en el Poder Judicial, haciéndolo previsible en su accionar. Desarrollar estas condiciones es fundamental para la generación de un clima en el sistema financiero que facilite el acceso a créditos a pequeños y medianos empresarios.

SEGURIDAD HEMISFÉRICA

- El desarme previene la violencia que a su vez atenta contra la estabilidad democrática. El concepto de una paz armada no debe considerarse como bien público. Invitamos a los Estados a abrazar los proyectos relacionados a la paz.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

- *Claridad del proceso de participación de la sociedad civil:* Establecer una clara y concreta metodología en la articulación de la participación de la sociedad civil en el Proceso de Cumbres. La misma deberá ser inclusiva y pluralista dando cabida a los aportes de la mayor cantidad posible de organizaciones de la sociedad civil. Esto implica tener un cronograma claro de reuniones con los delegados gubernamentales, con acceso previo y en tiempo prudencial a los borradores de Declaración que se redacten y demás documentos que se traten, incluyendo los informes nacionales de cumplimiento de los mandatos. También implica una institucionalización de la participación de la sociedad civil, en cumplimiento con la Declaración de Nuevo León. Al respecto, revistiendo de carácter obligatorio la presencia de los delegados gubernamentales en el dialogo sociedad civil y Estados en donde se presentan las recomendaciones de la misma. Esto demanda también parámetros objetivos en la asignación de recursos para garantizar la participación de la mayor diversidad de organizaciones de la sociedad civil.
- *Medición de la incidencia de la participación de la sociedad civil:* Medir la incidencia de la participación de la sociedad civil en el proceso. La Secretaria de Cumbres de las Américas deberá comparar las recomendaciones recibidas desde la sociedad civil con el borrador final de Declaración de Mar del Plata, especificando cuales aportes han sido tenidos en cuenta y cuales no, y con que criterios se adoptó la decisión de no incluirlos. Llamar la atención de la escasa participación de los representantes de los Estados en la pasada Mesa Redonda con la Sociedad Civil y la Sesión Especial de la CISC. Recomendar la obligatoriedad de la participación de los Estados en estas instancias de dialogo. Asimismo, a nivel domestico se deberá ser consistente con el mandato regional de institucionalización de la participación de la sociedad civil en el Proceso de Cumbres, y cada punto focal nacional deberá especificar con claridad cuales son las instancias gubernamentales en donde la sociedad civil puede articular su participación.
- Promover la sanción de leyes de participación ciudadana que sean eficaces y que definan los mecanismos de la misma para la participación. Estas leyes deben garantizar el derecho de participación en los procesos de toma de decisiones en cuestiones que afecten la calidad de vida de los ciudadanos.

DESARROLLO SOSTENIBLE

- La protección ambiental debe necesariamente inspirar los mecanismos de desarrollo y fortalecimiento de la democracia y de creación de trabajo. De esta forma, se deberá mitigar los efectos de la contaminación sobre los sectores más marginados - acceso a agua potable, calidad del aire, higiene, entre otros-, incrementar el acceso a instancias de participación y control de las actividades con impacto negativo sobre el ambiente, y aumentar los niveles de protección de los recursos naturales de la región. La variable ambiental en el análisis de las vías de acción para el desarrollo de la región, es indispensable para que el mismo sea sustentable.

TRABAJO

- Manejar en la Cumbre y en los documentos que surjan de la misma una nueva concepción del trabajo, del empleo no ya sólo en términos de provisión salarial sino en función de la protección social, del desarrollo humano, de la equidad retributiva y de la identidad. Es importante que los presidentes del hemisferio adopten una definición de avanzada sobre el tema del trabajo, que evite enfrentar los problemas del siglo XXI con las armas del pasado. Pensar en cuál es la frontera entre

lo que se considera trabajo y lo que no, y definir sobre otras bases conceptuales esa cuestión. El trabajo doméstico, la educación, los servicios personales y comunitarios, en fin, una amplia gama de actividades socialmente relevantes deben comenzar a ser consideradas de un nuevo modo y, en ese sentido, deben ser remuneradas de otra forma. Se debe generar nacional y hemisféricamente estrategias de discusión sobre el trabajo y su vínculo con la vida digna que informen la elaboración de las políticas públicas al respecto.

- Insertar las políticas de generación de empleo en políticas mas amplias de redistribución del ingreso que sean productos de un dialogo nacional, amplio e incluyente.
- Promover el desarrollo de normas técnicas que contribuyan a la difusión de conocimiento, la transferencia de tecnología y la uniformidad de conceptos.
- Considerar especialmente en la construcción de las políticas de empleo, la temática de género, en particular lo relativo a la incidencia de la situación de la mujer y las condiciones laborales así como el acceso al trabajo de la mujer que es sostén del hogar.
- Promover el desarrollo de políticas adecuadas para los pueblos originarios que fomenten su participación en el mercado laboral y que incluyan provisiones especiales que articulen el conocimiento tradicional con la aplicación de normas y estándares técnicos.

EDUCACIÓN

- Articular la educación formal y no formal para el fomento del trabajo en la capacitación de las personas.
 - Se precisan mecanismos para regularizar y acreditar la educación no formal y regular así su calidad.
 - Se deben diseñar estrategias para organizar la oferta en educación técnica y no formal de modo tal que se responda a la demanda en capacitación para el trabajo
 - Tanto la educación formal como la no formal deben someterse a mecanismos compatibles de evaluación.
- Elevar tanto el nivel tecnológico de los países como las capacidades para ofrecer capacitación tecnológica de calidad, de manera que se pueda evitar la fuga de talentos formados de nuestros países.
- Tomar acciones concretas para cerrar la brecha entre la educación pública y la privada para garantizar la igualdad real en el acceso a oportunidades laborales.
- Desarrollar políticas educativas adecuadas para fomentar la incorporación al trabajo digno de grupos vulnerables o que requieren apoyo especial (jóvenes, mujeres, personas de edad mayor, discapacitados, pueblos originales, afro-descendientes y migrantes).
- Diseñar sistemas flexibles y sistemas de crédito que faciliten el acceso a la educación de los y las jóvenes.
- Acompañar las estrategias educativas con políticas que inserten en la sociedad a quienes están excluidos.

XI. TALLER “INNOVACIÓN Y TRABAJO DECENTE”, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 7 Y 8 DE MARZO DE 2005

DEMOCRACIA

- Manifestamos nuestro firme respeto a la legalidad y nuestro compromiso con los principios democráticos y exhortamos a los gobiernos a reafirmar su compromiso con la Carta Democrática Interamericana.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

- Llamamos la atención de los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil en general, sobre el rol fundamental y único que cumplen las organizaciones de empleadores y trabajadores en la definición de políticas de empleo y políticas laborales. Afirmamos que empleadores y trabajadores deben ser considerados como actores protagónicos en el contexto de las organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto merecen un espacio privilegiado en las discusiones hacia la Cumbre. Por ello reiteramos la importancia que COSATE y CEATAL tengan carácter de interlocutores necesarios en este proceso, y de órganos consultivos en la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) y demás ámbitos de la OEA.
- Consideramos fundamental fortalecer el diálogo social tripartito en el ámbito nacional, regional y hemisférico.

TRABAJO

- Ratificamos nuestro compromiso con el respeto, la promoción y la vigencia de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998; y exhortamos a los gobiernos a su cumplimiento.
- Reafirmamos la Declaración Conjunta de COSATE y CEATAL adoptada en el marco de la XIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA, celebrada en Salvador de Bahía en septiembre de 2003, que declara:

“Hacemos un llamado a los gobiernos a que asuman, con el apoyo de la OIT, el empleo como una preocupación central y elemento clave para el desarrollo de planes conducentes a la erradicación de la pobreza que permitan superar las situaciones de desigualdad y atraso que persisten en muchos países de nuestra región y se creen mayores oportunidades de progreso y bienestar; y generen espacios de diálogo de alto nivel entre gobiernos y los interlocutores sociales con las instituciones financieras internacionales y regionales, para la discusión sobre la situación del empleo y su impacto actual en los niveles de pobreza, que contribuya a avanzar en el diseño de políticas armónicas en el contexto del Trabajo Decente.

Asimismo, hacemos especial hincapie en la necesidad de generar un diálogo social sobre el fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, la formación profesional y capacitación gerencial continuas, como instrumentos clave para la promoción de empleo decente en el marco de un desarrollo sustentable.”

- Afirmamos que la educación a lo largo de la vida y la formación profesional son herramientas esenciales y responsabilidad de gobiernos, trabajadores y empleadores para poder dar respuesta a los nuevos retos de competitividad. Para ello, es necesario que esta formación esté orientada a capacitar a los trabajadores para que puedan enfrentar las nuevas condiciones laborales.
- Reiteramos la necesidad de lograr la articulación de las políticas económicas con las sociolaborales; así como de fortalecer a los Ministerios de Trabajo y promover su participación en

la definición de las políticas nacionales de desarrollo, en consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores.

- Consideramos fundamental fomentar la promoción de la negociación colectiva y el fortalecimiento del diálogo social, como medios para elevar el desarrollo del mundo del trabajo en la democracia.

IGUALDAD DE GÉNERO

- Consideramos que la dimensión y equidad de género debe ser un componente transversal de los análisis y la definición de acciones sobre innovación, empleo, combate a la pobreza y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Para lograr el desarrollo productivo y el desarrollo humano pleno, deben evitarse los mecanismos de segmentación de género en los procesos de incorporación de tecnología.

COMERCIO Y FINANZAS

- Afirmamos que la temática de la responsabilidad social de las empresas interesa tanto a los sindicatos como a los empleadores, y que se debe procurar la difusión y promoción de las buenas prácticas, tendientes a fomentar el trabajo decente. Entendemos que en función del carácter voluntario de la responsabilidad social de las empresas, no se les puede exigir responsabilidades que son propias de los Estados.

EDUCACIÓN

- Afirmamos que la educación a lo largo de la vida y la formación profesional son herramientas esenciales y responsabilidad de gobiernos, trabajadores y empleadores para poder dar respuesta a los nuevos retos de competitividad. Para ello, es necesario que esta formación esté orientada a capacitar a los trabajadores para que puedan enfrentar las nuevas condiciones laborales.

Ciencia y Tecnología

- Consideramos que la innovación implica el compromiso de empleadores, trabajadores y gobiernos. Se resaltan los beneficios del intercambio de información, participación y consulta.
- Consideramos que los sistemas nacionales de innovación y la inversión en investigación y desarrollo deben ser parte integral de las políticas nacionales de desarrollo. Asimismo, deben incorporarse materias, habilidades y competencias que incentiven la investigación e innovación en la educación básica, secundaria y superior, así como en la técnica y vocacional.

XII. FORO VIRTUAL “SOCIEDAD CIVIL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”, OFICINA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (OECT), SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

EDUCACIÓN

Ciencia y Tecnología

- Dar una mayor importancia a la educación en ciencias, desde la escuela primaria hasta después de la secundaria. Dicha educación resulta crítica y debe de ser integrada con los valores locales. La comprensión social sobre la relevancia de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Educación en Ciencias (CTEC) requiere de la inclusión de estas materias desde los primeros años educativos.
- Lograr una mayor introducción de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la innovación para obtener un desarrollo equitativo de nuestras regiones.

- Lograr una mayor participación de la sociedad en la creación y entendimiento de los usos y beneficios de la CTIEC. La capacidad de inversión del sector privado como del público en América Latina y el Caribe es limitada y es necesaria la información sobre el rendimiento de dicha inversión.
- Lograr que las políticas ambientales sean consideradas como un tema central en la discusión de aplicaciones de la CTIEC.
- Promover la incorporación de la tecnología y la innovación en las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, tanto la educación como las tecnologías de la información son esenciales para la incorporación de minorías y pueblos indígenas en la economía de mercado abierto.
- Instar a las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe a que jueguen un papel más protagónico en la incorporación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la innovación y la educación en ciencias en los objetivos nacionales.

XIII. MESA REDONDA CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA SESIÓN ESPECIAL DE LA CISC: “CREAR TRABAJO PARA ENFRENTAR LA POBREZA Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA”, WASHINGTON, DC, 24 Y 25 DE ENERO DE 2005

DEMOCRACIA

- Mayor énfasis en la ciencia y tecnología con el fin de crear gobiernos electrónicos para que los ciudadanos puedan tener acceso a la información.
- Creación de un grupo de trabajo dentro de los órganos políticos de la OEA y el proceso de Cumbres de las Américas para hacer un seguimiento de la cuantificación del acceso a la información.

DERECHOS HUMANOS

- Necesidad de reconocer que el derecho al trabajo es un derecho humano y la importancia de que los Estados Miembros de la OEA garanticen la creación de sindicatos y protejan los derechos de los trabajadores.

Derechos humanos de la niñez y la adolescencia

- Necesidad de prevenir y abordar la cuestión del trabajo infantil y la necesidad de que los Estados adopten leyes para combatir este tema tan importante.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

- Integración de los grupos tradicionalmente marginados, tales como los afrodescendientes y los pueblos indígenas, quienes deberían contar con representación en el proceso preparatorio de las Cumbres de las Américas.

COMERCIO Y FINANZAS

- Tener en cuenta los derechos de los trabajadores en las negociaciones de acuerdos comerciales y revisar los acuerdos comerciales en un esfuerzo por dar prioridad a los derechos de los trabajadores e incluir medidas que protejan a los trabajadores migrantes.

TRABAJO

- Los Estados Miembros deben respetar las normas laborales internacionales, así como la necesidad de establecer políticas equitativas para la creación de empleo como la clave para enfrentar la pobreza.
- Necesidad de que los Estados desarrollen iniciativas o programas empresariales que ofrezcan opciones a los jóvenes, tales como el acceso al crédito y alternativas de educación flexibles, con el fin de promover su formación profesional y desarrollo educativo.

CRECIMIENTO CON EQUIDAD

- Definir el término *pobreza* y definir qué sectores de la población integran a los pobres.
- El modelo económico que ha predominado en la región durante las dos últimas décadas está limitado y ha tenido como resultado la pobreza extrema y la riqueza extrema.
- La redistribución de la riqueza debería ser una de las principales preocupaciones de los gobiernos.
- Necesidad de emprender reformas económicas para proporcionar acceso al crédito a las micro y medianas empresas y brindar asistencia a las pequeñas empresas.
- Necesidad de dedicar recursos al sector informal a fin de integrarlo en la economía formal y formular políticas que ofrezcan más oportunidades para incluir la perspectiva de las pequeñas empresas.
- Promoción de sistemas nacionales de ciencia y tecnología integrados a nivel nacional y local para determinar la calidad del trabajo, poniendo énfasis en los mercados internos.

EDUCACIÓN

- Importancia de que los Estados pongan énfasis en las reformas educativas y presten más atención a los programas de capacitación práctica, señalando que estos programas deberían estar disponibles en los ámbitos local, nacional y regional, subrayando la necesidad de crear capacidad en los gobiernos locales en esta materia.
- La importancia de implementar reformas educativas y la necesidad de cerrar la brecha entre la calidad de la educación en las instituciones públicas y en las instituciones privadas, y la disparidad entre los sistemas educativos rurales y urbanos.

IGUALDAD DE GÉNERO

- Desarrollar iniciativas para incluir la equidad de género y los grupos minoritarios en las políticas laborales.

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CUMBRES

- Establecer indicadores y objetivos medibles para evaluar el progreso en la implementación de los mandatos de las Cumbres de las Américas, y la necesidad de que los Estados desarrollen planes de trabajo con objetivos claros y cronogramas precisos para su implementación.

DIVERSIDAD CULTURAL

- La cultura debe tenerse en cuenta como generadora de empleo y que los elementos de la cultura, tales como el arte, son un elemento importante para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

XIV. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, QUITO, ECUADOR, 6 DE JUNIO DE 2004

DEMOCRACIA

- Crear indicadores de buen gobierno y definir los criterios que permitan una aplicación eficiente de la Carta Democrática de la OEA.
- Elaborar e implementar mecanismos de seguimiento en la OEA a través de:
 - a. Informes anuales sobre índices de democracia en base a los cuales se lleve a cabo un proceso de certificación de los países miembros.
 - b. Enviar misiones periódicas de observación.
 - c. Recibir y considerar informes periódicos de la ciudadanía de los países miembros.
 - d. Crear un grupo de trabajo permanente con participación de Sociedad civil que defina indicadores y mecanismos de seguimiento para la aplicación de la Carta Democrática.
 - e. Impulsar acciones de difusión de la Carta Democrática, a través de la Oficina Permanente de la OEA de cada país. Así como, establecer un compromiso con la educación positiva para la democracia.
 - f. Impulsar un debate al interior de la OEA para la inclusión de indicadores de participación ciudadana y garantía de derechos como dimensiones fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.
 - g. Impulsar acciones para fortalecer el sistema de partidos políticos en los países miembros.
 - h. Democratizar el proceso de participación de la sociedad civil en las Asambleas Generales y las Cumbres.

Procesos y procedimientos electorales

- Afirmar el papel del financiamiento político en las contiendas políticas: El financiamiento de partidos y elecciones es un aspecto fundamental de las contiendas políticas. Los partidos políticos requieren recursos para formar nuevos dirigentes, organizar la democracia a su interior, comunicarse con el elector. La legislación de cada país debe asegurar el acceso legítimo a fondos, sean privados o públicos, indispensables para el funcionamiento de los partidos y las campañas políticas.
- Transparencia como un valor fundamental del financiamiento político: la información a la ciudadanía sobre el origen, administración y destino de los recursos constituye un principio esencial del funcionamiento de los partidos y campañas políticas, aplicable tanto a fondos públicos como privados. Esta información debe estar sistematizada, disponible y de fácil acceso para la ciudadanía, con anterioridad a la realización de las elecciones.
- El principio de la igualdad ciudadana como origen de una representación política equitativa. El acceso diferenciado a recursos (fuentes de financiamiento, medios de comunicación, entre otros) no debe ser un elemento que distorsione la representación política de los ciudadanos.
- Velar por la integridad de los representantes electos. Los representantes electos deben ser protegidos contra donaciones que adquieren el carácter de “inversiones” cuyos “dividendos” serán

cobrados en el futuro. El sistema de financiamiento debe desarrollar mecanismos preventivos y de sanción adecuados para impedir esta instrumentación de los cargos públicos para fines privados.

- Garantizar la implementación práctica de las reglas: Los sistemas de financiamiento político necesitan basarse en reglas con capacidad de ser implementadas. Deben contarse con normas viables y órganos de fiscalización profesionales e independientes. Se reconoce la necesidad de asegurar la participación de la sociedad civil en los procesos de fiscalización, como medio para promover la implementación efectiva de estos principios.

Lucha contra la corrupción

- Convención Interamericana contra la Corrupción: Revisión de los cronogramas y los sistemas de evaluación y monitoreo, puesto que es necesario que la evaluación sea más ágil. Esta revisión debe buscar el fortalecimiento del mecanismo y contar con sistemas que incluyan a la Sociedad civil.
- Establecer los mecanismos para sancionar los incumplimientos de los Estados parte. Estos mecanismos deberán contemplar la participación de la Sociedad civil. Se deberá estudiar las distintas posibilidades, especialmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Apoyar los puntos 1 y 2 referentes al Fortalecimiento y Misión de la Secretaría Técnica del Mecanismo y al Financiamiento de la Conferencia de los Estados Parte en el Mecanismo. Se debe añadir presupuesto y búsqueda de fondos para las visitas del Comité de Análisis a cada país.
- Crear un espacio de intercambio de experiencias a fin de desarrollar y difundir un banco de datos / caja de herramientas de amplia difusión de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Dicha campaña deberá ser hecha con una visión hemisférica.
- Que el comité de expertos en el corto plazo desarrolle estándares comunes, junto con la participación de la sociedad civil, sobre la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en los países.
- Que los informes sean publicados periódicamente y de este modo no se dilate por mucho tiempo la entrega de información.
- Incluir en los códigos penales de cada país las normas que apliquen la Convención Interamericana contra la Corrupción.
- Al 2006 el Mecanismo de Seguimiento dé a conocer una clasificación sobre el nivel de cumplimiento de los países de la Convención y que presente un plan de seguimiento de la evaluación de los siguientes 5 años.
- Corrupción en el Sector Privado: Crear una unidad Técnica-Operativa, o en su defecto lograr la constitución de una corte interamericana especializada en el monitoreo, la lucha y la sanción de la corrupción, y en temas como el estudio de la elusión y evasión tributaria, y el desarrollo de normas uniformes, que permitan sancionar la corrupción, especialmente de las empresas transnacionales en los países que conforman el Sistema Interamericano.
- Desarrollar una red interamericana de información electrónica sobre los flujos de bienes, capitales e inversiones entre los estados miembros.
- Propender a la elaboración de una legislación interamericana uniforme sobre contratación pública. Y sugerir que los países miembros establezcan un sistema de veto para las empresas acusadas de corrupción en cualquiera de los estados partes.

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2002-2006

- Desarrollar un mecanismo regulatorio respecto del funcionamiento de los llamados paraísos fiscales.
- Elaborar un código interamericano de responsabilidad empresarial.
- Crear una corte interamericana especializada en sancionar los actos de corrupción.
- Promover la modernización de los entes de control, a través de la implementación de sistemas informáticos uniformes de procedimientos y control.
- Promover la capacitación y difusión en la sociedad civil del rol de la OEA y sus mandatos para fortalecer su participación.
- Trabajar en los sistemas educativos para que sean un medio que permita atender y concienciar sobre el fenómeno de la corrupción y sus consecuencias.
- Establecer un reconocimiento regional a las acciones contra la corrupción. Las categorías podrían ser diversas a medios de comunicación, a los países, empresas a las que más tributan, por ejemplo.
- Impulsar una campaña que fomente la honestidad como un valor importante para los ciudadanos, involucrándolos en prácticas cotidianas y con ejemplos concretos.
- Estas campañas serán conducidas por la OEA y utilizarán los espacios gubernamentales para su promoción.

DERECHOS HUMANOS

- Solicitamos a los Estados miembros para que, en esta Asamblea General a través de la Declaración de Quito y de las resoluciones en materia de derechos humanos y de combate a la corrupción, deben manifestar enfáticamente que la impunidad es una forma de corrupción y, en sí, una violación de los derechos humanos; y que la corrupción es una fuente generadora de violaciones de derechos humanos.
- Los Estados deben asumir su rol de garantes colectivos del sistema. En tal sentido insistimos en la obligación que tienen éstos de cumplir con las decisiones y recomendaciones emanadas de los órganos de protección de los derechos humanos. Especialmente en lo que respecta a las medidas cautelares y provisionales de protección, así como las resoluciones de la Comisión y las sentencias de la Corte. La OEA debe difundir de la manera más amplia posible los informes de la Comisión y la Corte Interamericana sobre el incumplimiento de sus respectivas recomendaciones y decisiones.
- Instamos al Secretario General de la OEA, que encomiende a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la creación de un grupo de trabajo con participación de la sociedad civil, para la elaboración de directrices en mecanismos nacionales de alto nivel, para el cumplimiento eficaz e inmediato de resoluciones y recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos.
- Que la Asamblea General adopte una resolución donde se reitere el apoyo a la labor de los defensores de los derechos humanos, y en la cual, se inste a los Estados americanos a que formulen y ejecuten planes nacionales para la aplicación de los principios contenidos en la declaración de la ONU sobre los defensores de derechos humanos. La resolución igualmente deberá invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que asesore a los Estados en el diseño, implementación de aquellos planes nacionales, y que concluya y difunda el estudio sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en el continente. Asimismo que los Estados estén obligados a presentar informes anuales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

- Instamos al Secretario General de la OEA, que encomiende al Consejo Permanente con los aportes de la CIDH y organizaciones de la sociedad civil, evalúen la creación de un fondo específico para el acceso de la víctima al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y para la producción de pruebas en razón de que la dificultad económica sigue siendo el principal obstáculo para que las víctimas tengan un real acceso al sistema.
- Demandar de la Comisión la elaboración de un informe sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), con expertos independientes. Este informe debe tomar en cuenta la perspectiva de género y etnia. Sugerimos que la Comisión incluya en sus informes periódicos un capítulo específico de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
- Demandar de los Estados parte, la ratificación de los instrumentos internacionales que invocan la protección de derechos humanos. Entre ellos: Convención Americana de Derechos Humanos, Estatuto de Roma, Protocolo de San Salvador, Convención de Belém do Pará, entre otros.
- Instamos a los Estados miembros a la pronta aprobación y adhesión, a la Convención Interamericana Contra el Racismo y la Declaración Interamericana de Derechos de Pueblos Indígenas que se encuentran en proceso de creación en el sistema interamericano.
- Instamos al Secretario General de la OEA y a los Estados miembros, que encomienden a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y la Comisión Interamericana de la Mujer, que realicen una evaluación y redacten un informe del grado de cumplimiento de la Convención de Belem do Pará y asimismo generen mecanismos de seguimiento con la participación de expertos independientes no gubernamentales.
- Aumentar de manera inmediata, significativa y progresiva el presupuesto de los órganos del sistema de protección de derechos humanos, o sea la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en base al Fondo regular de la OEA.
- Instar a los Estados miembros a estudiar otros mecanismos o formas de financiamiento para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Estos mecanismos podrían incluir el canje de la deuda externa o la condonación de intereses de la misma, entre otros.

JUSTICIA

- Se hace un llamado para que los estados tomen medidas efectivas a nivel nacional, especialmente en el fortalecimiento de la justicia. Se considera fundamental: A) Establecer hitos y plazos para evaluar las medidas que se tomen a nivel local. B) Facilitar el acceso a la información que cada una de las instituciones estatales producen; de manera que se pueda hacer las evaluaciones en función de la información empírica, y se promueva la participación informada de la sociedad civil. C) En los casos en que no exista información, u esta es insuficiente o inadecuada, se deben establecer mecanismos de producción y procesamiento de información confiable que pueda alimentar la toma de medidas del sistema. D) Avanzar en el diseño de indicadores que permitan evaluar el impacto de las medidas a nivel local, especialmente lo que se refiere a las reformas de la justicia y su relación en la lucha contra la corrupción.
- Se considera necesario trabajar en el concepto de corrupción de manera que esta incluya el uso abusivo del poder como fuente de violación de derechos humanos y generador de impunidad; “el mal uso del poder” en general y no solamente los recursos financieros; además de la responsabilidad del sector privado en los hechos de corrupción.
- Instamos a los países miembros, que no han ratificado el Estatuto de Roma, que lo hagan, que desarrollen su normativa y que adhieran su Protocolo adicional.

SEGURIDAD HEMISFÉRICA

- Establecer un mecanismo efectivo de diálogo de las OSC con la Comisión de Seguridad Hemisférica, con base a los numerales 33 y 47 de la Declaración de Seguridad de las Américas. Este diálogo deberá efectuarse con la antelación suficiente de las reuniones formales de la organización; con el fin de que las visiones, sugerencia y recomendaciones que emergen de las OSC puedan ser parte efectiva del proceso de debate y decisorio de la OEA.
- Manifestar la necesidad de un reconocimiento explícito del aporte y el rol de las OSC en la prevención de conflictos en las Américas. Las más diversas organizaciones han demostrado su capacidad en el ámbito de la prevención y desactivación de conflictos. En este sentido se llama a los gobiernos a apoyar el establecimiento de mecanismos de alerta temprana y a las OSC para mejorar su capacidad de incidencia en estos mecanismos. Reforzar las capacidades de la sociedad civil para perfeccionar su aporte. Expresar la preocupación de las OSC por el se destacó que la solución al problema haitiano requerirá de un apoyo que involucre a gobiernos, organizaciones de cooperación y de la sociedad civil.
- Expresar la preocupación por la continua dilación en la toma de decisiones vinculadas a organismos, como la Junta Interamericana de Defensa, que desarrolla políticas con un bajo grado de transparencia y que promueve el desarrollo de una diplomacia paralela a la de los organismos constitucionales democráticos. Reafirmar la necesidad de establecer un amplio acceso de información en materias de seguridad y defensa de las Américas.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

- Crear un grupo de trabajo con la Sociedad civil que efectivice las disposiciones contenidas en la Declaración de Nueva León que abarque temas tales como:
 - a. Acceso a información pública;
 - b. Participación efectiva de la Sociedad civil en toma de decisiones;
 - c. Consentimiento fundamentado previo;
 - d. Debido proceso y,
 - e. Rendición de cuentas.

Este grupo debe contar con una representación diversa de la Sociedad civil.

- La OEA deberá garantizar y promover mecanismos y acciones para la difusión, capacitación y adiestramiento a la sociedad civil para el acceso a la información pública y participación pública; e instará a los Estados a difundir el Sistema Interamericano de Información. Para ello la OEA invitara a los Estados miembros a redactar, con participación de la sociedad civil, la Convención Interamericana de Acceso a Información Pública y Participación Pública.
- En el ámbito hemisférico, recomendamos formalmente la creación de un grupo de trabajo que analice y profundice junto a la Sociedad civil y organismos especializados como la relataría de libertad de expresión, sobre cuáles serían las estructuras institucionales y marcos normativos y legales necesarios para garantizar la participación pública y el acceso a la información pública a los pueblos de las Américas y que a su vez fijen estándares mínimos a respetar en relación a estos derechos. Solicitamos el apoyo formal a las resoluciones que se estén negociando a tal efecto.
- Que la OEA inste a sus Estados miembros a garantizar el acceso a la educación para la asimilación de la información pública y para la participación ciudadana.
- Manifestamos nuestra solidaridad por las víctimas de violaciones al derecho a la información pública y la participación pública. Solicitamos a todos los Estados que pongan todos sus esfuerzos para lograr el respeto y la garantía de los derechos mencionados.

- La OEA junto con la participación de la sociedad civil deberá publicar periódicamente el estado del cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones y la incidencia que han tenido en los países.
- La OEA se comprometerá a constituir un grupo de relacionamiento independiente de los gobiernos y un centro de información que permita a la sociedad civil participar en el seguimiento de las resoluciones y declaraciones. Este centro de información deberá considerar que la documentación no se limite a ser jurídica, que se acompañe con indicadores y parámetros para la medición de resultados.
- Demandamos la protección de las personas que participan en la difusión de la información pública.
- Creación de un grupo de trabajo con participación de la Sociedad civil y de la Secretaria de Cumbres de la OEA, que elabore un informe para consideración de la Asamblea General, que contenga recomendaciones para mejorar, fortalecer y perfeccionar los mecanismos de participación ciudadana, en sus diferentes niveles (consulta, diseño, planeación, implementación, monitoreo y evaluación) en el proceso de Cumbres y las actividades de la OEA. Así mismo, que analice las estructuras institucionales y marcos normativos y legales necesarios para garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información a los pueblos de las Américas a nivel nacional. (Existe un disenso en cuanto a la composición del grupo de trabajo, algunos participantes proponen que este grupo de trabajo esté integrado sólo por representantes de la Sociedad civil).
- En el marco de la Asamblea General y de las Cumbres de las Américas institucionalizar el Foro Hemisférico de la Sociedad civil que ya ha venido realizándose en forma previa al Dialogo Informal Gobierno-Sociedad civil, y que éste se realice con la antelación necesaria para que las propuestas de la Sociedad civil puedan ser efectivamente consideradas por los gobiernos previo tanto a las cumbres como a las Asambleas Generales. Para que esta participación sea efectiva y pertinente, la Sociedad civil debe tener acceso a los documentos borradores de negociación de los Estados miembros.
- Una vez aprobado el “Fondo Especifico para Financiar la Participación de las Organizaciones de la Sociedad civil en las Actividades de la OEA y en el Proceso de Cumbres de las Américas” discutir y consultar ampliamente el reglamento que especificará los criterios de asignación de recursos y sus mecanismos de rendición de cuentas con Organizaciones de la Sociedad civil.

DESARROLLO SOSTENIBLE

- Crear una Comisión del Consejo Permanente para el tratamiento de los temas ambientales en el hemisferio; y,
- Solicitar a la Secretaria General que, en consulta con los Estados Miembros, elabore sendos proyectos de Convenciones Interamericanas que establezcan estándares mínimos para la conservación ambiental sobre: Acceso a Recursos Genéticos; Conocimientos Tradicionales; y, otros temas ambientales relevantes para el hemisferio.

COMERCIO Y FINANZAS

- La OEA debe continuar prestando asistencia técnica a los acuerdos de integración regional para elevar la capacidad de negociación de los países en el proceso del ALCA, mandato que recibió de la Primera Cumbre Hemisférica, pero deberá tener en cuenta los cambios ocurridos en los procesos de negociación, en los cuales, de acuerdo a lo convenido en la Octava Reunión Ministerial de Miami, se admite la posibilidad de que los países suscriban distintos niveles de compromiso. Si el ALCA ya no tiene unidireccionalidad, es decir que ya no está limitada a prestar asistencia técnica exclusivamente para la suscripción del ALCA en todos sus términos, la asistencia técnica de la OEA deberá tener la consiguiente multidireccionalidad, esto significa que

dicha asistencia debe prestarse también a los países que no quieran suscribir el texto del ALCA en todos los niveles de compromiso.

- La OEA debe prestar asistencia técnica a los acuerdos de integración regional latinoamericanos a fin de superar su condición actual de acuerdos de libre comercio y conseguir que se profundicen y hagan un uso más eficiente de las instituciones regionales propias de cada acuerdo, de tal manera que pueda hacerse un aprovechamiento eficiente y sustentable de los recursos naturales y humanos de los países miembros para impulsar el desarrollo humanos de los mismos. La coexistencia del ALCA y los acuerdos regionales de integración está explícitamente reconocida por los estados en los términos establecidos desde el inicio. La coexistencia se hace más posible, precisamente si los acuerdos se profundizan, en el sentido de abarcar el desarrollo humano. En el mismo sentido, la OEA debe prestar asistencia técnica, con énfasis en el desarrollo humano, a los países que quieran negociar términos distintos a los establecidos en el ALCA.
- Recomendar a los gobiernos que los términos de las negociaciones de integración en la región, sean estructurados a través de procesos de concertación multisectoriales, y su desarrollo y participación, debidamente informado a la sociedad en general.
- Recomendar a los gobiernos que para los procesos de reestructuración de las deudas publicas de los países del hemisferio se considere:
 - a) los precedentes históricos que han resultado más eficaces para las partes;
 - b) el efecto financiero que produjo la elevación especulativa de las tasas internacionales de interés en los años 1977 hasta 1984; y,
 - c) el oneroso costo del servicio de deuda, frente a la incapacidad de destinar estos fondos en inversión social.

XV. FORO HEMISFÉRICO DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUITO, 26 Y 27 DE ABRIL DE 2004

DEMOCRACIA

- Crear indicadores de “buen gobierno” y definir los criterios que permitan una aplicación eficiente de la Carta Democrática de la OEA.
- Elaborar e implementar mecanismos de seguimiento en la OEA a través de:
 - Informes anuales sobre índices de democracia en base a los cuales se lleve a cabo un proceso de certificación de los países miembros.
 - Enviar misiones periódicas de observación.
 - Recibir y considerar informes periódicos de la ciudadanía de los países miembros.
- Crear un grupo de trabajo permanente con participación de Sociedad Civil que defina indicadores y mecanismos de seguimiento para la aplicación de la Carta Democrática.
- Impulsar acciones de difusión de la Carta Democrática, a través de la Oficina Permanente de la OEA de cada país. Así como, establecer un compromiso con la educación positiva para la democracia.
- Impulsar un debate al interior de la OEA para la inclusión de indicadores de participación ciudadana y garantía de derechos como dimensiones fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.
- Impulsar acciones para fortalecer el sistema de partidos políticos en los países miembros.

- Democratizar el proceso de participación de la sociedad civil en las Asambleas Generales y las Cumbres.

Procesos y procedimientos electorales

- Afirmar el papel del financiamiento político en las contiendas políticas: El financiamiento de partidos y elecciones es un aspecto fundamental de las contiendas políticas. Los partidos políticos requieren recursos para formar nuevos dirigentes, organizar la democracia a su interior, comunicarse con el elector. La legislación de cada país debe asegurar el acceso legítimo a fondos, sean privados o públicos, indispensables para el funcionamiento de los partidos y las campañas políticas.
- Transparencia como un valor fundamental del financiamiento político: la información a la ciudadanía sobre el origen, administración y destino de los recursos constituye un principio esencial del funcionamiento de los partidos y campañas políticas, aplicable tanto a fondos públicos como privados. Esta información debe estar sistematizada, disponible y de fácil acceso para la ciudadanía, con anterioridad a la realización de las elecciones.
- El principio de la igualdad ciudadana como origen de una representación política equitativa. El acceso diferenciado a recursos (fuentes de financiamiento, medios de comunicación, entre otros) no debe ser un elemento que distorsione la representación política de los ciudadanos.
- Velar por la integridad de los representantes electos. Los representantes electos deben ser protegidos contra donaciones que adquieran el carácter de “inversiones” cuyos “dividendos” serán cobrados en el futuro. El sistema de financiamiento debe desarrollar mecanismos preventivos y de sanción adecuados para impedir esta instrumentación de los cargos públicos para fines privados.
- Garantizar la implementación práctica de las reglas: Los sistemas de financiamiento político necesitan basarse en reglas con capacidad de ser implementadas. Deben contarse con normas viables y órganos de fiscalización profesionales e independientes. Se reconoce la necesidad de asegurar la participación de la sociedad civil en los procesos de fiscalización, como medio para promover la implementación efectiva de estos principios.

Transparencia y buena gestión gubernamental

- La OEA deberá garantizar y promover mecanismos y acciones para la difusión, capacitación y adiestramiento a la sociedad civil para el acceso a la información pública y participación pública; e instará a los Estados a difundir el Sistema Interamericano de Información. Para ello la OEA invitara a los Estados miembros a redactar, con participación de la sociedad civil, la Convención Interamericana de Acceso a Información Pública y Participación Pública.
- En el ámbito hemisférico, recomendamos formalmente la creación de un grupo de trabajo que analice y profundice junto a la Sociedad Civil y organismos especializados como la relataría de libertad de expresión, sobre cuales serian las estructuras institucionales y marcos normativos y legales necesarios para garantizar la participación pública y el acceso a la información pública a los pueblos de las Américas y que a su vez fijen estándares mínimos a respetar en relación a estos derechos. Solicitamos el apoyo formal a las resoluciones que se estén negociando a tal efecto.
- Que la OEA inste a sus Estados miembros a garantizar el acceso a la educación para la asimilación de la información pública y para la participación ciudadana.
- Manifestamos nuestra solidaridad por las víctimas de violaciones al derecho a la información pública y la participación pública. Solicitamos a todos los Estados que pongan todos sus esfuerzos para lograr el respeto y la garantía de los derechos mencionados.

- La OEA junto con la participación de la sociedad civil deberán publicar periódicamente el estado del cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones y la incidencia que han tenido en los países.
- La OEA se comprometerá a constituir un grupo de relacionamiento independiente de los gobiernos y un centro de información que permita a la sociedad civil participar en el seguimiento de las resoluciones y declaraciones. Este centro de información deberá considerar que la documentación no se limite a ser jurídica, que se acompañe con indicadores y parámetros para la medición de resultados.
- Demandamos la protección de las personas que participan en la difusión de la información pública.

Lucha contra la corrupción

- Se considera necesario trabajar en el concepto de corrupción de manera que esta incluya el uso abusivo del poder como fuente de violación de derechos humanos y generador de impunidad; “el mal uso del poder” en general y no solamente los recursos financieros; además de la responsabilidad del sector privado en los hechos de corrupción.
- Convención Interamericana Contra la Corrupción:
 - Revisión de los cronogramas y los sistemas de evaluación y monitoreo, puesto que es necesario que la evaluación sea más ágil. Esta revisión debe buscar el fortalecimiento del mecanismo y contar con sistemas que incluyan a la Sociedad Civil.
 - Establecer los mecanismos para sancionar los incumplimientos de los Estados parte. Estos mecanismos deberán contemplar la participación de la Sociedad Civil. Se deberá estudiar las distintas posibilidades, especialmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 - Apoyar los puntos I y II referentes al Fortalecimiento y Misión de la Secretaría Técnica del Mecanismo y al Financiamiento de la Conferencia de los Estados Parte en el Mecanismo. Se debe añadir presupuesto y búsqueda de fondos para las visitas del Comité de Análisis a cada país.
 - Crear un espacio de intercambio de experiencias a fin de desarrollar y difundir un Banco de Datos / Caja de Herramientas de amplia difusión de la CICC. Dicha campaña deberá ser hecha con una visión hemisférica.
 - Que el comité de expertos en el corto plazo – quizás para la cumbre de Buenos Aires- desarrolle estándares comunes, junto con la participación de la sociedad civil, sobre la aplicación de la CICC en los países.
 - Que los informes sean publicados periódicamente y de este modo no se dilate por mucho tiempo la entrega de información.
 - Incluir en los códigos penales de cada país las normas que apliquen la Convención.
 - Al 2006 el Mecanismo de Seguimiento dé a conocer una clasificación sobre el nivel de cumplimiento de los países de la Convención. Y que presente un plan de seguimiento de la evaluación de los siguientes 5 años.
- Corrupción en el Sector Privado:
 - Crear una unidad Técnica-Operativa, o en su defecto lograr la constitución de una corte especializada en el monitoreo, la lucha y la sanción de la corrupción, y en temas como el estudio de la elusión y evasión tributaria, y el desarrollo de normas uniformes, que permitan sancionar la corrupción, especialmente de las empresas transnacionales (ETN) en los países que conforman el Sistema Interamericano.
 - Desarrollar una Red Interamericana de información electrónica sobre los flujos de bienes, capitales e inversiones entre los estados miembros.

- Propender a la elaboración de una legislación interamericana uniforme sobre contratación pública. Y sugerir que los países miembros establezcan un sistema de veto para las empresas acusadas de corrupción en cualquiera de los estados partes.
- Desarrollar un mecanismo regulatorio respecto del funcionamiento de los llamados paraísos fiscales.
- Elaborar un código interamericano de responsabilidad empresarial.
- Crear una corte interamericana especializada en sancionar los actos de corrupción.
- Que se promueva la modernización de los entes de control, a través de la implementación de sistemas informáticos uniformes de procedimientos y control.
- Promover la capacitación y difusión en la sociedad civil del rol de la OEA y sus mandatos para fortalecer su participación.
- Trabajar en los sistemas educativos para que sean un medio que permita atender y concienciar sobre el fenómeno de la corrupción y sus consecuencias.
- Establecer un reconocimiento regional a las acciones contra la corrupción. Las categorías podrían ser diversas a medios de comunicación, a los países, empresas a las que mas tributan, etc.
- Impulsar una campaña que fomente la honestidad como un valor importante para los ciudadanos, involucrándolos en prácticas cotidianas y con ejemplos concretos.
- Estas campañas serán conducidas por la OEA y utilizarán los espacios gubernamentales para promoción.

DERECHOS HUMANOS

- Solicitamos a los Estados miembros para que, en esta Asamblea General a través de la Declaración de Quito y de las resoluciones en materia de derechos humanos y de combate a la corrupción, deben manifestar enfáticamente que la impunidad es una forma de corrupción y, en sí, una violación de los derechos humanos; y que la corrupción es una fuente generadora de violaciones de derechos humanos.
- Los Estados deben asumir su rol de garantes colectivos del sistema. En tal sentido insistimos en la obligación que tienen éstos de cumplir con las decisiones y recomendaciones emanadas de los órganos de protección de los derechos humanos. Especialmente en lo que respecta a las medidas cautelares y provisionales de protección, así como las resoluciones de la Comisión y las sentencias de la Corte. La OEA deben difundir de la manera más amplia posible los informes de la Comisión y la Corte Interamericana sobre el incumplimiento de sus respectivas recomendaciones y decisiones.
- Instamos al Secretario General de la OEA, que encomiende a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la creación de un grupo de trabajo con participación de la sociedad civil, para la elaboración de directrices en mecanismos nacionales de alto nivel, para el cumplimiento eficaz e inmediato de resoluciones y recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos.
- Que la Asamblea General adopte una resolución donde se reitere el apoyo a la labor de los defensores de los derechos humanos, y en la cual, se inste a los Estados americanos a que formulen y ejecuten planes nacionales para la aplicación de los principios contenidos en la declaración de la ONU sobre los defensores de derechos humanos. La resolución igualmente deberá invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que asesore a los Estados en el diseño, implementación de aquellos planes nacionales, y que concluya y difunda el estudio sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en el continente. Asimismo que los Estados estén obligados a presentar informes anuales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
- Instamos al Secretario General de la OEA, que encomiende al Consejo Permanente con los aportes de la CIDH y organizaciones de la sociedad civil, evalúen la creación de un fondo específico para el acceso de la víctima al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y para la

producción de pruebas en razón de que la dificultad económica sigue siendo el principal obstáculo para que las víctimas tengan un real acceso al sistema.

- Demandar de la Comisión la elaboración de un informe sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), con expertos independientes. Este informe debe tomar en cuenta la perspectiva de género y etnia. Sugerimos que la Comisión incluya en sus informes periódicos un capítulo específico de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
- Demandar de los Estados parte, la ratificación de los instrumentos internacionales que invocan la protección de derechos humanos. Entre ellos: Convención Americana de Derechos Humanos, Estatuto de Roma, Protocolo de San Salvador, Convención de Belém do Pará, entre otros.
- Instamos a los Estados miembros a la pronta aprobación y adhesión, a la Convención Interamericana Contra el Racismo y la Declaración Interamericana de Derechos de Pueblos Indígenas que se encuentran en proceso de creación en el sistema interamericano.
- Instamos al Secretario General de la OEA y a los Estados miembros, que encomienden a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y la Comisión Interamericana de la Mujer, que realicen una evaluación y redacten un informe del grado de cumplimiento de la Convención de Belem do Pará y asimismo generen mecanismos de seguimiento con la participación de expertos independientes no gubernamentales.
- Aumentar de manera inmediata, significativa y progresiva el presupuesto de los órganos del sistema de protección de derechos humanos, o sea la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en base al fondo regular de la OEA.
- Instar a los Estados miembros a estudiar otros mecanismos o formas de financiamiento para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Estos mecanismos podrían incluir el canje de la deuda externa o la condonación de intereses de la misma, entre otros.
- Instamos a los países miembros, que no han ratificado el Estatuto de Roma, que lo hagan, que desarrollen su normativa y que adhieran su Protocolo adicional.

JUSTICIA

- Se hace un llamado para que los estados tomen medidas efectivas a nivel nacional, especialmente en el fortalecimiento de la justicia. Se considera fundamental: A) Establecer hitos y plazos para evaluar las medidas que se tomen a nivel local. B) Facilitar el acceso a la información que cada una de las instituciones estatales producen; de manera que se pueda hacer las evaluaciones en función de la información empírica, y se promueva la participación informada de la sociedad civil. C) En los casos en que no exista información, u esta es insuficiente o inadecuada, se deben establecer mecanismos de producción y procesamiento de información confiable que pueda alimentar la toma de medidas del sistema. D) Avanzar en el diseño de indicadores que permitan evaluar el impacto de las medidas a nivel local, especialmente lo que se refiere a las reformas de la justicia y su relación en la lucha contra la corrupción.

SEGURIDAD HEMISFÉRICA

- Establecer un mecanismo efectivo de diálogo de las OSC con la Comisión de Seguridad Hemisférica, con base a los numerales 33 y 47 de la Declaración de Seguridad de las Américas. Este diálogo deberá efectuarse con la antelación suficiente de las reuniones formales de la organización; con el fin de que las visiones, sugerencia y recomendaciones que emergen de las OSC puedan ser parte efectiva del proceso de debate y decisorio de la OEA.\

- Manifestar la necesidad de un reconocimiento explícito del aporte y el rol de las OSC en la prevención de conflictos en las Américas. Las más diversas organizaciones han demostrado su capacidad en el ámbito de la prevención y desactivación de conflictos. En este sentido se llama a los gobiernos a apoyar el establecimiento de mecanismos de alerta temprana y a las OSC para mejorar su capacidad de incidencia en estos mecanismos. Reforzar las capacidades de la sociedad civil para perfeccionar su aporte. Expresar la preocupación de las OSC por el se destacó que la solución al problema haitiano requerirá de un apoyo que involucre a gobiernos, organizaciones de cooperación y de la sociedad civil.
- Expresar la preocupación por la continua dilación en la toma de decisiones vinculadas a organismos, como la Junta Interamericana de Defensa, que desarrolla políticas con un bajo grado de transparencia y que promueve el desarrollo de una diplomacia paralela a la de los organismos constitucionales democráticos. Reafirmar la necesidad de establecer un amplio acceso de información en materias de seguridad y defensa de las Américas.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

- Creación de un grupo de trabajo con participación de la Sociedad Civil y de la Secretaria de Cumbres de la OEA, que elabore un informe para consideración de la Asamblea General, que contenga recomendaciones para mejorar, fortalecer y perfeccionar los mecanismos de participación ciudadana, en sus diferentes niveles (consulta, diseño, planeación, implementación, monitoreo y evaluación) en el proceso de Cumbres y las actividades de la OEA. Así mismo, que analice las estructuras institucionales y marcos normativos y legales necesarios para garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información a los pueblos de las Américas a nivel nacional. (Existe un disenso en cuanto a la composición del grupo de trabajo, algunos participantes proponen que este grupo de trabajo esté integrado sólo por representantes de la Sociedad Civil).
- En el marco de la Asamblea General y de las Cumbres de las Américas institucionalizar el Foro Hemisférico de la Sociedad Civil que ya ha venido realizándose en forma previa al Dialogo Informal Gobierno-Sociedad Civil, y que éste se realice con la antelación necesaria para que las propuestas de la Sociedad Civil puedan ser efectivamente consideradas por los gobiernos previo tanto a las cumbres como a las Asambleas Generales. Para que esta participación sea efectiva y pertinente, la Sociedad Civil debe tener acceso a los documentos borradores de negociación de los Estados miembros.
- Una vez aprobado el “Fondo Especifico para Financiar la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA y en el Proceso de Cumbres de las Américas” discutir y consultar ampliamente el reglamento que especificará los criterios de asignación de recursos y sus mecanismos de rendición de cuentas con Organizaciones de la Sociedad Civil.

COMERCIO Y FINANZAS

- La OEA debe continuar prestando asistencia técnica a los acuerdos de integración regional para elevar la capacidad de negociación de los países en el proceso del ALCA, mandato que recibió de la Primera Cumbre Hemisférica, pero deberá tener en cuenta los cambios ocurridos en los procesos de negociación, en los cuales, de acuerdo a lo convenido en la Octava Reunión Ministerial de Miami, se admite la posibilidad de que los países suscriban distintos niveles de compromiso. Si el ALCA ya no tiene unidireccionalidad, es decir que ya no está limitada a prestar asistencia técnica exclusivamente para la suscripción del ALCA en todos sus términos, la asistencia técnica de la OEA deberá tener la consiguiente multidireccionalidad, esto significa que dicha asistencia debe prestarse también a los países que no quieren suscribir el texto del ALCA en todos los niveles de compromiso.
- La OEA debe prestar asistencia técnica a los acuerdos de integración regional latinoamericanos a fin de superar su condición actual de acuerdos de libre comercio y conseguir que se profundicen y hagan un uso más eficiente de las instituciones regionales propias de cada acuerdo, de tal manera

que pueda hacerse un aprovechamiento eficiente y sustentable de los recursos naturales y humanos de los países miembros para impulsar el desarrollo humano de los mismos. La coexistencia del ALCA y los acuerdos regionales de integración está explícitamente reconocida por los estados en los términos establecidos desde el inicio. La coexistencia se hace más posible, precisamente si los acuerdos se profundizan, en el sentido de abarcar el desarrollo humano. En el mismo sentido, la OEA debe prestar asistencia técnica, con énfasis en el desarrollo humano, a los países que quieran negociar términos distintos a los establecidos en el ALCA.

- Recomendar a los gobiernos que para los procesos de reestructuración de las deudas públicas de los países del hemisferio se considere:
 - los precedentes históricos que han resultado más eficaces para las partes;
 - el efecto financiero que produjo la elevación especulativa de las tasas internacionales de interés en los años 1977 hasta 1984; y,
 - el oneroso costo del servicio de deuda, frente a la incapacidad de destinar estos fondos en inversión social.
- Recomendar a los gobiernos que los términos de las negociaciones de integración en la región, sean estructurados a través de procesos de concertación multisectoriales, y su desarrollo y participación, debidamente informado a la sociedad en general.

DESARROLLO SOSTENIBLE

- Crear un grupo de trabajo con la Sociedad Civil que efectivice las disposiciones contenidas en la Declaración de Nueva León que abarque temas tales como:
 - a. Acceso a información pública;
 - b. Participación efectiva de la Sociedad Civil en toma de decisiones;
 - c. Consentimiento fundamentado previo;
 - d. Debido proceso y,
 - e. Rendición de cuentas.

Este grupo debe contar con una representación diversa de la Sociedad Civil.

- Crear una Comisión del Consejo Permanente para el tratamiento de los temas ambientales en el hemisferio; y,
- Solicitar a la Secretaría General que, en consulta con los Estados Miembros, elabore sendos proyectos de Convenciones Interamericanas que establezcan estándares mínimos para la conservación ambiental sobre: Acceso a Recursos Genéticos; Conocimientos Tradicionales; y, otros temas ambientales relevantes para el hemisferio.

XVI. FORO AVANCES Y DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DE LA CUMBRE EXTRAORDINARIA DE LAS AMÉRICAS, MONTERREY, MÉXICO, 10 DE ENERO DE 2004

DERECHOS HUMANOS

- La gobernabilidad democrática implica el fortalecimiento del Sistema Interamericano de promoción y protección de los derechos humanos como garante de los mismos a través del cumplimiento de las decisiones de la Corte y de la Comisión, la universalización del sistema, la adecuación de las legislaciones internas para la garantía de los derechos humanos y de que el sistema cuente con un presupuesto adecuado para su funcionamiento.

- Es imprescindible para la consolidación de la democracia combatir la impunidad de los funcionarios corruptos y sobretodo la de los perpetradores de violaciones graves y/o sistemáticas a los Derechos Humanos.
- Por ultimo consideramos fundamental que cualquier acción de seguridad interna o de combate al terrorismo este sustentada en la garantía plena de los Derechos Humanos.

COMERCIO Y FINANZAS

- Los Estados deben someter todos los acuerdos de libre comercio y de inversión a las normas y estándares internacionales de derechos humanos y protección al medio ambiente. En caso de conflicto entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Comercial Internacional, los Estados deben reconocer de manera formal la primacía de los instrumentos de derechos humanos.
- Los nuevos acuerdos comerciales entre los países de la región deben ser sometidos a estudios más profundos de impacto de sustentabilidad independientes, transparentes y participativos. Estos estudios deben estar hechos antes de la conclusión de las negociaciones a nivel hemisférico y sub-regional y deben hacerse con la participación de los organismos Intergubernamentales relevantes y de la sociedad civil.
- Todos los nuevos acuerdos comerciales y de inversión deben tener dentro de su marco mecanismos de cooperación social y ecológica, los cuales deberán involucrar a la sociedad civil.
- Para lograr un desarrollo económico sustentable con equidad, es indispensable la inversión en investigación tecnológica, jurídica y científica.
- Debe revisarse la política de subsidios en cada país a fin de asegurar por una parte la sustentabilidad y competencia leal del sector agropecuario y por otra el acceso e las personas más desprotegidas, a bienes y servicios que les permitan el ejercicio de sus derechos humanos.
- Debe incorporarse dentro de las normas de libre comercio, la tendencia a lograr en los países, proporcionalidad entre el ingreso de las personas y el costo de los bienes y servicios.
- Al promover y fomentar la inversión extranjera, los Estados deben asegurarse que las empresas respeten los derechos humanos laborales reconocidos nacional e internacionalmente, la protección del ambiente y la contribución fiscal en igualdad de condiciones respecto del sector productivo nacional.
- El Estado tiene un papel clave en invertir en infraestructura física a fin de garantizar el acceso y satisfacción de los derechos y necesidades básicas de la población. El BID debe fortalecer sus esfuerzos para ayudar a los Estados a garantizar el desarrollo de una infraestructura suficiente.

CRECIMIENTO CON EQUIDAD

- La comunidad democrática debe proteger y fortalecer los derechos laborales incluyendo los mencionados en la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Derechos Fundamentales de los Trabajadores.
- Las políticas de crecimiento económico tienen que ser equitativas entre las generaciones: el desarrollo sustentable.
- Para esta intergeneracionalidad, las políticas e instituciones económicas deben ser coherentes con los objetivos y regímenes sociales y ambientales.

- Uno de los problemas más importantes para lograr el desarrollo sustentable de la región es el cambio climático. Los gobiernos y las sociedades necesitan tomar medidas concretas e inmediatas para evitar la destrucción ambiental, social, cultural, provocada por este cambio. Para ello los Estados deben ratificar y aplicar el Protocolo de Kyoto.

XVII. FORO REGIONAL, LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN HEMISFÉRICA EN EL MARCO DE LA CUMBRE EXTRAORDINARIA DE LAS AMÉRICAS, MONTERREY, MÉXICO, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2003

DEMOCRACIA

Procesos y procedimientos electorales

- Transparentar el financiamiento público y privado de la actividad política, tanto en campañas electorales como en el financiamiento ordinario.
- Establecer controles sancionatorios a través de tribunales electorales independientes.
- Prohibir el financiamiento oculto de la actividad política a través de la derivación irregular de fondos y recursos públicos designados por concurso público a funcionarios públicos no políticos y penalizando el clientelismo político como por ejemplo el uso discrecional del presupuesto asistencial.
- Mejorar y elevar el nivel de participación y representación electoral de los grupos minoritarios de la región. (indígenas, afro-latinos y personas con discapacidades, VIH-Sida)
- Realizar estudios de investigación sobre las normas y prácticas actuales en el desempeño y nivel de la participación de los grupos minoritarios en los procesos electorales.
- Impulsar proyectos de asesoría técnica con las organizaciones de grupos minoritarios para la promoción del ejercicio del derecho al voto de éstos, en los procesos electorales.

Fortalecimiento de los gobiernos locales

- Asegurar que la opinión de la ciudadanía sea incorporada en todas las decisiones del desarrollo de la comunidad, fortaleciendo los mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos locales y subnacionales, así como para la participación ciudadana tales como: consultas, plebiscitos, entre otros, garantizando que estos mecanismos funcionen de forma efectiva.
- Proveer capacitación técnica e institucional que apoyen la modernización de las administraciones locales, especialmente en la generación y recaudación de recursos propios por parte de las municipalidades.
- Asegurar la existencia de normativas que delimiten claramente las competencias y responsabilidades de los gobiernos locales y subnacionales con relación al gobierno nacional, garantizando que exista coherencia entre el nivel de transferencia de competencias y recursos de la instancia nacional a las locales.
- Educar a la ciudadanía en el ejercicio de todos sus derechos y responsabilidades para que su participación en el ámbito local sea más efectiva.

- Garantizar que las instancias de cooperación entre los gobiernos locales y subnacionales y la ciudadanía cuenten con los recursos necesarios para cumplir con las funciones que establece la Ley.

Transparencia y buena gestión gubernamental

- Impulsar la existencia de leyes que garanticen el libre acceso a la información pública, en aquellos países donde no existe. En aquellos países que si existe dicha ley, perfeccionar la aplicación de esta de forma tal que se asegure el acceso efectivo y oportuno a la información por parte de la ciudadanía. Es fundamental que dichas leyes cumplan con ciertos estándares mínimos para garantizar el derecho de acceso a la información pública:³
- Establecer claramente en dichas leyes las excepciones al acceso a la información pública. Dichas excepciones deben ser sólo las básicas y fundamentales, de interpretación restrictiva y justificadas.
- Establecer sanciones efectivas para los funcionarios que incumplen las normas y crear organismos autónomos de fiscalización de la aplicación de las normativas, con poder de aplicación de dichas sanciones.
- Educar y sensibilizar a la ciudadanía, partidos políticos y funcionarios públicos en el ejercicio de este derecho de manera de reducir la brecha entre gobernados y gobernantes.
- Masificar el uso de las páginas web oficiales en los ámbitos regional, nacional y local con el fin de ampliar la transparencia en los procesos de contratación en estos niveles y de responsabilidad gubernamental. Asimismo, en forma paralela, promover la utilización de otros medios que aseguren la llegada a sectores sociales que no tienen acceso a tecnología de la información.
- Mejorar sus mecanismos de información de manera tal que esta sea profunda, pertinente, actualizada, proveída en forma gratuita y comprensible atendiendo la diversidad cultural de la población, en los países que sean pertinentes. Determinar la necesidad de un instrumento regional vinculante que establezca los estándares mínimos de legislación sobre acceso a la información pública.

DERECHOS HUMANOS

- Diseñar e impulsar políticas y programas económicos y sociales basados en los derechos humanos reconocidos internacionalmente para garantizar su efectividad, sostenibilidad, carácter incluyente y equitativo.
- Dar un seguimiento puntual a los compromisos adquiridos en la Conferencia Especial contra el Racismo, la Discriminación racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
- Cumplir cabalmente con todos los compromisos adquiridos en el Plan de Acción de Québec en materia de derechos humanos.
- Hacer efectivos los compromisos adquiridos de aumentar sustancial y progresivamente los presupuestos de la CIDH y la COIDH, en cumplimiento a las diversas resoluciones de la

³ Dichos estándares mínimos son:

- Es información pública aquella que está en poder de la administración pública
- Cualquier persona puede solicitar información pública
- No es necesario explicitar motivos para solicitar información pública
- Las excepciones deben estar claramente establecidas en la ley
- La legislación debe establecer plazos

Asamblea General en esta materia. Así como realizar todas las acciones necesarias para fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, entre ellas hacer efectivo el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y las resoluciones de la COIDH.

- La firma y ratificación de los instrumentos interamericanos y universales de protección de los derechos humanos.
- Que en el marco de la conmemoración de los 10 años de la Convención de Belem Do Para, y en seguimiento a los compromisos de Québec se: “incorporen plenamente los derechos humanos de la mujer en la agenda de trabajo de las instituciones hemisféricas, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH, e incrementar la presentación de mujeres como candidatas para integrar estos órganos.

Migración

- Promover los derechos humanos de los migrantes y sus familias.
- Fortalecer la aplicación del principio de no-discriminación y resguardo de la integridad de los migrantes, en particular, cuando estos son objeto de medidas administrativas migratorias.
- Exhortar por la ratificación de la Convención Internacional de los Trabajadores Migrantes y sus familias.
- Diseño y desarrollo de políticas públicas sobre migraciones inspiradas en los Derechos Humanos.

Libertad de opinión y de expresión

- Asegurar que la legislación nacional sobre libertad de expresión esté acorde a los estándares internacionales. Específicamente, suprimir la práctica de la censura en cualquiera de sus formas, respetando fielmente los mandatos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Desarrollar programas de educación, sensibilización y capacitación a la ciudadanía y a funcionarios públicos en el ejercicio de este derecho.
- Garantizar la protección de los periodistas y el respeto al libre ejercicio de la profesión, y permitir el libre acceso a las fuentes de información pública, respetando siempre el derecho a la privacidad de las personas.
- Impulsar un proceso de reforma legal al marco jurídico donde se restrinjan los monopolios garantizando que la propiedad de los medios de comunicación no pueda estar concentrada en pocos propietarios.
- Asegurar que la legislación nacional de cada país garantice el derecho de asociación y de expresión de las manifestaciones culturales y artísticas, así como la posibilidad de que los grupos minoritarios puedan expresarse libremente.

SEGURIDAD HEMISFÉRICA

- Los Estados reconozcan la necesidad de fortalecer el rol de la sociedad civil en lo que a prevención del conflicto (entendida como *la identificación y prevención de la emergencia, escalada, re-escalada o propagación de conflicto armado*) y construcción de la paz, respecta.

- Exista un incremento y mejoramiento de la interacción entre la sociedad civil y la Organización de Estados Americanos, y los gobiernos, para así alcanzar un planteamiento más integrado y coherente sobre la prevención de conflictos.
- Se propone la realización de un “Plebiscito Mundial”, a realizarse en forma simultánea en todas las naciones del mundo, liderado por la ONU., cuyo objetivo es consultar a cada persona sobre un aspecto fundamental de sus vidas: erradicar para siempre las guerras, suprimir la fabricación de armas, el almacenamiento y su comercialización. Con el objeto que este evento tenga validez legal, se propone que este acuerdo modifique cada Constitución de cada nación, formando parte de ella.
- Como es necesario reconstruir nuestra actual forma de vivir, se propone establecer un “Fondo de Solidaridad Internacional” de lo que ahorre cada nación gracias al desarme:
 - a. Un 10% a socorrer a los pueblos más desposeídos y establecer una cultura de paz en todo el mundo;
 - b. Un 10% a mantener una Fuerza de Vigilancia Multilateral para prevenir cualquier foco de violencia y 10% para indemnizar a aquellos estamentos que participan en el actual sistema armado, de tal manera que las fábricas se reconviertan y las instituciones dedicadas a defensa se transformen en instituciones de construcción de nuevas ideas de crecimiento a favor del ser humano. Esta indemnización será por 10 años y estará exenta de tributos.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

- Fomentar la participación social.
- Institucionalizar la participación de la sociedad civil en las políticas sociales, tanto en su diseño como en su priorización, ejecución y evaluación. Para hacer efectiva la presencia de la sociedad, en las decisiones se pondrá en funcionamiento un sistema nacional, regional y local de diálogo y concertación propiciando condiciones y recursos para su cumplimiento, promoviendo en especial el involucramiento de sectores excluidos.
- Crear una Comisión Consultiva permanente conformada por OSC’s registradas ante la OEA.
- Formalizar e institucionalizar espacios de dialogo entre los gobiernos y las OSC’s en los Procesos de Cumbres, específicamente:
 - **A nivel regional:**
 - Fortalecer y profundizar el espacio de diálogo en cada GRIC entre los Coordinadores Nacionales y las organizaciones de la sociedad civil OSC’s con el objetivo de presentar propuestas y/o evaluación de la implementación de mandatos.
 - Crear una Comisión Consultiva permanente conformada por OSC’s acreditadas ante la OEA con el objetivo de tener un diálogo informal y propositivo con los gobiernos durante el proceso de preparación e implementación de Cumbres.
 - Institucionalizar un espacio de diálogo entre Cancilleres y las OSC’s en la agenda oficial de las Cumbres.
 - La Secretaría de Cumbres de las Américas de la OEA será la responsable de organizar esta participación.

- **A nivel nacional:**
 - Que cada Cancillería realice reuniones periódicas con OSC's con el objetivo de informar sobre el estado de cumplimiento del Proceso de Cumbres y recoger ideas.
 - Considerar la posibilidad de incorporar representantes de OSC's en las delegaciones oficiales al GRIC y Cumbres de las Américas.
 - Preparar un Informe Anual para ser ampliamente difundido sobre avances y desafíos en la implementación de los compromisos adquiridos en las Cumbres.
 - Tal como esta incluido en los Planes de Acción de Cumbres anteriores, reconocemos la necesidad de proveer recursos para fortalecer el Proceso de Cumbres con la participación de OSC's.

CRECIMIENTO CON EQUIDAD

- Las políticas macroeconómicas han priorizado la estabilidad sobre el crecimiento y deben combinar ambos objetivos.
- Se debe prestar mayor atención a la dependencia fiscal de los países con fuerte dependencia del comercio exterior frente a la apertura comercial.
- Se debe brindar una solución política (alivianar su peso) al problema de la deuda externa de los países altamente endeudados.
- Asegurar que el crecimiento económico sea de calidad, es decir, prestar atención al problema de la estructura del crecimiento y a la estrategia de creación de empleos. Este debe estar asociado al desarrollo de redes de seguridad social que contribuyan a reducir la vulnerabilidad. Se debe reexaminar la propia noción de trabajo y extenderla a otras actividades humanas consideradas bajo otras designaciones.
- Apoyar el desarrollo de las PyMES facilitando el acceso al crédito, creando un ambiente jurídico adecuado e implementando servicios para aumentar la competitividad.
- Desarrollar acciones decididas y concretas en relación al trato de las economías de menor desarrollo relativo en los procesos de liberalización del comercio exterior.
- Incorporar a la agenda hemisférica la cuestión de la transformación agraria.
- No se trata solamente de crecer sino de crecer con calidad, se debe prestar atención al problema de la estructura del crecimiento económico y la estrategia de creación del empleo de calidad, protegidos. Esta estructura define la calidad de los empleos que se generan.
- La calidad del empleo debe estar asociado al desarrollo de redes de seguridad social que contribuyan a reducir la vulnerabilidad. A su vez, se debe reexaminar la propia noción de trabajo y extenderla a otras actividades humanas hoy consideradas bajo otras designaciones.
- Las PyMES han sido dinámicas en la creación de empleos. Sin embargo se han mostrado vulnerables a los cambios. Se requiere un apoyo integral a este sector: acceso al crédito, ambiente jurídico y servicios para la competitividad.
- Fortalecer la capacidad recaudadora del Estado a través de su aparato fiscal.

COMERCIO Y FINANZAS

- El régimen de comercio no le ha dado suficiente énfasis a las diferencia de tamaño y nivel de desarrollo entre los países. Debe haber acciones decididas y concretas con relación al trato de las economías de menor desarrollo relativo.
- Garantizar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento como derechos universales, enfatizando en sectores sociales más desprotegidos.

AGRICULTURA

- El campesinado y el desarrollo agrario es uno de los grandes ausentes en la agenda hemisférica. Al mismo tiempo, el campesinado parece ser el gran perdedor de la liberalización comercial, lo que ha acrecentado las presiones migratorias.
- Los Estados deberán dar un decidido impulso a la transformación agraria, y en esa agenda juegan un rol central los derechos de propiedad, y el impulso a una reforma agraria integral. De esta forma se incorporaría al proceso de integración, respetando los derechos y la autonomía de este sector de la población.

EDUCACIÓN

- El Estado tiene un rol central en la inversión educativa, en un contexto de restricción fiscal, como motor del desarrollo económico y de la ampliación de la ciudadanía.
- La educación debe enfocarse no solamente a los niños y jóvenes sino también a los adultos, con un esfuerzo en proporcionar educación formal y no sólo capacitación laboral. Cualquier emprendimiento requiere competencias educativas básicas.
- Continuar impulsando la descentralización y exigir amplias cuotas de participación en el manejo de los sistemas educativos.
- Aumentar y reasignar el gasto público en educación por alumno, enfrentando las graves inequidades existentes.
- Mejorar las incentivos para una docencia con calidad, relacionando los nuevos aumentos salariales a la implementación de políticas que tengan en cuenta el desempeño.
- Asegurar que el desarrollo de los estándares se vincule a otros elementos del sistema educativo y que sean de utilidad efectiva.
- Fortalecer la aplicación de pruebas de aprendizaje a nivel nacional que garanticen modos equitativos en el acceso a la calidad de la educación.
- Invertir en la educación formal de la población de adultos, no solamente en niños y jóvenes

SALUD

- Educación sobre salud reproductiva y acceso a métodos anticonceptivos y de prevención del VIH/SIDA y otras ETS para ambos géneros.
- Cuidados prenatales, seguimiento del embarazo y de lactantes.
- Control de crecimiento y desarrollo infantil, acceso a polivitamínicos y medicamentos.

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2002-2006

- Salud mental y prevención de adicciones.
- Atención a grupos prioritarios tales como: tercera edad, personas con discapacidad, violencia intrafamiliar.
- VIH/SIDA: Basados en los acuerdos de la Cumbre de Québec que reconocieron que VIH/SIDA es una amenaza mayor a la seguridad de nuestras poblaciones, recomendamos aumentar los fondos destinados a prevención, educación y acceso a cuidado y tratamiento tanto como a la investigación. Recomendamos incluir la participación de la sociedad y especialmente de las poblaciones en riesgo en los planes de acción a implementarse a través del logro de los siguientes objetivos:
 - Campañas efectivas de información;
 - Implementar planes nacionales eficaces y medibles para aumentar el acceso a anti-retrovirales de personas con VIH/SIDA que deberán ser presentados ante la próxima Cumbre de las Américas, Argentina, 2005.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

- Que los Estados del hemisferio apoyen la elaboración y aprobación del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas consensuado con la participación de los interesados.
- Recomendar el establecimiento de una instancia permanente de composición bipartita (Estados e indígenas) al más alto nivel del sistema interamericano, discutido con los interesados, para dar seguimiento a los acuerdos en la materia.
- Recomendar al BID establecer una política de desarrollo para los pueblos indígenas de las Américas elaborado en conjunto con estos.
- Apoyar la elaboración y aprobación del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas consensuado con la participación de los interesados.
- Recomendar el establecimiento de una instancia permanente de composición bipartita (Estados e indígenas) al más alto nivel del sistema interamericano, discutido con los interesados, para dar seguimiento a los acuerdos en la materia.

XVIII. FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL CON OCASIÓN DE LA XXXIII ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA SANTIAGO DE CHILE, 7 DE JUNIO, 2003

DEMOCRACIA

Procesos y procedimiento electorales

- Financiamiento de partidos políticos: obligatoriedad en la rendición de cuentas en forma periódica, especificando el origen, monto y uso. A través de un sistema de cuentas registradas y con la designación de un responsable legal de la ejecución de estos recursos en cada partido político.
- Incorporar en el plan de acción un compromiso profundo por parte de los estados miembros a desarrollar sistemas comprensivos para regular el financiamiento de campañas políticas y partidos políticos.

- Que la Unidad para la Promoción de la Democracia, en conjunto con el Foro Interamericano de Partidos Políticos realicen un estudio sobre los sistemas electorales y su impacto en los problemas de representatividad y costo del ejercicio electoral, en un plazo que no supere el 2005.
- Que la OEA, a través del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos ayude en la promoción y fortalecimiento de la democratización interna de los partidos políticos, mejorar su relación con los medios de comunicación y mecanismos de participación ciudadana que los vincule efectivamente con las demandas de la sociedad.

Transparencia y buena gestión gubernamental

- Que la OEA fomente en los estados, la generación de legislación para promover la probidad pública y el buen actuar tanto de los funcionarios como de su personal de planta en pro del bien común y desarrollo de la sociedad. Estas iniciativas se pueden materializar a través de los códigos penales señalando y describiendo aquellas conductas que configuren delitos públicos y fuertes sanciones con el ánimo de resguardar los intereses de los ciudadanos.
- Que los Estados del hemisferio establezcan una agenda de reformas institucionales que coloque el acento en la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión de actores no estatales en el control y diseño de políticas públicas.
- Instaurar la probidad como elemento esencial de la gestión gubernamental.
- Exigencia en la implementación de leyes de Derecho a la Información en los diversos países, con medidas que incluyen: obligación de facilitar acceso en la información, con la excepción de seguridad nacional y privacidad de las personas, derecho de apelación, sanciones al no cumplimiento, capacitación a funcionarios públicos para materializar la entrega de información.
- Empezando en el 2004, implementar mecanismos de asistencia técnica, con el fin de poner en práctica sistemas de acceso a la información.
- La revaloración de la política. Los gobiernos del hemisferio deben estimular reformas institucionales para reducir los costos de la política y transparentar la relación entre dinero y gestión pública, y generar mecanismos institucionales efectivos para la inclusión de nuevos sectores dentro de los sistemas políticos. Ello para incrementar los niveles de confianza ciudadana en los partidos políticos.

DERECHOS HUMANOS

- Se establezca un mecanismo, en las elecciones de jueces de la Corte y miembros de la Comisión, en el que se garantice transparencia y participación de las organizaciones de la sociedad civil. Para este efecto, que a través de la instancia competente y previo a la elección de jueces y comisionados, se institucionalice una audiencia pública que asegure la presentación de los candidatos en cuanto a sus planteamientos, idoneidad, experiencia y compromiso con la protección de los derechos humanos.
- Se garantice por los estados, el incremento del doble del presupuesto actual del sistema interamericano de protección de los derechos humanos (Comisión y Corte), en el plazo máximo de dos años.
- La Asamblea General deberá disponer las medidas necesarias para evitar el recorte presupuestario que actualmente se ha dispuesto para el sistema interamericano de proyección de los derechos humanos en un 20%. Esas medidas deben conducir a la restitución del porcentaje recortado del presupuesto y a la ampliación del mismo.

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2002-2006

- En general los estados deben propender a que el presupuesto del sistema interamericano sea aumentado progresivamente, de acuerdo a las necesidades operativas principalmente derivadas de la reforma a sus reglamentos.
- Los estados deben implementar en el plazo máximo de un año, un mecanismo eficaz y expedito que garantice el cumplimiento de las decisiones del sistema interamericano de protección de derechos humanos.
- Los estados han expresado continua y persistentemente su preocupación por el respeto y garantía de los defensores de derechos humanos en la región como actor importante en la democracia. Ese interés debe avanzar hacia el apoyo decidido y eficaz de la unidad de defensores de derechos humanos que se creó en la secretaria de la Comisión interamericana de Derechos Humanos de cara a la creación de la Relataría sobre la materia.
- Los estados deben fortalecer el apoyo a la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ser el órgano del sistema que funciona de manera permanente y ante quien los usuarios del sistema acuden para demandar de manera inmediata la protección.
- Apoyar la ratificación de los instrumentos regionales de protección de derechos humanos por todos los estados de la OEA.
- Que los estados renueven el mandato del Grupo de Trabajo para la reelaboración del proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con lo que se asegure la plena y amplia participación de los pueblos indígenas en todo el proceso de elaboración y adopción del proyecto de declaración; efectuar una sesión especial del Grupo de Trabajo para realizar una lectura global, antes de comenzar el proceso de negociación.
- Se avance en la iniciativa de elaboración del proyecto de Convención Americana contra el Racismo.
- Que los estados adopten procedimientos y mecanismos para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo, de refugio, refugiados y migrantes, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Igualmente que fortalezcan la cooperación de los Estados miembros para que faciliten el retorno y reasentamiento voluntario, y que mantengan abiertas sus puertas a las víctimas de persecución. Asimismo, que se adhiera a la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias.
- Que los estados presten atención al tema de discriminación de grupo en situación de vulnerabilidad tales como indígenas, afrodescendientes, mujeres y niños, entre otros.
- El desarrollo de un conjunto integrado de políticas en el plano político, económico, y social destinadas a:
 - fortalecer el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos promover la subordinación de las fuerzas armadas y de orden al poder civil y su no ingerencia en asuntos político-contingentes hacer del Estado una instancia eficiente, transparente y responsable garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población promover la integración de los sectores excluidos de la sociedad, la igualdad de género y una cultura de tolerancia y respeto frente a las diferencias.
 - Ampliar y promover la participación de la sociedad civil en diversas instancias del proceso de toma de decisiones.
- Para garantizar la igualdad en la participación y goce de los derechos humanos, los estados deben garantizar la libertad de conciencia y promover la secularización de sus órganos.

SEGURIDAD HEMISFÉRICA

- Que en la próxima Conferencia Sobre Seguridad Hemisférica, a celebrarse en el mes de octubre en México, los mecanismos que establezcan los estados para enfrentar este problema garanticen la vigencia, respeto y garantía de los derechos humanos, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana.
- Los países del hemisferio requieren establecer una carta de seguridad democrática que coloque el acento en la seguridad de las personas, entendiendo éste como un concepto más amplio que el uso de la fuerza armada.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

- Que la OEA facilite la comprensión de si misma hacia la sociedad civil. Es decir, que facilite la información de los mecanismos y los procedimientos a través de los cuales funciona de forma clara y comprensible.
- Identificar y difundir las diversas iniciativas de seguimiento de la sociedad civil a los acuerdos multilaterales.
- Que se apoye y recurra a los mecanismos informales y redes orgánicas articuladas de información de la sociedad civil para una mayor difusión e interacción respecto de temas. Al respecto se sugiere que contacte puntos focales de la sociedad civil para facilitar la relación con gobiernos.
- Utilizar las herramientas que ofrece la tecnología de la información para generar mayores espacios de comunicación e interacción.
- Que considere las experticias temáticas de las OSCs, con lo cual contribuirá a apoyar su fortalecimiento.
- Los países del hemisferio requieren establecer mecanismos a nivel nacional y multilateral para la inclusión de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones. Aquello implica fortalecer mecanismos de transparencia y traspaso de información de un sector a otro.

CRECIMIENTO CON EQUIDAD

- Que los estados del hemisferio en conjunto con las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial) establezcan una agenda focalizada para reducir la pobreza y la marginalidad social en América Latina. Hacia una Nueva Carta Hemisférica.

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CUMBRES

- Avances y desafíos en la implementación de mandatos de la OEA y de Las Cumbres de las Américas sobre gobernabilidad, democracia, y derechos humanos. El seguimiento de los acuerdos es una herramienta útil para el mejoramiento de los temas en cada país. De ahí que:
 - Los acuerdos ayudan a establecer relaciones de colaboración entre gobiernos y sociedad civil.
 - Es importante que el dialogo multilateral continúe a nivel nacional.
 - La sociedad civil organizada colabora a impulsar agendas compartidas.
 - Las recomendaciones formuladas implican responsabilidades compartidas
- Ampliar el mecanismo de participación de la Sociedad civil institucionalizado en el GIRC. En este sentido, es necesario además optimizar el calendario de reuniones para facilitar la participación de la Sociedad civil.

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2002-2006

- En particular sobre la agenda del ALCA, es necesario ampliar el mecanismo de participación desde el ámbito empresarial y existente, hacia la sociedad civil en su conjunto.
- Hacer públicos los documentos gubernamentales.
- Considerar informes autónomos de la sociedad civil respecto el cumplimiento de los acuerdos.
- Para asegurar el cumplimiento de estas recomendaciones, sugerimos a los estados miembros incrementar su aporte financiero actual al menos en una cifra equivalente a la solicitud por la secretaria general, a partir del año 2004.
- Se requiere avanzar en la coordinación de agencias multilaterales dentro y fuera de la OEA para responder concertada y eficientemente a los objetivos para los cuales fueron creadas.

XIX. REFLEXIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA I REUNIÓN INTERAMERICANA DE MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE LA CULTURA EN EL ÁMBITO DEL CIDI, CARTAGENA DE INDIAS, 12 DE JULIO DE 2002

DIVERSIDAD CULTURAL

- Los bienes y servicios culturales no deben ser considerados como mercancías cuyo único valor es comercial. El flujo equitativo de bienes y servicios culturales entre los países americanos afirma las identidades culturales.
- Los Ministerios de Cultura y Comercio Exterior de los países de las Américas deben asegurarse de que la firma de acuerdos de libre comercio no ponga en riesgo la formulación autónoma de las políticas públicas en cultura.
- Los representantes de la sociedad civil presentes manifestamos el deseo profundo de participar en el Observatorio Interamericano de Políticas Culturales, que entendemos como la institución encargada de garantizar la sostenibilidad y solidez de las políticas culturales, a través de su seguimiento y reacomodamiento. Así mismo, consideramos que la Comisión Interamericana de Cultura deberá contar con representación de la sociedad civil.
- La relación entre cultura y comunicación, así como entre cultura y educación, consideradas en el punto veinte de la Declaración, podrían ser resaltadas de la misma manera como está relevada la relación entre cultura y deporte.
- El octavo punto de la Declaración, referente a los derechos de autor, tanto individuales como colectivos, debe recogerse en el Plan de Acción entre el punto séptimo y octavo.
- Adicionalmente, solicitamos que queden anexados a los documentos finales de la "Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Cultura" sostenida en Cartagena de Indias, Colombia los días 12 y 13 de julio de 2002, el documento titulado "Reflexiones de la sociedad civil" y la "Declaración de las organizaciones profesionales del ámbito de la cultura de las Américas" acogida por ochenta y dos organizaciones profesionales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y México y aportada por la Coalición para la Diversidad Cultural.
- Finalmente, invitamos a los ministros y altas autoridades de cultura a fortalecer los procesos de participación ciudadana asociados a la formulación de las políticas culturales y promover desde ellos el diálogo, el intercambio y la cooperación entre las culturas y las regiones de las Américas, sin exclusión alguna.

ROUNDTABLE WITH CIVIL SOCIETY AND SPECIAL SESSION OF THE CISC: “GOOD GOVERNANCE AND DEVELOPMENT IN THE KNOWLEDGE-BASED SOCIETY”, WASHINGTON, DC, UNITED STATES OF AMERICA, MAY 2 AND 3, 2006

GOOD GOVERNANCE AND DEVELOPMENT IN THE KNOWLEDGE-BASED SOCIETY

Considerations

- Discussions on the information society -and the knowledge-based society- frequently give excessive weight to the technological aspect, and in so doing, traditional technologies are overlooked in favor of digital technologies (community radio stations, community television, video, etc).
- Reflections on the “knowledge-based society” generally overlook production of knowledge and its transformation into concrete applications that contribute to the well-being of people and societies.

Principles

- Elevate discussions on the knowledge-based society, so that they not only address issues of infrastructure and technology but also proceed in a framework of observance and protection of human rights and the obligation of states to ensure them as a public duty.
- Information and communication technologies (ICT’s) should not be seen merely as tools, but as strategic factors for development policy design. This means that agreement should exist on protocols for connectivity, accessibility, usability, inclusion, and respect for diversity that assures the quality, effectiveness, and efficiency of those technologies.
- In constructing a knowledge-based society, local capacity building should center not only on technical capacities, but also on those that foster autonomy and self-sufficiency in management, organization, and sustainable development.
- Any knowledge management initiative in the Hemisphere should have as cross-cutting issues interculturality, “inter-American-ness”, and, in general, every aspect that comprises the diversity of the region.
- Any agreement on access to and use of ICT’s, be they of the traditional variety, or the various digital technologies, or those that arise from the newly evolving media convergences, should ensure that every group and segment of the population has equitable conditions of access.
- Backwardness in terms of scientific and technological knowledge, its skewed regional distribution, and the inequity in its access—which discriminates against women in particular—are issues that must be resolved in order to attain adequate levels of production and distribution of new knowledge. Higher education institutions and technological research and development centers have a pivotal role to play in the dynamics leading to the construction of the knowledge-based society.
- In the context of the knowledge-based society, it is essential to recognize the principle of joint responsibility between government and the private sector, as well as active participation for civil society organizations.

Recommendations

- The member states should provide sufficient and balanced appropriations that ensure equitable distribution of and access to communications and telecommunications services, as

well as guaranteeing the human rights of free access to public information and freedom of expression by means of all technological mechanisms and legal practices.

- Governments should ensure sufficient appropriations for the development of scientific research and technological innovation, and choreograph knowledge transfer programs among higher education institutions and research centers in the region. Governments should also accept that in a knowledge-based society founded on the principles of plurality and respect for diversity they have an obligation to recognize traditional knowledge and ensure its sustainability. We further recommend that higher education institutions be called on to contribute to all initiatives connected with the issues of good governance, development, and the knowledge-based society in general, and human resources training, in particular.
- States should encourage improvement and linkage of knowledge distribution circuits, taking advantage of the infrastructure in place and strengthening new infrastructure (Internet 2, CLARA). States should also continue with the identification of best practices in the application of rules on intellectual property. Governments, international agencies, and higher education institutions should strengthen capacity-building policies and programs for teachers through the inclusion of ICT's, centering not only on technical aspects, but also on the use and harnessing of knowledge to strengthen educational and development promotion skills.
- Positive steps should be taken to enable access to knowledge and capacity building with the use of ICT's, as well as full exercise of rights, for Afro-descendants, indigenous peoples, displaced people, migrants, persons with disabilities, women, children and young people, and, in general, all socially and economically disadvantaged groups.
- ICT's should be included as tools in the range of resources to which citizens in democratic societies should have access in order to ensure accountability and transparency at all levels of government, for instance, through inclusion of the concept of public purchases and works as a procurement system that not only increases efficiency in the investment of state funds, but enhances openness and social control and reduces the risk of corruption in countries.
- Governments and the appropriate international agencies should promote the use of ICT's in order to accomplish the Millennium Development Goals in the region, in particular with regard to efforts to reduce HIV/AIDS, malaria, and tuberculosis.
- Governments should enact policies and treaties that ensure protection and full respect for the civil, labor, and human rights of migrants. This recommendation applies to both border crossing and internal migrants. A component of such policies should be the inclusion of ICT's and the generation of strategies and resources for capacity building, both in communities of origin and in places of destination of migrants.

PROMOTION OF DEMOCRACY AND THE DECLARATION OF FLORIDA

- We request the governments to disseminate and promote the Inter-American Democratic Charter among civil society and the general public, and to educate civil society organizations (CSO) about the scope and constraints of the OAS in its role in inter-American affairs.
- We recommend that member states increase the funds they allocate to the OAS in order to ensure that the Organization fulfills its mission and the mandates that come out of the Summits of the Americas process which the member states have freely signed.
- We ask that in the Declaration of Santo Domingo civil society organizations be considered Promoters of Democracy—the latter understood as the power of peoples—and that the Millennium Development Goals be regarded as a base line that should be in place in each country, and not targets to be met by our countries.

- We urge governments to implement mechanisms to follow up on the mandates of the Summits of the Americas and the OAS General Assembly, in order to ensure that Declarations and Plans of Action become not dead letters, but effective instruments that guide agendas with specific measures.
- We request governments to create follow-up mechanisms to monitor measures adopted by them to combat poverty and integrate excluded groups (*inter alia*, women, ethnic minorities, disabled persons, victims of armed political violence, indigenous peoples, etc.)
- We urge governments to institute and/or improve legal frameworks on access to information and to use ICT's as a tool to expedite and facilitate public access to information in the possession of the state.
- We ask that judicial systems incorporate ICT's in order to upgrade their efficiency and transparency, and thereby expedite the resolution of cases.
- We request member states to implement campaigns that encourage the participation of women and, therefore, a gender balance in the political and public life of states, which should include mechanisms to monitor compliance with this recommendation.
- We invite the technical departments and the Executive Secretariat for Integral Development of the OAS, as well as the member states and their respective cooperation agencies, to support the initiatives of hemispheric civil society networks whose purpose is to monitor, support, or contribute to the effective implementation of the mandates of the Summit of the Americas process and the activities of the OAS.
- We request that ICT's be used to support good governance in the region, as well as the involvement of civil society in the processes connected with the review of democracy in the Hemisphere, especially with respect to early warning systems to detect democratic crises.
- We remind the member states of the vital importance of linking effective channels for public participation at the national level through the creation of permanent mechanisms for dialogue and collaborative activities that contribute to democratic governance, the model for which should be the ministry of foreign affairs in each country.
- We recommend the analysis of mechanisms that help to combat and prevent misuse of the Internet in order to avert harmful practices for development, such as, *inter alia*, child pornography, cyber espionage, computer viruses, and the spread of hackers.
- In order to move forward in the regional struggle against corruption, we request:
 - Inclusion of ICT's in the follow-up mechanisms for the Inter-American Convention against Corruption (ICAC), in order, *inter alia*, to expedite and increase the transparency of the negotiations process in the second round of the Follow-Up Mechanism for the Implementation of the Inter-American Convention against Corruption (MESICIC).
 - That the member states that have not yet signed the Inter-American Convention against Corruption and other international instruments in this area do so immediately. Likewise, we request the same of states that have not yet joined the MESICIC process.
 - That information be provided to civil society on progress in implementation of resolution AG/RES. 2071 adopted by the OAS General Assembly, which declares 2006 as the "*Inter-American Year of the Fight against Corruption*".

- Formalization of the participation of civil society organizations in meetings of the MESICIC Committee of Experts, as well as the resumption of follow-up visits in the Mechanism.
 - That civil society organizations be permitted to submit their responses to the questionnaire within 30 days after the deadline for member states.
 - That legislative branches approve bills that would permit the inclusion in their legislations of the offences provided in Article 6 of the ICAC.
 - That the Conference of States Parties to the MESICIC meet in the course of 2006.
- We consider it essential to implement mechanisms for protection and promotion of human rights, which are pivotal and of strategic importance for the promotion of democracy. The more the fundamental rights of persons are violated, the more our democracies are weakened.
 - We urge governments to improve the forums for dialogue with civil society in the official activities of the OAS, in order to ensure an effective exchange of ideas and proposals through construction of productive dialogue, not unilateral monologues that merely set out a variety of agendas without engagement.
 - We request the member states, in the framework of measures to strengthen civil society participation, to offer spaces for training, information, and permanent linkage with OAS agencies.

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE DECLARATION AND PLAN OF ACTION OF MAR DEL PLATA

Inclusion and protection of vulnerable groups

- We propose that OAS programs on inclusion and protection of vulnerable populations bear in mind the role of culture and identity.
- As regards the issue of employment for young people, it is necessary to look for creative ways to use information and multimedia technologies as tools that enable documentation of self-correction of inappropriate conduct. Furthermore, we advocate access to and strengthening of community centers as places where young people can come together and avoid the isolation that leads them to crime. We also recommend that efforts be made to establish mechanisms that encourage and celebrate successful experiences of young people in contributing to social and economic development.
- We recommend facilitation by states of access for women to programs on generation of self-employment and, at the same time, access for young people of both sexes to information on sexual and reproductive health.
- We propose a break with the trend of establishing charity-based programs to solve the problems of the most vulnerable, and, rather, recommend that emphasis be placed on sustainable programs.
- We urge the states to ratify the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities. Measures should be adopted in support of the integration in the workplace of persons with disabilities, through the application of organized and inclusive training policies in order to equip them with the necessary skills and qualifications for employment, self-employment, and micro-entrepreneurship.

- We recommend that states ensure, through awareness-raising measures, the integration of the disabled community in employment in the public and private sectors, based on the legislative strides that have been made in many countries.
- We recommend that states design and implement affirmative policies and measures that take into account the issues of race and gender as causes—and not simply effects—of poverty.

Development model and insertion in the international economic system

- The situation at present, in a context of globalization, widespread expansion of the knowledge-based society, and asymmetrical conditions of competition with other regions, necessitates a review of the economic insertion model adopted in the countries of Latin America and the Caribbean, with a view to the institution of measures by our states to increase the competitive advantages of our nations, through an increase in the value added of our output and efforts to attain productive complementarity in the region. We further recommend examination of the feasibility of alternative but parallel systems of valuation in the exchange and trade of goods and services.

Employment generation

- We recommend that the member states consider new labor models for our populations that are consistent with respect for the human rights of workers.
- We recommend the creation of jobs in high-technology sectors without neglecting employment generation in complementary sectors, even if they belong to traditional sectors of the economy.

Role of civil society and the mandates and commitments adopted by states

- We recommend that civil society monitor the commitments that states have adopted in the framework of the Summits of the Americas process and, as necessary, that the OAS create mechanisms to review those commitments. Furthermore, we recommend that the OAS establish mechanisms to encourage engagement between states and civil society.
- We urge the states to implement the provisions contained in Articles 64 and 66 of the Declaration and Plan of Action of Mar del Plata which reaffirm transparent and accountable democratic governance; that accountability is a key instrument to achieve transparency and efficiency in the use of resources administered by governments; and that states should implement the Inter-American Convention against Corruption and participate fully in its Follow-Up Mechanism.
- We also urge states to comply with the provisions contained in Articles 64 and 65 of the Declaration and Plan of Action of Mar del Plata to identify, before December 2006, specific initiatives for cooperation, and the exchange of experiences in the development of technical skills in our countries that contribute to the full application of the provisions of the Inter-American Convention Against Corruption, and the strengthening of its Implementation Follow-up Mechanism (MESICIC), giving special consideration to the recommendations arising from the first round of said Mechanism.
- We recommend that states make efforts to monitor and measure the effectiveness of national and regional programs.

PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

- Take advantage of information and communications technological advances to divulge good practices and databases, in order to strengthen civil society in its role as comptroller of the state.
- Improve channels for civil society participation, in particular in those spaces where policies are discussed that can negatively impact respect for human rights in the Americas.
- Strengthen the organs of protection of human rights by: recognizing the independence and autonomy of the Inter-American system of human rights; ensuring a budget that enables its bodies to function and be effective; abiding by the decisions of the organs of the inter-American system; and establishing mechanisms to punish those who fail to comply.
- Consider suitability, independence, morality, and competence as criteria to be met by candidates proposed for positions in the organs of the Inter-American system of human rights, in accordance with the provisions contained in the American Convention on Human Rights. In this framework, consideration should also be given to gender parity.
- Broaden civil society participation in the selection process for Members of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and the Inter-American Court of Human Rights (Court). For that purpose, in addition to the continued publication of the curriculum vitae of candidates on the OAS website, public discussions with candidates should be promoted, among other actions.
- Create a working group to promote periodic regional exchange on best practices for the fulfillment of IACHR recommendations and the execution of sentences of the Court with the participation of the states, civil society organizations, IACHR and the Court, and experts on this issue.
- Recognize that civil society organizations play a non-partisan, essential, fitting, and proactive role in the solution of problems in the region.
- Urge Member States to provide protection for human rights defenders at risk.
- Urge Ombudsmen to play a more active role in the dissemination of the instruments of the Inter-American system of human rights.
- Urge the Member States of the OAS that have not done so to ratify the American Convention on Human Rights and the other inter-American and international instruments to do so.
- Urge the Member States of the OAS that have not done so to fully recognize the contentious jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights.
- Urge the Member States to create legal mechanisms at the national level to ensure fulfillment of the recommendations and judgments of the Inter-American system of human rights.
- Urge the Permanent Council of the OAS to regularly receive and discuss the special country reports, reports of rapporteurs, and the annual report, of the IACHR.
- Include a human-rights perspective in the Draft Declaration of Santo Domingo, with particular attention to the problems of social inequality in the Hemisphere, in order to look for ways to overcome these and ensure universal access to the knowledge-based society.
- Include the themes of racism and social inclusion in the Draft Declaration of Santo Domingo.

- Move forward with the approval of an Inter-American Convention against Racism and All Forms of Discrimination and Intolerance that gives greater consideration to exclusion for reasons of gender.
- Include in the Declaration of Santo Domingo a mention that the rights of indigenous peoples will be ensured full respect in the framework of the knowledge-based society.
- Request Member States to be respectful of human rights in their treatment of deported people and to establish mechanisms for collaboration and information exchange among each other in connection with deported persons.
- Urge Member States to eliminate the practice of mass expulsion of people.
- Remember that all people that inhabit the American continent enjoy all human rights in an indivisible and interdependent way, regardless of their nationality or their country of residence.
- Recognize the special condition of vulnerability of children and adolescents in the region, and promote their participation in decisions that affect them.
- Request reports from countries on progress in fulfillment of the right of access to information in the framework of the Declaration of Nuevo León.
- Provide support for and collaborate with initiatives that seek to establish minimum standards of protection of the right of access to information, such as, among others, gratuitousness and freedom of access.
- Request Member States to create an assistance fund for victims, in order to ensure access to justice in the Inter-American system of human rights.
- Request the countries mentioned by the IACHR as meriting “special attention” to adopt the measures necessary to be removed from that category and, furthermore, to correct the causes that placed them there.
- Include the expression “civil society” in recommendation 14 of the draft resolution entitled *Support for the Hemispheric Agenda of the Knowledge Society*, the reading of which will be as follows: *“To instruct the General Secretariat to create an OAS electronic forum for the citizens of the Americas and civil society organizations that is easily accessible and user-friendly and emphasizes inter-American activities and programs the individual and civil society can employ, such as those related to the promotion and protection of human rights and to the OAS scholarships program.”*
- Request that the Colombian State provide effective protection for the human rights of displaced afro-descendant communities.
- Request the Dominican Republic to comply with the judgment of the Inter-American Court in the Yean and Bosico Case, bearing in mind that a knowledge-based society cannot exist so long as the right to education is impaired.
- Request the Member States and the General Secretariat of the OAS to pay more attention to the reports of the IACHR and the conclusions of the Court. Urge the Secretary General to convene a meeting with the various Directors of the Departments of the General Secretariat and representatives of the various organs of the Inter-American system of human rights to assure coherence in planning for elections, quality citizenship, and conflict prevention.

- Urge Member States to identify the necessary measures to enable them to act as collective guarantors of the Inter-American system of human rights.
- Urge Member States to adopt the legislative measures necessary to ensure that legal mechanisms exist to implement internally the decisions adopted by the IACHR and the Court. Furthermore, the judiciaries should fully apply treaty provisions and the jurisprudence emanating from the IACHR and the Court.
- Urge the OAS to provide support for human rights defenders who are frontline advocates of civil, political, and social rights and whose work still involves a risk of repression.

I. MEETING OF NATIONAL AUTHORITIES ON TRAFFICKING IN PERSONS, ISLA DE MARGARITA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA, MARCH 14 - 17, 2006

TRAFFICKING IN PERSONS

General Principles

- It is of crucial importance that in prevention, combating, and repression of trafficking in persons, and in protection of trafficking victims, the member states bear in mind as a frame of reference the *corpus juri* comprised of international and regional instruments on human rights, international humanitarian law, and international law on refugees, as well as adopting a cross-cutting gender and age perspective.
- Member states should approach the problem of trafficking in persons by recognizing the specific aspects associated with its diverse aims and manifestations, according to their effect on different sectors: boys, girls, adolescents, men, women, and asylum seekers and refugees.
- Thus far, we have been waging a one-sided war against transnational and national organized crime networks. The resources available to governments and civil society are too few and far between. It is urgent for member states to allocate the necessary resources, so that coordinated measures between civil society and governments can be strengthened, enabling them to tackle this problem on a better footing.
- The transnational nature of some manifestations of this crime makes it imperative for member states to implement and put into effect bilateral and multilateral coordination mechanisms, in particular to provide protection to witnesses, victims, and their families.
- We urge the Organization of American States to encourage its members to recognize the problem, adopt measures to combat domestic trafficking of persons, and provide appropriate protection for victims of this type of trafficking.
- We call on the member states to create participatory mechanisms to follow-up on, monitor, and evaluate public policies and the effectiveness of their national legal frameworks, in order to redesign programs and improve or strengthen those already in place.
- We appeal to the Organization of American States to establish itself as guarantor of the continuity of measures adopted by its members in this area, in order to ensure that they are sustained until their objectives are met, irrespective of government administration changes.

Prevention

- Recognize the importance of civil, political, social, economic, and cultural rights, as well as the impact of the enactment of public policies targeting the most vulnerable groups recognized in the Declaration.
- Enhance and strengthen the rule of law as an essential requirement to combat trafficking in persons.
- Ensure the right of all persons to education, in particular boys, girls and adolescents, as a preventive measure against trafficking in persons.
- Coordinate policies on migrant workers and the labor shortfall, and ensure the rights of migrant workers without documents to prevent their exploitation.
- Ensure, in collaboration with civil society organizations, that public policies for implementing prevention campaigns target vulnerable groups in geographic areas associated with trafficking in persons.
- Set up state counter-trafficking funds for joint activities with civil society.
- Establish national and international control mechanisms for issuing documents (passports and visas), in order to prevent their falsification by organized networks for use in trafficking of persons.

Prosecution

- Recognize the need to move forward with the alignment of national laws in the region with international legal standards in place in this area. While they address trafficking in persons, some of these legislations do not recognize all forms of human trafficking, or they tend to reproduce the loopholes found in international standards (only international trafficking is classified as a crime, leaving domestic trafficking in persons unpunished; only trafficking in persons for commercial sexual exploitation is punishable, etc.).
- Ensure the criminal prosecution of the architects and perpetrators of the crime of trafficking in persons in all its forms, and punish acts of corruption committed by public officials and authorities in accordance with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Optional Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Traffickers can be natural or legal persons from any social background, such as individuals, relatives, large and small organized crime networks, diplomats, police officers, corrupt government officials, travel or employment agencies, and employers of trafficked persons.
- Recognize that trafficking in persons is a crime that goes unpunished in many countries in the region. There are few available data provided by government agencies.
- Ensure that all investigators and government attorneys have received appropriate training in collecting the evidence needed to convict culprits. Lack of evidence due to insufficient training in the collection of effective proof and presentation of cases for investigators, police officers, and government attorneys makes it impossible to demonstrate the existence of the crime. Recognize the lack of technical or specialized training provided to public officials and other authorities who may come into contact with the victims of trafficking in persons. Confusion exists between trafficking in persons and illicit migrant trafficking. It is essential to provide training to services, agencies, and law enforcement organizations to ensure that victims are correctly identified and given appropriate assistance, in order to raise awareness of

their plight from their perspective. Most victims are unaware that they are being trafficked until they arrive at their destination, which makes the task of identifying the trafficker difficult.

- Ensure the right to justice of victims of trafficking in persons, whatever their legal status, so that they can bring charges and institute judicial proceedings against traffickers. This option is under-utilized because trafficked persons are deported before they can present charges.
- Guarantee protection programs for witnesses, experts, and victims of trafficking in persons and their families. Recognize the difficulty for victims to cooperate with and testify in an investigation, and ensure that they are not doubly traumatized. It is necessary to protect the rights of victims and ensure that any benefits they obtain from the investigation are not conditioned to their cooperation.
- Carry out monitoring and follow-up exercises on this problem in order to generate systematic records of person trafficking cases, and have in place databases that supply up-to-date statistics broken down by gender, age, type of trafficking, traffickers, number of investigations carried out, and judgments issued.

Protection and Assistance for Victims

- Ensure that the human rights of victims are of paramount priority in the adoption of legislative steps, policies and strategic measures.
 - Right not to be discriminated against;
 - Right to come and go freely from one's country;
 - Right to a safe and voluntary return that includes assistance for reintegration;
 - Right to protection of victims, witnesses and their families from injury, threats, and intimidation;
 - Obligation to respect the right to asylum or to issue temporary residence permits where appropriate;
 - Right of victims and witnesses to have their privacy and confidentiality respected;
 - Right to compensation, restitution and reparations; and,
 - Right to adequate assistance and services commensurate with the culture and language of the victim
- Recognize the importance of providing effective platforms and tools to enable victims to take control of their lives and exercise their rights. Having had no control while they were victims, it is essential to respect their right to self-determination. It is necessary to help victims to learn and develop leadership skills and be independent so that they can recover and become reintegrated with society and their families.
- Recognize the trauma endured and accord priority to mental health services, enabling victims to rebuild their lives and be effective witnesses in an investigation. It is important to provide assistance that includes family reunification; mental and physical health components; and recognition of the importance and urgency of helping victims to obtain documents, find employment, receive training and cultural orientation, find accommodation, and meet other basic needs.

Cooperation

- Create a permanent Working Group in the OAS composed of persons who are focal points for the issue of Trafficking in Persons in their respective units and work in related areas, such as human rights, migration, women, labor matters, and children. The Working Group will be

responsible for including the issue of Trafficking in Persons in their respective mandates. Representatives will periodically report to the Group on progress in their activities.

- Develop a Regional Plan of Action on Trafficking in Persons that details results and a specific time frame, and includes close collaboration between member states, civil society organizations and international organizations.
- Foster regional agreements on:
 - Information sharing, cooperation, and immediate identification of traffickers;
 - Extradition of persons charged with the crime of trafficking in persons;
 - Voluntary repatriation of persons who have been victims of trafficking in persons;
 - Protection for persons who have been victims of trafficking in persons, as well as for their families and witnesses;
 - Reunification of victims with their families.
 - Develop a network of social services agencies to enhance the capacity of states and agencies to provide services to victims;
 - Identification, forfeiture and seizure of the assets of traffickers;
 - Identification of trafficking victims who have been repatriated: they could testify in cases brought against traffickers and be entitled to compensatory damages;
 - Facilitation of cooperation between authorities and civil society organizations in countries of origin, transit and destination.
- Foster a regional dialogue on agreements in the areas of immigration, labor rights, and international human rights standards.
- Conduct regional studies on trafficking in persons, including on-site visits by the Inter-American Commission on Human Rights.

II. CIVIL SOCIETY REGIONAL FORUM: "CREATING JOBS TO FIGHT POVERTY AND STRENGTHEN DEMOCRATIC GOVERNANCE", BUENOS AIRES, ARGENTINA, SEPTEMBER 6 AND 7, 2005

DEMOCRACY

- Expressly recognize that democracy entails an implicit commitment –not only a promise – to help all citizens achieve their potential in society.
- Study in depth concepts such as decentralization and local government, understanding that these are the only paths to ensure that the benefits of democracy reach all citizens.
- Recognize the importance of environmental rights, together with economic, social, and cultural rights, as fundamental elements in the functioning of democratic societies.
- Strengthen the effective exercise of representative democracy through commitment to the Inter-American Democratic Charter.

Fight against Corruption

- Promote, through public policies and responsible organs, the incorporation of the fight against corruption, and specifically against bribery, in social business responsibility initiatives. Likewise, they promote practices of self-regulation in the private sector geared towards the development of social business responsibility, good corporate governance, and organizational ethics.

2002-2006 CIVIL SOCIETY RECOMMENDATIONS

- Strengthen labor administrations and jurisdictions. This strengthening should be carried-out through the implementation of policies, mechanisms and standards of transparency and the fight against corrupt practices, especially those applicable to public institutions with regards to labor and social protection, as well as those related to the promotion of higher levels of independence, transparency, and integrity in courts of justice that resolve labor conflicts.
- Take effective actions to combat corruption, organized delinquency, and human trafficking, and reject prostitution as work.
- Reinforce the importance of the fight against corruption in all its forms - public and private – and by all means possible, and emphasize the necessity that countries adhere to the Inter-American Convention against Corruption. Furthermore, underscore the centrality of institutional strengthening towards citizenship participation, opening spaces to permit the monitoring of public policies, particularly those oriented towards transparency.

Electoral Processes and Procedures

- Guarantee clean and free elections.

Transparency and Good Governance

- Guarantee the commitment of governments to surrender accounts at all its levels and provide information regarding the evolution of state expenditures.
- Generate policies that promote access to dignified jobs that take into consideration ethnicity, gender, age, as well as vulnerable groups such as refugees and the disabled.
- Create mechanisms that guarantee the fulfillment of human rights agreements, demanding from them the adaptation of internal rights from international mandates on this matter.
- Ensure that labor policies and those that seek to combat poverty and inequality have a framework of respect for and promotion of human rights; in the case of conflict between human rights in labor and other rights, especially with regards to those of an economic nature, the primacy of human rights must be respected.
- Create public policies oriented towards the inclusion of populations in vulnerable situations in economic, political and environmental activities.
- Promote the strengthening of the role of the State and its non-delegable obligations of the respect for, and protection and guarantee of human rights. The processes that weaken the State limit its capacities to carry out its obligations with regards to economic, social and cultural rights.
- Strengthen norms and mechanisms oriented towards guaranteeing the defense of human rights and its primacy in economic and security policies, since processes of economic integration and free trade agreements in the region have not always guaranteed the full relevance of human rights. Likewise, recognize the essential role played by the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights.
- Reinforce the importance of the Social Charter of the Americas, making this the medium for an integral definition of the rights and obligations of citizens.
- Ratify all of the international human rights instruments.
- Guarantee sexual and reproductive rights.

HUMAN RIGHTS

Migration

- Apply integration policies for refugee applicants, in accordance with the Mexico Plan of Action agreed to by the countries of the American continent.

Freedom of opinion and expression

- Maintain and promote the existence of a free press, permitting the development of an autonomous public opinion.

JUSTICE

- Guarantee social responsibility in all of the institutions of the justice administration system, and also with regards to political and financial independence of justice.

CIVIL SOCIETY PARTICIPATION

- Promote citizenship participation and recognize access to information as a guarantee of accountability. Revalorize the proposal as an instrument in the implementation of public policies. Provide budgetary allocation in order to finance policies.
- Promote social dialogue and the establishment of mechanisms that guarantee spaces for civil society participation, in addition to liberty, security and dignity for those people who represent social organizations.
- Establish permanent mechanisms of evaluation for the fulfillment of Summit commitments that consider the opinion and information of civil society organizations as indispensable sources.
- Create a citizenship observatory to monitor of the fulfillment of commitments established in the Summit Plan of Action.
- Declare the importance of the right of access to free, open, and public information, in this way permitting and promoting the participation of and monitoring by citizens, grassroots organizations, and others when dealing with public issues.
- Support the capacities of civil society through building capacity and integral education of citizens, understanding that only in this way is it possible to consolidate democratic institutions. Likewise, recognize the importance of civil society participation in the collective defense of democracy.
- Establish real and effective mechanisms for the participation of civil society organizations, including those respective economic resources to guarantee this participation.
- Promote social dialogue and the participation of all grassroots organizations.

CULTURAL DIVERSITY

- Incorporate legislation that duly protects national assets in all fields, such as patents and intellectual property.

LABOR

- Incorporate an ethical foundation of work (employment) and a strategy to permit this to take place. In this regard, it is possible to affirm the importance of incorporating the dimension absent from this theme in the 90's in which the focus on economics and the pragmatism had poor results precisely in the creation of employment and social cohesion. The creation of an ethical foundation in job-creation strategies can be carried out through three dimensions:
 - Employment as a source of social cohesion,
 - Employment as a source of personal dignity,
 - Employment as a guarantee of citizenship, because the constitution of free subjects as bearers of rights and obligations in the politically democratic community is directly linked to the theme of employment.
- Specify to what we are referring when we speak of decent or dignified employment.
- Increase emphasis on the problematic of rural employment, rather than focusing on the proposals from the field of urban employment. Underscore the great importance of peasant activities in the region and the necessity of implementing specific policies that address the reality of this universe.
- Highlight the role of cooperatives in the generation of dignified employment and also to implement policies that encourage the development of cooperativism in accordance with the International Labour Organization.
- Recognize the free association of unions as a human right.
- Implement macroeconomic policies that encourage the industrialization of natural resources and the incorporation of added value.
- Recognize and provide incentive to the role of micro, small and cooperative organizations and businesses in the integral development of our countries for their contributions to social cohesion, the generation of dignified jobs, the strengthening of democracy, and the development of an ethic of solidarity and social responsibility.
- Promote the productive linking of small and medium enterprises (SMEs) in expert alliances.
- Ensure the effective exercise of the freedom of association of unions.

GENDER EQUALITY

- Take more effective measures to combat labor discrimination for reasons of gender, particularly to overcome the salary gap between men and women, and to facilitate greater access for women to education, credit, and technology.

EDUCATION

- Recognize education as a fundamental human right.

Science and Technology

- Propose as a central theme the necessary association between knowledge and work making extensive use of science, applying the use of technology, and incorporating the concept of innovation is unthinkable.

- Recognize access to scientific information as a fundamental right, and make viable the appropriation of science for society by means of education and disclosure.
- Provide public financing of science, technology, and innovation for the generation of better quality jobs. Knowledge transference should be part of national and regional policies and be coordinated at the highest levels of government.

SUMMITS FOLLOW-UP PROCESS

- Establish adequate mechanisms of follow-up, evaluation, and monitoring of the mandates and commitments assumed in the Summits of the Americas.

TRADE AND FINANCE

- Generate conditions that encourage investment in a form consistent with the extension and strengthening of internal markets with less focus and attention on the role of transnational investment, placing emphasis instead on generating local actors to confront the process of forming capital.

RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES

- Broaden and strengthen the dialogue between States and indigenous peoples in order to approve the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

- Adopt policies and regulations for the rational use of natural resources placing special emphasis on the necessity of developing public policies in hydroenergy that permit the development of sustainable strategies for the use of water.
- Incorporate and recognize all the compromises and treaties of an environmental nature both in the Declaration and in the Plan of Action.
- Ensure strategies for the conservation and sustainable use of biodiversity, taking into account the dimension and impact of productive activities, particularly those related to deforestation and fishing overexploitation.

EQUITABLE GROWTH

- Critically evaluate the consequences of the neoliberal model in developing countries to recognize the high correlation between the processes of commercial and financial opening, deregulation of markets (with special emphasis on the job market), privatization and deindustrialization and the labor market crisis, the growth in poverty, and the accentuation of inequality. It is necessary to make explicit the fact that the neoliberal model failed, that bandage solutions do not resolve core problems and that it is necessary to propose a new paradigm of development for the region with particular emphasis on the restructuring of the labor market, and the generation of employment with dignity as a fundamental articulator of social restructuring.
- Promote the concept of *development with identity* in international agreements and declarations related to indigenous peoples and afro-descendants and generate public policies specific to children, adolescents and youths, indigenous peoples and afro-descendants with regards to education, employment, and penal justice and participation.

- Defend national sovereignty in the face of agreements on free trade, labor, education, gender, health, access to medicine, and intellectual protection and industrial patents.

III. ROUNDTABLE “THE FUNDAMENTAL ROLE OF SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, INNOVATION AND SCIENCE EDUCATION WITHIN THE FRAMEWORK OF DISCUSSION FOR THE FOURTH SUMMIT OF THE AMERICAS”, BUENOS AIRES, ARGENTINA, SEPTEMBER 5, 2005

EDUCATION

Science and Technology

- OAS member countries should recognize and reaffirm the commitments to support and promote the adopted mandates in the Lima Declaration and Plan of Action from the First Meeting of Ministers and High Authorities of Science and Technology in the framework of CIDI of the OAS, as well as the adopted commitments in previous Summits geared towards scientific, technological and innovative development in the Western Hemisphere.
- High quality science and technology education should be incorporated from primary levels onwards in order to increase the interest of girls and boys as well women and men in promoting scientific thinking and a culture of innovation.
- Public financing for science, technology and innovation should be integrated into national and regional policies and coordinated at the highest governmental levels.
- As a corollary of the Charter of the OAS, and particularly with respect to the objectives under its Chapter IV on Integral Development, access to scientific information must be recognized as a fundamental right for all citizens of the Americas.
- The gender perspective should be integrated into all STEISE systems and policies in order to ensure that the interests and capacity of both women and men are taken advantage of for the creation and utilization of scientific and technological knowledge.
- At the end of the next decade, private investment in STI in Latin America and the Caribbean should be greater than public investment. The stimulus and responsibility of preparing legal and regulatory frameworks for this urgent necessity fall on the governments of the region.
- Create networks of centers of excellence that, through synergy and the achievement of a level of critical mass, produce advanced research and innovation.

IV. INTER-AMERICAN FORUM OF AFRO-DESCENDANTS: “PARTICIPATION AND ADVOCACY OF AFRO-DESCENDANTS IN THE FOURTH SUMMIT OF THE AMERICAS”, SAN JOSE, COSTA RICA, SEPTEMBER 1 AND 2, 2005

GENDER EQUALITY

- Guarantee the fair participation of Afro-descendant women in public policies.
- Establish public policy mechanisms for Afro-descendant women.
- Guarantee specific legislation on affirmative action policies.
- Promote employment and regulation programs that guarantee social security for Afro-descendant women who work part time.

LABOR

- Generate training programs for the employment of Afro-descendant women.
- Evaluate and continuously monitor hiring, promotion, and dismissal practices to identify and correct patterns of discrimination.
- Fully adopt the job security standards established by the International Labor Organization (ILO).
- Require private enterprises to adopt and fully implement codes of social responsibility, including a commitment to eliminate all forms of discrimination in the workplace.

EDUCATION

- Assure the aid and permanence of Afro-descendant women in educational levels that guarantee equitable social conditions in the work place.

Science and Technology

- Create broader access to technological development.

EQUITABLE GROWTH

- Generate special capital funds and guarantee specific technology for the creation of business opportunities for Afro-descendant women, and promote the knowledge and cultural seedbeds of Afro-descendant women and communities.
- Express concern for state fiscal reform measures, drawing attention to their discriminatory impact, including the reduction in social program financing, the privatization of public management, the reduction of public sector employment, and the negation of the rights of workers to be members of trade union organizations.
- Ensure access to credit and other collective rights for Afro-descendants; legalize their land, thereby endowing them with means of production.

HUMAN RIGHTS

- Guarantee no discrimination in the workplace aggravated by gender, ethnicity, disability, HIV/AIDS, and age group.
- Prohibit racial and gender harassment in employment.
- Apply affirmative action programs and encourage businesses that adopt affirmative actions in favor of Afro-descendant populations with tax exemptions.
- Establish public policies of racial equity.

Fulfillment of international obligations and observance of international standards

- Fulfill the Statement and Plan of Action of Santiago 2000 – Afro-descendant Chapter; especially the quick elaboration, approval and subsequent ratification of the Inter-American Convention against Racism and all Forms of Discrimination and Intolerance that is currently under discussion in the Organization of American States (OAS).

Migration

- Express concern for the vulnerable situation of immigrant women, who generally face exploitation in unstable jobs with low salaries. Likewise, support the right to work of immigrants.

Human rights of women

- Require specific protection of the human rights of Afro-descendant women and their families, in their status as immigrants, refugees, or displaced persons.
- Create programs to support working women, such as health services, child care, and continuing education.

Human rights of children and adolescents

- Create social policies concerning Afro-descendant children, adolescents, and youth.
- Support affirmative action policies in the private sector for the employment of young people.
- Regulate the juvenile penal system, particularly as it pertains to Afro-descendants.

Strengthening systems for the promotion and protection of human rights

- Incorporate racial, ethnic, and gender components in censuses and municipal and national surveys, including the participation of Afro-descendant women.

HEALTH

- Establish as priority tasks the adoption of a stance against violence and the use/abuse of drugs in public health policies.

CULTURAL DIVERSITY

- Create public policies in the areas of culture and biodiversity in favor of Afro-descendant populations.
- Expand the concept of universal education in the Ministries of Education of our countries, for the expansion of a multicultural and ethnic education.
- Create a database of information on youth, children, and women, separated in the censuses, to include the ethnic perspective of Afro-descendants.
- Promote the democratic and political participation of Afro-descendant youths.
- Reaffirm an Afro-identity in childhood, adolescents and youth, and the different languages such as Garífuna, Creole, and English.

V. CARIBBEAN SUB-REGIONAL CIVIL SOCIETY FORUM: "CREATING JOBS TO FIGHT POVERTY AND STRENGTHEN DEMOCRATIC GOVERNANCE", BRIDGETOWN, BARBADOS, JULY 21 AND 22, 2005

DEMOCRACY

- Develop cooperative agreements with civil society that promote transparency and accountability to counter incidences of corruption in efforts to take effective actions to fight corruption and organised crime.
- Reform and adequately finance local government systems.

HUMAN RIGHTS

- Develop a regional human rights charter for CARICOM nations in which quality employment is seen as a fundamental human right in efforts to ensure human security, job creation, and poverty alleviation.
- Establish a twenty-year human rights-based national plan focusing especially on youth development, cultural development and diversity, national health plan, total integration of the disabled, and de-marginalisation of minority groups and indigenous peoples..
- Institute more efficient policies to fight discrimination due to chronic diseases such as HIV/AIDS in the workplace.
- Continue to promote welfare plans and programs that are necessary for marginalised groups who lack access to decent working conditions, such as disabled persons and indigenous peoples.

Human rights of children and adolescents

- Ratify existing multilateral agreements and develop national policies banning child labour.

CIVIL SOCIETY PARTICIPATION

- Establish a mechanism for integrating civil society participation and inputs into policy and decision making for sustainable growth and development.
- Develop civil society consultation and national policy-making processes through a registration system for non-state actors and a legal framework for obligatory participation in decisional frameworks.
- Increase civil society participation on national, regional and hemispheric levels.
- Implement the Charter of Civil Society so that national governments, local governments, NGOs, business and trade unions have clearly-defined roles for participation in the economy and society based upon the pursuit of human rights and social and economic conscience, for the good governance of the nations of the Caribbean and to best exploit the potential of the Caribbean in the interests of its peoples, in order to empower the region as an equal global partner and player.
- Provide technical, moral, and financial support for the establishment of NGO forums in every Caribbean State in order to complete the organisation of civil society by positioning the NGO sector to the level of organisation and representation akin to the private sector and labour.
- Create national and regional coordinating councils to strategise and advocate causes.
- Promote more development partnerships with citizens and non-state actors.

TRADE AND FINANCE

- Recognise, acknowledge, and forge increased connections with the Caribbean Diaspora – as a means to increase market share by establishing a regional commission of overseas-based nationals to tap into accessible resources.

LABOR

- Implement specific programs for small and medium-sized enterprises, providing them with technical assistance, micro-credit, training, and labour mediation services. Those programs must be designed to enhance entrepreneurship, the development of training systems, eligibility to receive credit and access to financial markets; facilitate participation in international trade and provide the technical expertise to enable communities to assess, evaluate and develop micro and macro enterprises.
- Cooperate with civil society organisations and key representatives of the private sector as partners in discussing and drawing up employment generation strategies.
- Develop and enact fiscal policies and incentives to encourage and persuade the private sector to create and maintain jobs in the community.
- Promote policies to support businesses and productive investment that are geared to generating decent work, and, especially, respect for fundamental rights at work; providing employment with social safeguards; and fostering social dialogue.
- Increase attention to vulnerable groups, such as indigenous peoples, minorities, and persons with disabilities, in efforts to reduce inequalities in the workplace for reasons of social status, race, sex, age, or any other kind of discrimination.

EQUITABLE GROWTH

- Develop and implement new measures to depoliticise the issue of poverty reduction, taking into account policies to combat poverty.
- Create special programs for individuals suffering from dislocation from structural fallout in economic circumstances.
- Continue to pursue the mandates and commitments taken on at the Summits of the Americas, the Millennium Summit, and the International Conference on Financing for Development (Consensus of Monterrey) in order to foster well-being and a more equitable distribution of economic growth, generate new employment opportunities, promote decent work, eradicate hunger, and raise the standard of living in the Hemisphere, basing goals on the International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and on the Charter of the Organization of American States and implement policies and programs that enable labour markets to function properly.

EDUCATION

- Promote the adoption of new educational curricula which emphasize afro-descendants and indigenous cultures of the Caribbean.
- Develop enhanced youth enterprise service programs to increase exposure to technical and vocational training for young people, disabled persons, and indigenous people.
- Generate policies which emphasize and make education, training and economic activity the foundation for poverty eradication strategies.

GENDER EQUALITY

- Institute mandatory gender policies to build a culture of acceptance of women as a critical part of national development to eliminate gender-based poverty and to reduce disparities between men and women in the workplace through an integrated approach that incorporates a gender perspective in employment policies.

CULTURAL DIVERSITY

- Identify and recognize specific traditional cultural practices and their potential as a critical part of wealth creation, job creation and poverty alleviation.

CONNECTIVITY

- Build more effective information gathering and sharing mechanisms.

VI. CIVIL SOCIETY IN THE MEETING OF HEALTH AND ENVIRONMENT MINISTERS OF THE AMERICAS, MAR DEL PLATA, ARGENTINA, JUNE 16 AND 17, 2005

EDUCATION

- To provide training, create public awareness and promote the participation of the population, offering the information available.
- To provide training for society in general, decision-making sectors, industry and production on adequate management of chemicals.
- To produce simple information and to implement the necessary means (for example, truthful and correct information in the labels of the product) to inform the community in commerce.
- Integrate Ministries of Education and other relevant areas with training actions in order to speed up the process of introducing concepts by using formal and informal available methods.
- Promote research without interrupting action to determine “the state of the science”.
- To make use of the available resources in the region in order to carry out research, studies, controls and actions aimed at the protection of human and environmental health.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

- To adopt as a “State Policy” the Millennium Development Goals (MDGs), especially those related to the access to drinking water services and sanitation.
- To increase the budget and identify new funding sources in order to face these challenges.
- To agree within a short term (less than a year) the design, approval and application of common contamination and health indicators, allowing standard monitoring, preventive actions, remediation and recomposition.
- To promote the adequate management of waste water and solid waste from its production, treatment and final disposal.

2002-2006 CIVIL SOCIETY RECOMMENDATIONS

- To promote processes of clean production and responsible consumption, preventive measures, and the use of better technologies and environmental and health practices for the reduction of pollutant emissions affecting streams.
- To promote the use of sustainable technologies adapted to the reality of our region.
- To assure the definition of effective public policies in order to control the use of pesticides.
- To ratify and implement the commitments acquired in the international and regional treaties and conventions on sound management of chemicals.
- To include the recommendations of the Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS), Forum IV, in the intersectoral working plans and to inform people and other interested parties on the commitments acquired, for example on:
 - illegal transborder chemical trade (including pesticides),
 - to protect children from hazardous chemical exposures,
 - chemical stockpiles (pesticides, PCBs and others),noting that the countries must report the progress made on these issues at the V IFCS Forum scheduled for 2006.
- To prioritize, in large metropolitan areas, the assessment of the supporting capacity of the territory, seeking the definition of a realistic scenario for sustainability compared to the reduction of water production and strategic resources to supply human activities.
- To promote the integrated and participative management of watersheds and micro-watersheds.
- To prioritize and take urgent steps in the watersheds where an important economic activity is developed, having a great impact on the largely inhabited areas of them. For example, the watersheds of the Paraná, Río de la Plata, Reconquista and Matanza – Riachuelo (Argentina), River Neverí and others that feed the main dams (Venezuela), Pilcomayo River (Bolivia), Guayas River (Ecuador), Piracicaba River and Alto Tiete (Brazil), among others.
- To approach problems set forth by the inter-jurisdictional fractures created by different competences, seeking a solution for difficulties set out and facilitating control.
- To revise current legislation and regulations to facilitate its application, identifying gaps and overlaps, establishing a continuous updating system, for example, allowable limits for usage of chemicals implementing more effective controls.
- To facilitate industrial reconversion incorporating clean technologies.
- To create and implement chemical safety public policies, promoting the creation of mapping of polluted areas with chemicals, and generation of environmental intervention and recovery programs, being the priority those areas representing a risk for human health.
- To generate a space that allows experience exchange, updates and access to registers regarding safe management of chemicals (capacity, updated water balances, etc.).

HEALTH

- To apply the Precautionary Principle (Principle 15 of the Declaration of Rio): “Whenever there is danger of serious and irreversible damage, the lack of an absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of cost-effective measures for the prevention of environmental degradation.”

- To assure the chemicals produced, used and sold may be used without any risk for human and environmental health.
- Request fulfillment of the international commitments in which Children's Environmental Health is an specific matter for discussion and introduce it in those in which this matter has not been regarded as a determining factor or a parameter (such as, for example, in the Climate Change talks).
- Organize Pediatric Environmental Health Units (UPAs).
- Promote the creation of Children's Environmental Health profiles to:
 - identify main problems quickly, so as to know their characteristics and decide to take immediate action,
 - elaborate National Action Plans including participation of governmental sectors, NGOs and the community.
- Promote Longitudinal Cohort Studies to determine and follow up environmental conditions and their influence in children's health.
- To create public awareness, inform and provide training on Children's Environmental Health in all sectors. Inform the community without causing alarm and develop attractive plans of public and popular education using active and passive mechanisms.
- To implement long-term public policies related to Children's Environmental Health. These preventive policies should remain in time instead of having a "campaign effect", considering the high costs that diseases represent for families and healthcare system.
- Incorporate health and environmental issues in curriculums from kindergarten education to university degrees. Provide training, especially to healthcare, environment and education professionals.
- Promote aggressive and massive dissemination campaigns on hygiene, children's care, consumption of local available food, smoking, alcohol, addictions, HIV, teenagers pregnancy and child labor guidelines, protecting children from exposure to waste, wastewater, hazardous chemicals and other environmental risk factors.
- To prevent importation of chemicals whose production, commercialization and use was banned in other regions (for example, the United States, Canada, and the European Union).
- To apply the Precautionary Principle, and prioritize those cases in which urgencies and/or emergencies are identified as a result of serious effects on public health derived from the indiscriminate, inadequate, intensive or extensive use of pesticides (for example Quibor in Venezuela; Taucamarca in Peru), considering transborder cases. Special attention must be paid to spraying with herbicides in the border between Colombia and Ecuador.

CIVIL SOCIETY PARTICIPATION

- To promote the participation and the commitment of the community and other sectors involved, and allow the control of water quality and sanitation along the time.
- We urge full participation of the organizations of civil society committed with the protection of the environment and health in the decision-making processes from the gestation, in the implementation and even in the monitoring of public policies.
- To create action networks where participation of all the interested parties is promoted.

2002-2006 CIVIL SOCIETY RECOMMENDATIONS

- Take short-term action, socialization and coordination of plans including different community sectors from the creation of public policies in the whole process.
- Promote inter-regional and international collaboration.

HUMAN RIGHTS

- To ensure the access to information on chemicals and their management.

VII. SEMINAR WITH ANDEAN COMMUNITY “DEMOCRATIC GOVERNANCE AND THE PROBLEM OF EMPLOYMENT IN THE ANDEAN SUB REGION”, LIMA, PERU, APRIL 14 AND 15, 2005

DEMOCRACY

- There are three governance scenarios in a democracy: the first is precarious governance that permanently threatens the existence of democracy; the second is authoritarian governance that ultimately denies even the appearance of democracy, as has often been seen in the region; the third and desirable scenario is construction of democratic governance.
- In the current Andean situation it is essential to construct social cohesion as a core issue of the public agenda in order to cement democratic governance. Given the eroding confidence and solidarity in Andean societies, to govern democratically signifies much more than an electoral mandate: to govern is to build society.
- Democratic governance based on social cohesion requires broad national agreements arising from genuine consensus on a small number of public policies -goals, time frames, follow-up, and evaluation- and governments with sufficient political power to put those agreements into practice. Without the foregoing there is a risk that politics and political parties will be rendered ineffective, thereby further weakening their standing.

LABOR

- Need to tackle the problems of unemployment, informality, precarious employment, low productivity and poverty, and to make the promotion of decent and quality jobs a priority of national development strategies as an effective way to overcome poverty;
- At the outset of the 21st century, our countries face twin agendas for development: to overcome domestic disparities and take our place in the international arena under beneficial conditions. Growing social demands, difficulties in meeting those demands, and problems for effective democratic governance require a new Andean and Latin American consensus that overcome the shortcomings of the predominant mindsets of the past decade and combine competitiveness, decent work and social inclusion in a single approach.
- To reintroduce the development dimension in sub-regional integration and national policies, rather than rigid schemes, what is needed is a strategy designed to ensure inclusion in the global market under advantageous conditions, a stable macroeconomic climate, a dynamic agenda for productive transformation, adequate infrastructure, solid institutions, and social cohesion to ensure democratic governance.
- In broad terms, social cohesion should encompass three spheres of action: creation of job opportunities, effective social protection, and long-term policies to strengthen human capital and improve the way the labor market works. The aim of the foregoing is to reduce poverty, improve income distribution and decrease exclusion.

- The productive transformation of our societies should, by dovetailing economic and social policies with broad consensus building on objectives for well-being and development objectives, ensure the creation of decent and fitting employment -appropriate wages, productivity, stability, social security, and health and safety at work- in order to help form societies in which both solidarity and competitiveness are core values. To that end, it would be necessary to establish an employment-oriented strategy through consolidation of the bipartisan approach and social dialogue.
- To improve their structural competitiveness and at the same time raise their productivity to drive down inequality and poverty, Andean countries must implement sectoral and subnational policies that stimulate investment in every size of enterprise, increase productivity, and create employment in labor-intensive sectors.
- As regards policies in effect at the subnational level, there is plenty of evidence of successful instances of subnational economies that have achieved high relative growth. Technical and political bodies are beginning to identify so-called “poles of subnational development” or “city–regions” as favorable settings for the design of institutional policies and measures.
- The grouping of micro-, small, and medium-size businesses into subnational productive clusters and networks is a strategic priority in Andean countries because they are one of the keystones of steady employment and local economic development.
- Efforts in the area of productive transformation and integration with international markets should encompass the rural sector, where it is necessary to stimulate increased productivity in order to ensure the inclusion of this vast sector of the Andean population, guaranteeing the sustainable use of natural resources, generation of productive employment and improvement of living conditions.
- Assistance must be increased and improved for disadvantaged groups, such as women, indigenous peoples, Afro-descendants, immigrants and people with disabilities. Particular attention should be given to young people that suffer high rates of unemployment and informal employment, as well as low school attendance.
- Education is essential to help develop human and social capital at both national and subnational level. Among other aspects, education plays diverse roles in growth and social cohesion as an instrument that facilitates the spread of knowledge, as well as being pivotal for the social mobility of persons and ensuring access to fitting and stable employment.
- There should be a trend toward a gradual modification of the productive structure of countries as a way to increase employment. This option does not conflict with the proposal to boost competitiveness through the development of productive chains or clusters, which require the establishment of inter-sectoral relations and networks.
- A review is needed of the labor reforms instituted in the 1990’s with a view to establishing and strengthening a stable labor framework that promotes employment, respects labor rights, and encourages harmonious labor relations.
- It is necessary to define a strategy for equitable growth in which the creation of fitting and decent jobs and greater social inclusion are core development objectives.
- To improve their structural competitiveness and, at the same time, raise their productivity to drive down inequality and poverty, Andean countries must implement sectoral and subnational policies that stimulate investment in every size of enterprise, increase productivity, and create employment in labor-intensive sectors.

- The fight against exclusion and poverty must include access for all to a decent job and efforts to tackle poverty and unemployment jointly. The foregoing requires: i) implementation of international labor standards; ii) more employment opportunities for men and women so that they can access decent jobs and incomes; iii) increased coverage and effectiveness of social protection for all; and, iv) consolidation of the tripartisan approach and social dialogue.

VIII. CIVIL SOCIETY HEMISPHERIC FORUM: “DELIVERING THE BENEFITS OF DEMOCRACY”, WASHINGTON, DC, UNITED STATES OF AMERICA, APRIL 11 AND 12, 2005

DEMOCRACY

- Establish objective and shared criteria facilitating the effective application of the provisions of the Inter-American Democratic Charter in situations where constitutional government is interrupted and/or altered and democratic institutions suffer serious deterioration.
- Based on the shared criteria and objectives established in the Inter-American Democratic Charter, invite civil society organizations registered with the OAS to give annual presentations to the Permanent Council on the “state of democracy” in their countries.
- With the support of the OAS, based on the existence of objective and shared parameters, establish the bases for building an Inter-American Observatory on Democracy consisting of civil society networks and organizations, making it possible to develop early warning signs in the event of institutional deterioration and to organize collective defensive action.

HUMAN RIGHTS

Strengthening systems for the promotion and protection of human rights

- At the upcoming OAS General Assembly, ensure a process for selecting new members of the IACHR that is participatory, equitable, and transparent, as an essential condition for ensuring that those who are selected are qualified and independent, thus guaranteeing the strengthening of the system’s bodies, particularly their autonomy.
- Strengthen the political role of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) so that it can direct the States to identify structural problems in the region that permit human rights violations and the OAS to consider human rights as an essential component for strengthening democratic systems.
- Ensure that the budget is consistent with the volume of work so as to ensure the operations and efficiency of the Inter-American Commission and Court of Human Rights.
- Establish standards for developing periodic reports on progressive measures adopted by States in accordance with the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights.
- Move ahead with the preparation and/or adoption of new inter-American instruments for the protection of human rights, particularly:
 - The American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, guaranteeing their free determination and right to their lands, territories, and resources.
 - An inter-American Convention against Racism, Xenophobia, and Racial Discrimination, recognizing that they are a fundamental problem in the region.
- Strengthen domestic systems for the promotion and protection of human rights.

Fulfillment of international obligations and observance of international standards

- Ensure compliance with decisions made by human rights protection bodies by creating internal mechanisms in the member states and through the political organs of the OAS.
- Ensure universal acceptance of the system, which means that the member states must sign and ratify, or ratify, all inter-American instruments in the area of human rights.
- Ensure the ongoing operation of the organs of the inter-American system for the protection of human rights.
- Complete the process of reflection on the inter-American system that has been carried out by the member states, the Committee on Juridical and Political Affairs of the Permanent Council, the organs of the system, and the Inter-American Institute of Human Rights.
- Ensure that security measures are established with full respect for human rights. In this regard, guidelines must be adopted by the Inter-American Commission on Human Rights to direct the fight against terrorism in the region.
- Make trade objectives and treaties subordinate to the duty of governments to respect, protect, and guarantee all human rights.
- Ask the Permanent Council to ensure that the OAS Mission to Support the Peace Process in Colombia (MAPPOEA) fulfills its mandate in accordance with resolution CP/RES.859 (1397104), with full respect for international human rights law and international humanitarian law.
- Disseminate and implement the instruments of the inter-American system and the decisions of its bodies with respect to human rights defenders, pursuant to resolution AG/RES. 2036 adopted by the OAS General Assembly.
- Appoint a working group to move ahead with implementing the mandates¹ of the resolutions on the right of access to public information, with particular attention to resolutions on the subject in the framework of the upcoming General Assembly, and, to that end, place particular emphasis on the mandate of the Special Summit in Nuevo León.²
- Adapt and strengthen domestic systems of justice in line with inter-American standards on protection of human rights. In addition, laws must be created to protect vulnerable groups such as women, children, migrants, Afrodescendants, and indigenous peoples.

¹ The working group would be responsible for drafting minimum standards on the protection of this right when regulating and guaranteeing it. This may be in line with the IACHR Declaration of Principles on Freedom of Expression and may take the form of a declaration of principles.

² The Declaration of Nuevo León states: “Access to information held by the State, subject to constitutional and legal norms, including those on privacy and confidentiality is an indispensable condition for citizen participation and promotes effective respect for human rights. We are committed to providing the legal and regulatory framework and the structures and conditions required to guarantee the right of access of information to our citizens.”

2002-2006 CIVIL SOCIETY RECOMMENDATIONS

- Change structures that permit violations of human rights. In this respect, countries must establish measures against corruption, particularly impunity, as this perpetuates the violation of human rights.
- Guarantee the independence of branches of government as an essential condition for democracy and respect for human rights.
- Adapt and implement domestic legislation and public policies consistent with the measures recommended in the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking (United Nations E/2002/68/Add.1.) in order to fulfill the commitment to protect the human rights of all persons within their territories.
- Promote education on human rights in the region.
- Give particular consideration to the human rights situation in Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, and the United States.

Migration

- Adopt measures to resolve the disturbing situation of human rights violations suffered by millions of migrants in the region.
- Consider the serious situation of refugees in the region's countries.
- Consider the situation of persons forcibly displaced in the region.

Human rights of women

- Ensure independence in the follow-up mechanism of the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention of Belém do Pará).
- Ensure that the efforts made by the OAS and its member states to ensure equality between women and men and the human rights of women in the hemisphere are coordinated with the efforts made by the United Nations and other regional and subregional inter-governmental forums and organizations in which OAS member states also participate.
- Adopt measures to eliminate violence and discrimination against women in the region.

HEMISPHERIC SECURITY

- Increased participation and involvement of civil society in the formulation of policies and the presentation of subjects relating to hemispheric security as a crucial component for preventing conflict and building peace, and as a fundamental mechanism for preventing the securitization of political, economic, social, and environmental topics, particularly within the framework of giving priority to terrorism as the principal threat to the region.

In this sense, we understand that building peace requires, among other things, a transition from a culture of reaction to crises and emerging conflicts, associated with traditional concepts of security, to a culture of prevention framed by the concept of multidimensional security subscribed to by the governments of the Hemisphere at the above-mentioned conference, a concept that allows for the early detection of violent and/or armed conflicts both between and within states, and the formulation and implementation of joint policies among

governments, inter-governmental agencies, and civil society networks and organizations for the purpose of preventing them. In addition, we understand that the cost in human life and the loss of material goods inherent to these conflicts can be avoided if they are prevented early enough and with the active participation of citizens in the context of full respect for the rule of law and international law.

- Promote the strengthening of civil management of security to consolidate democratic institutions and governance in the region.
- Expand the participation of civil society in the formulation of security policies and in monitoring defense through greater interaction with government agencies, parliaments, and political parties. For example, this could include open forums for the writing and updating of white papers, public hearings for discussion of the missions and organization of security and defense bodies, and the creation or strengthening of parliamentary mechanisms to oversee public security institutions and policies, particularly with respect to public spending on security.
- Expand the participation of civil society in discussion and debate regarding regional and hemispheric security policies through more elaborate mechanisms for linkage and dialogue with inter-governmental bodies, particularly the Council on Hemispheric Security, for example, by sharing experiences and analyzing practices to reduce the increased use of kidnapping as an instrument of terrorism.
- Support the development of civil society's ability at the local, national, and regional level to deal with the subjects of peace and security through education and formal and informal training; for example, by contributing to the preparation, use, and distribution of training materials to develop a preventive view of conflict and greater capacity among citizens regarding the effect and monitoring of these subjects.
- Help to develop an early warning system for conflict prevention in the region based on the active involvement of civil society commensurate with the participation of governments and international bodies, with the understanding that civil society plays a crucial role in conflict prevention and ultimately in conflict resolution and post-conflict reconstruction. This could include encouraging the creation of an early warning datamap system using civil society networks and organizations.
- Encourage the modernization of security forces and national regulations on defense and security systems to provide greater transparency and accountability, fully implementing the Inter-American Convention against Corruption. This could include defining the scope and depth of confidential information protected by state secrecy laws so that they are compatible with laws on access to information in each country, stipulating that secret expenditures should be exclusively for intelligence activities and establishing effective legislative mechanisms to oversee such expenditures.
- Help to construct an Inter-American Registry of Defense and Security Expenditures as a mutual confidence building mechanism among countries.
- In that gang violence in Central America is a serious problem and represents a threat to public order in Guatemala, El Salvador, Honduras, and southern Mexico, and bearing in mind the complexity of the problem, emphasize that the handling of gang crime by states must be framed by an inter-disciplinary and holistic approach that includes policies on prevention and rehabilitation consistent with legal frameworks in effect.
- In that the solution to the security problems of States must be framed by international law, repeat the call for States that have not yet done so to sign the Pact of Bogota.

Fight against terrorism

- Reiterate that terrorism is by nature criminal conduct and should be under the exclusive jurisdiction of police rather than military forces, leaving those responsible for terrorist acts subject to the corresponding criminal penalties, within the framework of judicial proceedings that respect basic guarantees.
- Reiterate to governments that combating terrorism must be approached from a perspective of full respect for the instruments of human rights in the inter-American system, particularly the American Convention on Human Rights, as well as in accordance with the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights and the Inter-American Commission on Human Rights, with particular reference to the Report on Terrorism and Human Rights. In this respect, we recommend that states adopt guidelines on observance of human rights in the design and implementation of anti-terrorist policies.

CIVIL SOCIETY PARTICIPATION

- Based on the shared criteria and objectives established in the Inter-American Democratic Charter, invite civil society organizations registered with the OAS to give annual presentations to the Permanent Council on the “state of democracy” in their countries.
- With the support of the OAS, based on the existence of objective and shared parameters, establish the bases for building an Inter-American Observatory on Democracy consisting of civil society networks and organizations, making it possible to develop early warning signs in the event of institutional deterioration and to organize collective defensive action.
- The participation of civil society is fundamental but can only be ensured if there is respect for the human right of access to information, as established in various inter-American instruments. For this purpose, all drafts of documents in the OAS and Summit framework must be accessible.
- Reaffirm the recommendation from the Hemispheric Forum held in 2004 to create a task force with civil society to implement the provisions of the Declaration of Nuevo León and cover subjects such as:
 - a. Access to public information;
 - b. Effective participation of civil society in decision-making; and
 - c. Accountability.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

- Future discussions at the OAS within the framework of the General Assemblies and the Summit of the Americas process should use the term sustainable development in accordance with the Declaration from the Summit in Santa Cruz, Bolivia, which presumes that development is not only economic and social but should also ensure environmental protection. This is also consistent with Article 15 of the Inter-American Democratic Charter.

EQUITABLE GROWTH

- In order to promote the redistribution of resources, adopt transparency and accountability mechanisms such as the EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) so that our governments ensure disclosure of the tax revenues generated by exploitation of minerals and petroleum. In addition, they should capitalize on success based on lessons learned, including the positive impact that microcredit has had in the region, particularly credit extended to women.

- The OAS should conduct a study to quantify poverty levels in the region, considering the impact of the informal economy, as well as the levels of investments the countries are currently making to reduce poverty. It should promote regional forums with the participation of representatives from government, private enterprise, and civil society – ensuring representation in terms of gender and for vulnerable groups such as indigenous peoples, Afro-Americans, and youth, so as to systematically evaluate national and regional strategies to combat poverty.
- The States in the region should take concrete actions to prevent all forms of discrimination and intolerance, approving the proposal to this effect that has been included in the agenda for the upcoming OAS General Assembly.

EDUCATION

Science and Technology

- Adopt the Recommendations from Civil Society on the Fundamental Role of Science, Technology, Engineering, Innovation, and Science Education within the Framework of Discussion for the Fourth Summit of the Americas.

GENDER EQUALITY

- Ensure that the efforts made by the OAS and its member states to ensure equality between women and men and the human rights of women on the continent are coordinated with the efforts made by the United Nations and other regional and subregional inter-governmental forums and organizations in which OAS member states also participate.

IX. GENDER FORUM OF THE AMERICAS. BUENOS AIRES, ARGENTINA, APRIL 2005

- Only through the elimination of armed conflicts and all covert forms thereof will it be possible to move forward with the implementation of consensus and commitments adopted by the member states in the framework of peace. That is because peace, the self-determination of peoples, and the eradication of poverty, generated in our countries chiefly by the weight of the foreign debt, are essential for the effective exercise of human rights, in particular for women.

HUMAN RIGHTS

- Adopt effective measures at the domestic and regional level to end discrimination based on sexual orientation and identity, expression of gender, and different capacities; and condemn and combat manifestations of racism, all forms of discrimination, and intolerance and xenophobia against migrants and refugees and their families in all fields.
- Safeguard national provisions to prevent, combat, and protect the victims of, the crime of trafficking in persons, be it for labor or slave labor, of children for illegal adoption or sexual exploitation, and other forms of trafficking. To that end, it is necessary to ensure the participation of experts and the existence of comprehensive cooperation mechanisms among states, in order to facilitate exchange of information and experience, political dialogue, and cooperation among source, transit and destination countries for illicit trafficking in persons. It is also necessary to create of statistical registers in accordance with resolutions, treaties and undertakings adopted in this area.

JUSTICE

Access to justice

- Judicial processes should be made increasingly accessible to citizens whose rights to equal opportunities are violated, so that they feel that the justice system in our countries provides a protective framework for the most vulnerable.

TRADE AND FINANCE

- We reject all bilateral and multilateral treaties (FTAA) based on unequal relations among countries that heighten dependence. We women of the Americas view with great disquiet any bilateral or multilateral trade agreement based on so-called equality among signatory states. It is well known that at present there is a pole of quasi-hegemonic power in the hemisphere that limits and curbs the decision-making capacity of our states, tie our economies to conditions, and obstruct the full enjoyment of our human rights and those of our children, young people, and elderly, in particular economic, social and cultural rights. With these agreements Latin America is retreating from previous international agreements, such as the founding Charter of the OAS and the WTO Summit held in Doha (November 2001), which put the health of persons above the corporate interests of pharmaceutical companies. Furthermore, Article 13 of the Inter-American Democratic Charter says, “The promotion and observance of economic, social, and cultural rights are inherently linked to integral development, equitable economic growth, and to the consolidation of democracy in the states of the Hemisphere”.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

- It should be borne in mind that eradication of poverty will not be possible without the adoption of a sustainable and equitable development model, and strengthening regional integration processes, with an attentive and responsible state that regulates the market; protects natural resources and their use; safeguards the environment; ensures access to, and the provision of, quality public services (potable water, energy, communications, etc.), and is committed to taking steps to ensure that the cost of those services is accessible to all. The State must also put an end to corruption, operate with transparency, and safeguard the right to information; foment accountability in all spheres, civil society participation in all areas of government, and, in particular, equitable representation for women in all decision making levels of the executive, legislative, and judicial branches as well as in international mechanisms.

LABOR

- Efforts should be made to ensure equal opportunities and treatment at work and to eradicate cultural, economic and social conditions that perpetuate discrimination. Access should be fostered to training, employment, promotion, organization, and decision making. Furthermore, equal conditions should be ensured as regards salaries, benefits, social security and job-related social services. Public accounts should take into consideration, and appropriate measurement instruments instituted for, the unpaid “reproductive” work mainly done by women. Cooperativism should be fomented as a development strategy.

EQUITABLE GROWTH

- States should focus all their efforts, determination, and commitment at all levels of government, as well as in integration agreements and with agencies of the inter-American system and international and regional development agencies, to combat the serious problems of poverty, social exclusion and inequity, which to various degrees affect all the countries in the hemisphere, tackle their causes and consequences, and create favorable conditions for socioeconomic development with equity, bearing in mind the conditions that affect and

impoverish women in particular. States must also strive to ensure that future generations in the region benefit from the historical legacy of their ancestors, as well as their customs, culture and traditions.

- Adjustment policies have turned Latin America and the Caribbean into the most inequitable region in the world and have resulted in previously unheard of poverty levels in the region, with the attendant terrible consequences in terms of child malnutrition, illiteracy, loss of jobs, and situations in which women had to alleviate the decline in their household incomes by working longer hours.

EDUCATION

- States should ensure the universal right of children to a compulsory and comprehensive lay education based on democratic and solidary values, free of cultural stereotypes that reproduce gender discrimination. Education budgets should focus in particular on women and girls in rural areas where illiteracy rates are higher.

HEALTH

- Bearing in mind the increasing feminization of HIV/AIDS, states should implement widespread education and information campaigns to combat it.

GENDER EQUALITY

- The design, implementation and evaluation of public policies should include a gender perspective, as should the orientation of government efforts and budgets at the national and local level. Furthermore, institutions should be opened up to ensure participation for civil society organizations.
- National accounts should take into consideration the unpaid work of women as part of GDP, since it continues to account for two-thirds of the gross international product.
- Public policies must be implemented to prevent, punish and eliminate all forms of gender violence, be it physical, sexual, domestic, economic, in the work place, and sexual harassment, in all walks of public and private life, on the basis of the Convention of Belem do Para.
- All member states that have not yet done so, should ratify the appropriate international and regional instruments to safeguard the rights of women, as well make their national laws consistent with those instruments. Member states should also apply the follow-up mechanism on the implementation of treaties and declarations in participation with independent experts and civil society organizations.
- The sexual and reproductive rights of all persons must be protected. Furthermore, women should be guaranteed their right to self-determination over their bodies, provided with the necessary services -in terms of both health and education- and inputs free of charge, and encouraged to pursue an independent life plan. The universal right to sex education must be ensured (Program of Action of the International Conference on Population and Development, Platform of Action of the Fourth World Conference on Women, Consensus of Lima of 2000, and Mexico 2005).
- States must revise laws that provide for punitive measures against women who have illegal abortions. Furthermore, the right to a safe and free abortion should be legalized.

RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE

- Indigenous peoples, afro-descendant communities, and other groups that suffer discrimination should be engaged in consultative dialogue, in order to generate multicultural public policies designed to contribute to their development with identity, and to implement international declarations, treaties, and conventions on women and indigenous peoples that have been ratified by states.

X. MEETING WITH CIVIL SOCIETY IN THE FRAMEWORK OF THE XXXVII MEETING OF THE SUMMIT IMPLEMENTATION REVIEW GROUP (SIRG), BUENOS AIRES, ARGENTINA, MARCH 10, 2005

DEMOCRACY

- Continue efforts made to date in the fight against corruption and in the fight to guarantee public security, in order, thus, to ensure the stability of democracy and the possibility of creating jobs.
- Harmonize job creation initiatives with policies of transparency, striving to ensure that these policies prevail in the management of labor, hiring, and the dynamics and beneficiaries of social protection. This is of the utmost importance to ensure the sound functioning and optimization of resources of these systems.
- Develop standards and indicators to evaluate processes to modernize the State and facilitate its monitoring by civil society.
- In Nuevo León the Declaration of the Special Summit has a specific commitment regarding the access to information in the hands of the State. It reads: “Access to information held by the State, subject to constitutional and legal norms, including those on privacy and confidentiality is an indispensable condition for citizen participation and promotes effective respect for human rights. We are committed to providing the legal and regulatory framework and the structures and conditions required to guarantee the right of access to information to our citizens.” We consider that, from civil society, this year since the Summit there must be results in fulfilling this mandate because of the importance that the States themselves have given to this text. The laws on access to information should also comply with international standards and ensure that all exceptions are explicitly laid out and justified and capable of being revised by the judiciary. Regarding this, we also require the States to strictly enforce respect for the freedom of expression in the fullest sense and dimension of the term as an indispensable condition prior to the tangible implementation of access to information. Access to information is nothing but a meaningless ideal if there are laws or decrees limiting the freedom of expression.

HUMAN RIGHTS

- Ensure that policies that are drawn up to create jobs and in general public policies that combat poverty and secure sustainable development be developed in a framework of respect for, and promotion of, human rights and that, in the event of a conflict of interest, human rights are respected as paramount.
- Recognize that the respect for, and promotion of, all human rights, including civil and political rights, as well as economic, social, and cultural rights, as indivisible, universal and interconnected, are an indispensable condition for achieving sustainable development. Likewise, their protection should be guaranteed, which requires effective and efficient access to justice when infringed.

- On the basis of an integrated approach to human rights, public health and equity and bearing mind the binding conventions ratified by the States participating in the Fourth Summit of the Americas, we affirm that the creation of more and better employment requires the instrumentation of a series of State policies that promote, protect, and guarantee compliance with the right to health from an integral and interdependent approach with the rest of human rights. To this end, it would be decisive to work on eliminating gender and class inequalities in health service access and use, especially in the area of sexual and reproductive health, in view of their fundamental impact on the possibilities of poor women to gain access to decent work.
- Strengthen, in the hemispheric framework, the system for protecting human rights inside the OAS, by guaranteeing its independence and effective capacity to function. The States should not only guarantee this but also promote the ratification of human rights instruments and conventions as the frameworks that are needed to combat poverty and achieve sustainable development.

JUSTICE

Independence of the judiciary

- Guarantee the autonomy of the judicial branch, ensuring the predictability of its activities. Developing these conditions is fundamental to generate a climate in the financial system that makes it easy for small and medium-sized businesses to gain access to loans.

HEMISPHERIC SECURITY

- Disarmament averts violence, which, in turn, undermines democratic stability. The concept of armed peace should not be viewed as beneficial for the public. We invite States to embrace peace-related projects.

CIVIL SOCIETY PARTICIPATION

- *Clarity in the process of participation of civil society:* Establish a clear and concrete methodology to articulate the participation of civil society in the Summit process. It should be all-embracing and pluralistic, permitting contributions from the largest possible number of civil society organizations. This requires drawing up a clear timetable of the meetings of government delegates, with prior access within reasonable time-limits to the drafts of the Declaration that are drawn up and other documents dealt with, including national reports on compliance with the mandates. It also involves institutionalizing civil society participation in compliance with the Declaration of Nuevo León. Regarding this, the participation of government delegates in the dialogue between civil society and the State, where the recommendations of society are submitted, is mandatory. This also requires objective parameters for the allocation of resources to guarantee the participation of a wider range of civil society organizations.
- *Measuring the incidence of civil society's participation:* To measure the incidence of civil society's participation in the process, the Summits of the Americas Secretariat should compare the recommendations received from civil society with the final draft of the Declaration of Mar del Plata, specifying which contributions have been taken into consideration and which have been omitted and what criteria were applied when taking the decision to omit them. To draw attention on the limited participation of the representatives of States in the past Round Table with Civil Society and the Special Session of the CISC. We recommend that the participation of States in these dialogue forums be mandatory. Likewise, domestically, there should be consistency with the regional mandate of institutionalizing civil society participation in the Summit Process, and each national focal

point should clearly specify the government entities where civil society can articulate its participation..

- Promote the enactment of public participation laws that are effective and provide mechanisms to enforce this participation. These laws should guarantee the right to participation in decision-making processes in matters affecting the quality of life of citizens.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

- Environmental protection should necessarily inspire the mechanisms of development, strengthening of democracy and job creation. Thus, it should mitigate the effects of pollution on the most marginalized sectors—access to clean water, air quality, hygiene, among others—to increase access to the bodies of participation and control of activities with a negative impact on the environment and to increase the levels of protection of the region's natural resources. The environmental variable in the analysis of the courses of action for the region's development is indispensable so that development can become sustainable.

LABOR

- Manage at the Summit and in the documents arising from its a new conception of work and employment not only in terms of salary but also in terms of social protection, human development, fairness in compensation and identity. It is important for the Presidents of the hemisphere to adopt a leading-edge definition for the topic of work, which avoids tackling the problems of the 21st century with the weapons of the past. Thought has to be given to defining the boundary between what is considered to be work and what is not and to defining this matter on the basis of other conceptual frameworks. Household work, education, personal and community services, in short, a wide range of socially relevant activities should start to be considered with a new approach and, as a result, they should be remunerated differently. National and hemispheric strategies should be drawn up to discuss work and its linkage to a decent life that contribute to drafting public policies in this regard.
- Insert employment creation policies in broader income redistribution policies that are the result of a wide-ranging and all-embracing national dialogue.
- Promote the development of technical standards that contribute to disseminating knowledge, technology transfer, and the consistency of concepts.
- Give particular consideration in employment policies to the gender issue, especially with regard to the incidence of the situation of women and labor conditions, as well as access to work for women heads of household.
- Promote the development of adequate policies for the native peoples that foster their participation in the job market and include special provisions that articulate traditional knowledge with the application of technical regulations and standards.

EDUCATION

- Articulate formal and nonformal education to promote work by training persons.
 - Mechanisms are required to regulate and accredit nonformal and regular education and its quality.
 - Strategies have to be designed to organize the supply of technical and nonformal education so it will meet the demand for vocational training.
 - Both formal and nonformal education should be subject to compatible evaluation mechanisms.

- Raise both the technological level of the countries and their capacity to provide quality technological training, so as to prevent the drain of educated talent from our countries.
- Take concrete actions to narrow the gap between public and private education to guarantee real equality of access to job opportunities.
- Develop suitable educational policies to help vulnerable groups or groups that require special support (young people, women, elderly persons, the disabled, native peoples, people of African descent, and migrants) to become incorporated into decent work.
- Design flexible systems and credit schemes that enable young people to gain access to education.
- Combine educational strategies with policies for inclusion of the socially excluded.

V. WORKSHOP ON “INNOVATION AND DECENT WORK”, BUENOS AIRES, ARGENTINA, MARCH 7 AND 8, 2005

DEMOCRACY

- We declare our firm respect for the rule of law and our commitment to democratic principles, and we exhort governments to reaffirm their commitment to the Inter-American Democratic Charter.

CIVIL SOCIETY

- We call to the attention of governments, international organizations and civil society in general the fundamental and unique role played by employers’ and workers’ organizations in the definition of employment and labor policies. We state that employers and workers must be considered as key actors in the context of civil society organizations, and hence deserve a privileged role in the discussions preceding the Summit. Therefore, we reiterate the importance that COSATE and CEATAL be considered necessary interlocutors in this process, and consultative bodies of the Inter-American Conference of Ministers of Labor (IACML) and other OAS fora.
- We consider that strengthening tripartite social dialogue at the national, regional and hemispheric level is fundamental.

LABOR

- We ratify our commitment to the respect, promotion and effectiveness of the ILO Declaration on the Fundamental Principles and Rights at Work of 1998; and we exhort governments to comply with it.
- We reaffirm the Joint Declaration of COSATE and CEATAL, adopted in the framework of the XIII Inter-American Conference of Ministers of Labor (IACML) of the OAS, held in Salvador de Bahia, Brazil, in September 2003, which states:

“We appeal to governments to address, with the support of the ILO, employment as a central concern and key element for the development of plans to eradicate poverty and enable the possibility to overcome conditions of inequality and underdevelopment that persist in many countries of our region; create greater opportunities for progress and well-being, as well as generate spaces for high-level dialogue between governments, social

interlocutors, and international and regional financial institutions for discussion of the situation regarding employment and its current impact on levels of poverty, and thereby help move forward with the design of harmonious policies in the context of Decent Work.

Further, we place special emphasis on the need to generate social dialogue on strengthening education throughout life, and on continuing professional and managerial training as key instruments for the promotion of decent employment in the framework of sustainable development.”

- We state that life-long learning and professional training are key tools to provide an answer to the new challenges posed by competitiveness, and that they are the responsibility of governments, workers and employers. It is fundamental to direct this education to prepare workers so that they can face the new labor conditions.
- We reiterate the need to coordinate economic policies with social and labor policies; as well as to strengthen the Ministries of Labor and promote their participation in the definition of national development policies, in consultation with employers and workers’ organizations.
- We consider that it is crucial to encourage the promotion of collective bargaining and the strengthening of social dialogue as means to improve the development of the world of labor in a democracy.

GENDER EQUALITY

- We consider that a gender dimension and gender equity should be cross-cutting components in the analysis and definition of actions relating to innovation, employment, fighting poverty and strengthening democratic governance. Patterns of gender segmentation in the process of incorporation of new technologies should be avoided, in order to achieve productive development and full human development.

TRADE AND FINANCE

- We state that the issue of corporate social responsibility is of interest to both trade unions and employers, and we seek the dissemination and promotion of those best practices that promote decent work. We understand that given the voluntary aspect of corporate social responsibility, duties that belong to states cannot be demanded from corporations.

EDUCATION

- We state that life-long learning and professional training are key tools to provide an answer to the new challenges posed by competitiveness, and that they are the responsibility of governments, workers and employers. It is fundamental to direct this education to prepare workers so that they can face the new labor conditions.

Science and Technology

- We consider that innovation involves the commitment of employers, workers and governments. We draw attention to the benefits of information sharing, participation and consultation.
- We consider that national systems for innovation and investment in research and development should be integral components of national development policies. Subject matter, skills and competencies that promote research and innovation should be included in basic, secondary and higher education, as well as technical and vocational education.

VI. VIRTUAL FORUM “CIVIL SOCIETY ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION”, OFFICE OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY (OEST), EXECUTIVE SECRETARIAT FOR INTEGRAL DEVELOPMENT, ORGANIZATION OF AMERICAN STATES

EDUCATION

Science and Technology

- Place greater emphasis on education in science, from elementary school up to and even after secondary school. This education is critical and should be integrated with local values. Social understanding about the relevance of science, technology, innovation and education in sciences (STIES) requires the incorporation of these subjects from the earliest years of education.
- Achieve a greater introduction of science, technology, engineering and innovation to secure equitable development for our regions.
- Achieve broader participation of society in creating and understanding the uses and benefits of STIES. The investment capacity of both the private and public sector in Latin America and the Caribbean is limited, and information about the return on such investment is required.
- Ensure that environmental policies are considered as a central topic in the discussion of STIES applications.
- Promote the incorporation of technology and innovation in small and medium-sized enterprises. Likewise, both education and information technologies are essential for incorporating minorities and indigenous peoples in the open market economy.
- Urge civil society organizations in Latin America and the Caribbean to play a more forceful role in incorporating science, technology, engineering, innovation and education in science in national objectives.

VII. ROUNDTABLE WITH CIVIL SOCIETY AND THE SPECIAL SESSION OF THE CISC: “CREATING JOBS TO FIGHT POVERTY AND STRENGTHEN DEMOCRATIC GOVERNANCE”, WASHINGTON, DC, UNITED STATES OF AMERICA, JANUARY 24 AND 25, 2005

DEMOCRACY

- Increased emphasis on science and technology to help develop electronic governments so that citizens can have access to information.
- Creation of a working group within the OAS political bodies and in the Summit of the Americas Process to follow up on quantifying access to information.

HUMAN RIGHTS

- Need to recognize that the right to work is a human right and the importance that OAS Member States guarantee the creation of labor unions and protect worker rights.

Human rights of children and adolescents

- Need to prevent and address the issue of child labor and the necessity of States to adopt legislation to combat this urgent issue.

CIVIL SOCIETY PARTICIPATION

- Inclusion of traditionally marginalized groups such as afro-descendants and indigenous peoples, who should be represented in the preparatory process of the Summits of the Americas.

TRADE AND FINANCE

- Take into account the rights of workers in the negotiation of trade agreements and review trade agreements in efforts to prioritize workers rights and include measures to protect migrant workers.

LABOR

- The member states must respect international labor standards and bear in mind the need to establish equitable policies to create employment as the key to confronting poverty.
- Need for States to create initiatives or entrepreneurial programs that provide options for young people such as access to credit and flexible education options to promote their professional and educational development.

EQUITABLE GROWTH

- Define the term poverty and define which sectors of the population integrate the poor.
- The economic model that has prevailed in the region for the last two decades is limited and has resulted in extreme poverty and extreme wealth.
- Redistribution of wealth should be a major concern of governments.
- Need to develop economic reforms to provide access to credit for micro and medium enterprises and to provide assistance to small businesses.
- Need to dedicate resources to the informal sector to integrate it into the formal economy and to design policies to provide more opportunities to include small business perspectives.
- Promotion of national systems of science and technology integrated at the national and domestic levels to determine the quality of work, with emphasis on internal markets.

EDUCATION

- Importance that States emphasize educational reforms and pay more attention to practical training programs. Furthermore, such programs should be provided at the local, regional, and national level. In addition it is necessary to build capacity in local governments in this endeavor.
- The importance of implementing educational reforms and the need to close the gap between the quality of education in public and private institutions, and the disparity between rural and urban educational systems.

GENDER EQUALITY

- Develop initiatives to include equity with respect to gender and minority groups in labor policies.

SUMMITS FOLLOW-UP PROCESS

- Establish indicators and measurable objectives to evaluate progress in the Summits of the Americas mandates, and the need for States to develop working plans with clear objectives and precise timelines for implementation.

CULTURAL DIVERSITY

- Culture must be taken into consideration as a generator of employment and that the elements of culture such as the arts are an important element to strengthen democratic governance.

VIII. CIVIL SOCIETY PARTICIPATION IN THE THIRTY-FOURTH OAS GENERAL ASSEMBLY, QUITO, ECUADOR, JUNE 6, 2004

DEMOCRACY

- Establish “good government” indicators and define criteria to allow for the effective implementation of the OAS Democratic Charter.
- Create and implement follow-up mechanisms in the OAS through:
 - a. Annual reports on indices of democracy on the basis of which a process of certification of member countries could be carried out.
 - b. Periodic observation missions.
 - c. Periodic reports to be received from the citizenry of member countries for consideration.
 - d. Establish a permanent working group with the participation of civil society to define indicators and follow-up mechanisms for implementation of the Democratic Charter.
 - e. Promote activities to disseminate the Democratic Charter, through the Permanent Office of the OAS in each country, and establish a commitment to positive education for democracy.
 - f. Encourage a debate within the OAS for inclusion of indicators of citizen participation and guarantee of rights as fundamental aspects to strengthen democracy.
 - g. Support activities to strengthen the system of political parties in member countries.
 - h. Democratize the process of civil society participation in General Assemblies and Summits.

Electoral processes and procedures

- Confirm the role of political financing in political contests: The financing of parties and elections is a basic aspect of political contests. Political parties require resources to train new leaders, organize democracy within their ranks, and communicate with voters. The legislation of each country should ensure legitimate access to private or public funds, as needed, to ensure the operation of political parties and campaigns.
- Transparency as a key value of political financing: information on the part of citizens regarding the origin, management, and use of resources is a fundamental principle of the operation of political parties and campaigns, and it applies to both public and private funds. This information should be systematized, available, and easily accessible to citizens prior to the elections.

- The principle of citizen equality as the origin of equitable political representation. Discrepancy in access to resources (sources of financing and the communication media, among others) should not be a factor that distorts the political representation of citizens.
- The integrity of candidates running for election should be protected against donations that take on the character of “investments” whose “dividends” are to be collected in the future. The financing system should develop adequate preventive and penal mechanisms to prevent the use of public offices for private purposes.
- Guarantee the actual implementation of the rules: Political financing systems need to be based on rules that are capable of being implemented. There must be viable standards and professional and independent control and supervisory agencies. The need to ensure the participation of civil society in control processes is recognized, as this is a way of fostering the effective implementation of these principles.

Fight against corruption

- Inter-American Convention against Corruption: Review the timetables and evaluation and monitoring systems, since the evaluation process needs to be streamlined. This review should seek to strengthen the mechanism and use systems that include civil society.
- Establish mechanisms to sanction noncompliance by the States Parties. These mechanisms should contemplate the participation of civil society. Various possibilities should be studied, especially one involving the Inter-American Court of Human Rights.
- Support items I and II regarding the Strengthening and the Mission of the Technical Secretariat for the Mechanism and Financing of the Conference of States Parties to the Mechanism. A budget should be added, and funds sought for visits of the evaluation committee to each country.
- Create a space for exchange of experiences in order to develop and disseminate a data bank / tool box for wide dissemination of the Inter-American Convention against Corruption. This campaign should be conducted throughout the Hemisphere.
- The committee of experts should in the short run develop common standards, together with the participation of civil society, on application of the Inter-American Convention against Corruption in the countries.
- Reports should be published periodically, so that information is delivered without extended delays.
- Include regulations to implement the Convention in the criminal codes of each country.
- By 2006, the Follow-Up Mechanism should provide a classification on the degree of compliance with the Convention on the part of the Member States. An evaluation follow-up plan for the next 5 years should also be presented.
- Corruption in the Private Sector: Create a technical-operational unit, or, failing that, a court specializing in monitoring, preventing, and punishing corruption, and in subjects such as a study on tax evasion, and development of uniform standards to punish corruption, especially in transnational companies in countries comprising the inter-American system.
- Develop an inter-American electronic information network on flows of goods, capital, and investments among member states.

- Promote preparation of standard inter-American legislation on public contracting, and suggest that member countries establish a veto system for companies accused of corruption in any of the states parties.
- Develop a regulatory mechanism related to the operation of so-called tax havens.
- Draft an inter-American code of corporate responsibility.
- Create an inter-American court specializing in prosecuting acts of corruption.
- Promote modernization of control agencies, by implementing standard computer systems for procedures and control.
- Promote training and dissemination in civil society on the role of the OAS and its mandates to strengthen their participation.
- Work with education systems so that they can become a vehicle for dealing with and raising awareness of the phenomenon of corruption and its consequences.
- Establish regional recognition of anti-corruption activities. There could be different categories for the communications media, countries, and companies that are major taxpayers, etc.
- Promote a campaign to foster honesty as an important value for citizens, and involve them in daily practices and provide specific examples.
- These campaigns would be conducted by the OAS and use government spaces for promotion.

HUMAN RIGHTS

- We request member states to emphatically state at this General Assembly, through the Declaration of Quito and resolutions on human rights and anti-corruption efforts, that impunity is a form of corruption and is a violation of human rights in and of itself, and that corruption generate human rights violations.
- States should take on a role of collective guarantors of the system. In this sense, we insist on the obligation of states to comply with the decisions and recommendations of the entities for the protection of human rights, and especially as regards provisional and precautionary measures, and the decisions of the Commission and the judgments of the Court. The OAS should ensure that the reports of the Inter-American Court and Commission on failure to comply with their recommendations and decisions are circulated as widely as possible.
- We urge the OAS Secretary General to instruct the Inter-American Commission on Human Rights to set up a working group with the participation of civil society to draw up guidelines on high-level national mechanisms to ensure effective, immediate implementation of the decisions and recommendations issued by organs of the inter-American system for the protection of human rights.
- The General Assembly should adopt a resolution in which it reiterates its support for the work of human rights defenders and urges the member states to formulate and implement national plans for implementation of the principles contained in the UN declaration on human rights defenders. The resolution should also invite the Inter-American Commission on Human Rights to advise states on the design and implementation of those national plans, and to complete and disseminate the study on the status of human rights defenders in the

Hemisphere. States should also be required to present annual reports on the status of human rights defenders to the Inter-American Commission on Human Rights.

- We urge the OAS Secretary General to instruct the Permanent Council, with the contributions of the IACHR and civil society organizations, to assess the possibility of establishing a specific fund for access by victims to the inter-American system for the protection of human rights and for production of evidence, in view of the fact that economic hardship is the major obstacle preventing victims from having real access to the system.
- Request the Commission to draw up a report on economic, social, and cultural rights, with independent experts. This report should take into account gender perspective and ethnic issues. We suggest that the Commission include a specific chapter on economic, social, and cultural rights in its periodic reports.
- We request the states parties to ratify international instruments calling for protection of human rights. They include: American Convention on Human Rights, Rome Statute, Protocol of San Salvador, and the Convention of Belém do Pará, among others.
- We urge member states to promptly approve and adhere to the Inter-American Convention against Racism and the Inter-American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which are in the process of being established in the inter-American system.
- We urge the OAS Secretary General and member states to instruct the Committee on Juridical and Political Affairs and the Inter-American Commission of Women to conduct an evaluation and draft a report on the degree of compliance with the Convention of Belem do Pará and to create follow-up mechanisms with the participation of nongovernmental independent experts.
- Immediately provide for a significant and progressive increase in the budget of the organs of the system for protection of human rights, namely the Inter-American Court of Human Rights and the Inter-American Commission on Human Rights, based on the OAS Regular Fund.
- Urge member states to study other mechanisms or methods of financing to strengthen the inter-American system for the protection of human rights. Such mechanisms could include foreign debt exchanges or cancellation of interest on the debt, among others.

JUSTICE

- An appeal is made to states to take effective steps at the national level, especially in strengthening justice. The following are regarded as essential: a) Establish milestones and deadlines to evaluate the measures adopted locally; b) Facilitate access to information produced by each of the government institutions, so that evaluations can be conducted on the basis of empirical information, and the informed participation of civil society can be promoted; c) Where information does not exist or is insufficient or inadequate, mechanisms should be established for production and processing of reliable information to be used in measuring the system; d) Make progress in designing indicators that will make it possible to evaluate the impact of measures at local level, especially with regard to justice reform and its relationship to anti-corruption efforts.
- It is necessary to work on the concept of corruption, so that it includes the abusive use of power as a source of human rights violations and impunity, the misuse of power in general, and not just with regard to financial resources, in addition to the responsibility of the private sector in acts of corruption.
- We urge member countries that have not ratified the Rome Statute to do so, and to develop their own rules and regulations and adhere to its Additional Protocol.

HEMISPHERIC SECURITY

- Establish an effective mechanism for dialogue between CSOs and the Committee on Hemispheric Security, based on paragraphs 33 and 47 of the Declaration of Security of the Americas. This dialogue should take place sufficiently in advance of the Organization's formal meetings so that the views, suggestions, and recommendations emanating from the CSOs can play an effective part in the discussions and decision-making of the OAS.
- Express a need for specific recognition of the contributions and role of CSOs in preventing conflicts in the Americas. The most diverse organizations have demonstrated their capacity to prevent and defuse conflicts. In this regard governments are urged to support the establishment of early-warning mechanisms and CSOs are called on to improve their impact capability with regard to these mechanisms. The capacity of civil society to improve its contributions should be strengthened. It is important to voice the concern of CSOs that the solution to the Haitian problem will require support involving governments, aid agencies, and civil society.
- Express concern over the continued delay in making decisions related to agencies, such as the Inter-American Defense Board, that develop policies with a low degree of transparency and promote the development of parallel diplomacy to constitutional democratic institutions. Confirm the need to establish broad access to information on matters of security and defense of the Americas.

CIVIL SOCIETY PARTICIPATION

- Create a working group with civil society to carry out the provisions contained in the Declaration of Nuevo León on subjects such as the following:
 - a. Access to public information;
 - b. Effective participation of civil society in decision-making;
 - c. Prior informed consent;
 - d. Due process, and,
 - e. Accountability.

This group should have a diversified representation of civil society.

- The OAS should guarantee and promote mechanisms and activities for dissemination to and training of civil society in the area of access to public information and public participation. It should urge states to disseminate the inter-American information system. To this end, the OAS would invite member states to draft, with the participation of civil society, the Inter-American Convention on Access to Public Information and Public Participation.
- We formally recommend the creation of a hemispheric working group to analyze and discuss in depth, together with civil society and specialized entities, such as the Rapporteurship on Freedom of Expression, subjects related to the institutional structures and legal and regulatory framework required to guarantee public participation and public access to information in the Americas, and to set minimum standards to be observed with regard to these rights. We request formal support for the resolutions being negotiated for this purpose.
- The OAS should urge its Member States to guarantee access to education for assimilation of public information and for citizen participation.
- We manifest our solidarity with the victims of violations of the right to public information and public participation. We request all states to make every effort to ensure respect for and to guarantee these rights.

2002-2006 CIVIL SOCIETY RECOMMENDATIONS

- The OAS, with the participation of civil society, should periodically publish the status of compliance with each and every one of the resolutions and the impact they have had in the countries.
- The OAS will pledge to establish an independent coordination group of governments and an information center to enable civil society to participate in following up on resolutions and declarations. This information center should consider not limiting documents to legal ones, and should further consider the use of indicators and parameters to measure results.
- We request protection for the persons who participate in disseminating public information.
- Creation of a working group with the participation of civil society and the OAS Summit Secretariat, to draw up a report for consideration by the General Assembly. The report would contain recommendations to improve, strengthen, and improve citizen participation mechanisms at different stages of the Summits process and OAS activities (consultation, design, planning, implementation, monitoring, and evaluation). In addition, it would analyze institutional structures and legal and regulatory frameworks required to guarantee citizen participation and access to information by the people of the Americas at national level. (There is disagreement regarding the composition of the working group, as some participants propose that the working group be made up only of civil society representatives.)
- In the context of the General Assembly and the Summits of the Americas, institutionalize the Hemispheric Forum of Civil Society, which in the past has been held prior to the Government-Civil Society Informal Dialogue, and ensure that it is held far enough in advance so that civil society proposals can be given effective consideration by governments before both summits and general assemblies. In order for this participation to be effective and relevant, civil society must have access to the draft negotiating documents of member states.
- Once the “Specific Fund for Financing Participation of Civil Society Organizations in OAS Activities and in the Summits of the Americas Process” is approved, discuss and consult widely on the rules and regulations stipulating the criteria for allocating resources and the mechanisms for rendering accounts to civil society organizations.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

- Set up a committee of the Permanent Council to deal with environmental issues in the hemisphere; and,
- Request the General Secretariat, in consultation with member states, to draw up draft inter-American conventions establishing minimum standards for environmental conservation covering access to genetic resources, traditional knowledge, and other relevant hemispheric environmental issues.

TRADE AND FINANCE

- The OAS should continue providing technical assistance to regional integration agreements to enhance the negotiating capacity of countries in the FTAA process, a mandate it received from the First Hemispheric Summit. Account, however, should be taken of the changes that have occurred in the negotiating processes, whereby countries are allowed to subscribe to different levels of commitment, according to the Eighth Ministerial Meeting in Miami. If the FTAA is not already unidirectional, or in other words is not limited to providing technical assistance exclusively for states subscribing to all the terms of the FTAA, then the technical assistance offered by the OAS should be multidirectional. This means that assistance should be provided also to those countries that do not want to subscribe to the FTAA document at all levels of commitment.

- The OAS should provide technical assistance to Latin American regional integration agreements, to change their current status as free trade agreements and ensure that they go further and make more efficient use of the regional institutions involved in each agreement, with a view to ensuring more effective and sustainable use of natural and human resources in member countries and to fostering human development. The coexistence of FTAA and regional integration agreements is explicitly recognized by the states on the terms established from the start. This coexistence is facilitated if the agreements are expanded to cover human development. In the same vein, the OAS should provide technical assistance, with an emphasis on human development, to countries that want to negotiate terms different from those established under the FTAA.
- Recommend to governments that the terms of integration negotiations in the region be developed through multi-sectoral consultation processes, and that society in general be informed of their development and participation.
- Recommend to governments that in restructuring the public debt of the countries of the Hemisphere, consideration is given to:
 - a) historical precedents that have proven effective to the parties;
 - b) the financial effect produced by the speculative rise in international interest rates from 1977 to 1984; and,
 - c) the onerous cost of debt servicing, in view of the fact that these funds cannot be used for social investments.

IX. CIVIL SOCIETY HEMISPHERIC FORUM, QUITO, ECUADOR, APRIL 26 AND 27, 2004

DEMOCRACY

- Establish “good government” indicators and define criteria to allow for the effective implementation of the OAS Democratic Charter.
- Create and implement follow-up mechanisms in the OAS through:
 - Annual reports on indices of democracy on the basis of which a process of certification of member countries could be carried out.
 - Periodic observation missions.
 - Periodic reports to be received from the citizenry of member countries for consideration.
- Establish a permanent working group with the participation of civil society to define indicators and follow-up mechanisms for implementation of the Democratic Charter.
- Promote activities to disseminate the Democratic Charter, through the Permanent Office of the OAS in each country, and establish a commitment to positive education for democracy.
- Encourage a debate within the OAS for inclusion of indicators of citizen participation and guarantee of rights as fundamental aspects to strengthen democracy.
- Support activities to strengthen the system of political parties in member countries.
- Democratize the process of civil society participation in General Assemblies and Summits.

Electoral processes and procedures

- Confirm the role of political financing in political contests: The financing of parties and elections is a basic aspect of political contests. Political parties require resources to train new leaders, organize democracy within their ranks, and communicate with voters. The legislation

of each country should ensure legitimate access to private or public funds, as needed, to ensure the operation of political parties and campaigns.

- Transparency as a key value of political financing: information on the part of citizens regarding the origin, management, and use of resources is a fundamental principle of the operation of political parties and campaigns, and it applies to both public and private funds. This information should be systematized, available, and easily accessible to citizens prior to the elections.
- The principle of citizen equality as the origin of equitable political representation. Discrepancy in access to resources (sources of financing and the communication media, among others) should not be a factor that distorts the political representation of citizens.
- The integrity of candidates running for election should be protected against donations that take on the character of “investments” whose “dividends” are to be collected in the future. The financing system should develop adequate preventive and penal mechanisms to prevent the use of public offices for private purposes.
- Guarantee the actual implementation of the rules: Political financing systems need to be based on rules that are capable of being implemented. There must be viable standards and professional and independent control and supervisory agencies. The need to ensure the participation of civil society in control processes is recognized, as this is a way of fostering the effective implementation of these principles.

Transparency and good governance

- The OAS should guarantee and promote mechanisms and activities for dissemination to and training of civil society in the area of access to public information and public participation. It should urge states to disseminate the inter-American information system. To this end, the OAS would invite member states to draft, with the participation of civil society, the Inter-American Convention on Access to Public Information and Public Participation.
- We formally recommend the creation of a hemispheric working group to analyze and discuss in depth, together with civil society and specialized entities, such as the Rapporteurship on Freedom of Expression, subjects related to the institutional structures and legal and regulatory framework required to guarantee public participation and public access to information in the Americas, and to set minimum standards to be observed with regard to these rights. We request formal support for the resolutions being negotiated for this purpose.
- The OAS should urge its Member States to guarantee access to education for assimilation of public information and for citizen participation.
- We manifest our solidarity with the victims of violations of the right to public information and public participation. We request all states to make every effort to ensure respect for and to guarantee these rights.
- The OAS, with the participation of civil society, should periodically publish the status of compliance with each and every one of the resolutions and the impact they have had in the countries.
- The OAS will pledge to establish an independent coordination group of governments and an information center to enable civil society to participate in following up on resolutions and declarations. This information center should consider not limiting documents to legal ones, and should further consider the use of indicators and parameters to measure results.

- We request protection for the persons who participate in disseminating public information.

Fight against corruption

- It is necessary to work on the concept of corruption, so that it includes the abusive use of power as a source of human rights violations and impunity, the misuse of power in general, and not just with regard to financial resources, in addition to the responsibility of the private sector in acts of corruption.
- Inter-American Convention against Corruption:
 - Review the timetables and evaluation and monitoring systems, since the evaluation process needs to be streamlined. This review should seek to strengthen the mechanism and use systems that include civil society.
 - Establish mechanisms to sanction noncompliance by the States Parties. These mechanisms should contemplate the participation of civil society. Various possibilities should be studied, especially one involving the Inter-American Court of Human Rights.
 - Support items I and II regarding the Strengthening and the Mission of the Technical Secretariat for the Mechanism and Financing of the Conference of States Parties to the Mechanism. A budget should be added, and funds sought for visits of the evaluation committee to each country.
 - Create a space for exchange of experiences in order to develop and disseminate a data bank / tool box for wide dissemination of the Inter-American Convention against Corruption. This campaign should be conducted throughout the Hemisphere.
 - The committee of experts should, in the short run—perhaps for the Buenos Aires Summit—develop common standards, together with the participation of civil society, on application of the Inter-American Convention against Corruption in the countries.
 - Reports should be published periodically, so that information is delivered without extended delays.
 - Include regulations to implement the Convention in the criminal codes of each country.
 - By 2006, the Follow-Up Mechanism should provide a classification on the degree of compliance with the Convention on the part of the Member States. An evaluation follow-up plan for the next 5 years should also be presented.
- Corruption in the Private Sector:
 - Create a technical-operational unit, or, failing that, a court specializing in monitoring, preventing, and punishing corruption, and in subjects such as a study on tax evasion, and development of uniform standards to punish corruption, especially in transnational companies in countries comprising the inter-American system.
 - Develop an inter-American electronic information network on flows of goods, capital, and investments among member states.
 - Promote preparation of standard inter-American legislation on public contracting, and suggest that member countries establish a veto system for companies accused of corruption in any of the states parties.
 - Develop a regulatory mechanism related to the operation of so-called tax havens.
 - Draft an inter-American code of corporate responsibility.
 - Create an inter-American court specializing in prosecuting acts of corruption.
 - Promote modernization of control agencies, by implementing standard computer systems for procedures and control.
 - Promote training and dissemination in civil society on the role of the OAS and its mandates to strengthen their participation.

2002-2006 CIVIL SOCIETY RECOMMENDATIONS

- Work with education systems so that they can become a vehicle for dealing with and raising awareness of the phenomenon of corruption and its consequences.
- Establish regional recognition of anti-corruption activities. There could be different categories for the communications media, countries, and companies that are major taxpayers, etc.
- Promote a campaign to foster honesty as an important value for citizens, and involve them in daily practices and provide specific examples.
- These campaigns would be conducted by the OAS and use government space for promotion.

HUMAN RIGHTS

- We request member states to emphatically state at this General Assembly, through the Declaration of Quito and resolutions on human rights and anti-corruption efforts, that impunity is a form of corruption and is a violation of human rights in and of itself, and that corruption generate human rights violations.
- States should take on a role of collective guarantors of the system. In this sense, we insist on the obligation of states to comply with the decisions and recommendations of the entities for the protection of human rights, and especially as regards provisional and precautionary measures, and the decisions of the Commission and the judgments of the Court. The OAS should ensure that the reports of the Inter-American Court and Commission on failure to comply with their recommendations and decisions are circulated as widely as possible.
- We urge the OAS Secretary General to instruct the Inter-American Commission on Human Rights to set up a working group with the participation of civil society to draw up guidelines on high-level national mechanisms to ensure effective, immediate implementation of the decisions and recommendations issued by organs of the inter-American system for the protection of human rights.
- The General Assembly should adopt a resolution in which it reiterates its support for the work of human rights defenders and urges the member states to formulate and implement national plans for implementation of the principles contained in the UN declaration on human rights defenders. The resolution should also invite the Inter-American Commission on Human Rights to advise states on the design and implementation of those national plans, and to complete and disseminate the study on the status of human rights defenders in the Hemisphere. States should also be required to present annual reports on the status of human rights defenders to the Inter-American Commission on Human Rights.
- We urge the OAS Secretary General to instruct the Permanent Council, with the contributions of the IACHR and civil society organizations, to assess the possibility of establishing a specific fund for access by victims to the inter-American system for the protection of human rights and for production of evidence, in view of the fact that economic hardship is the major obstacle preventing victims from having real access to the system.
- Request the Commission to draw up a report on economic, social, and cultural rights, with independent experts. This report should take into account gender perspective and ethnic issues. We suggest that the Commission include a specific chapter on economic, social, and cultural rights in its periodic reports.
- We request the states parties to ratify international instruments calling for protection of human rights. They include: American Convention on Human Rights, Rome Statute, Protocol of San Salvador, and the Convention of Belém do Pará, among others.

- We urge member states to promptly approve and adhere to the Inter-American Convention against Racism and the Inter-American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which are in the process of being established in the inter-American system.
- We urge the OAS Secretary General and member states to instruct the Committee on Juridical and Political Affairs and the Inter-American Commission of Women to conduct an evaluation and draft a report on the degree of compliance with the Convention of Belem do Pará and to create follow-up mechanisms with the participation of nongovernmental independent experts.
- Immediately provide for a significant and progressive increase in the budget of the organs of the system for protection of human rights, namely the Inter-American Court of Human Rights and the Inter-American Commission on Human Rights, based on the OAS Regular Fund.
- Urge member states to study other mechanisms or methods of financing to strengthen the inter-American system for the protection of human rights. Such mechanisms could include foreign debt exchanges or cancellation of interest on the debt, among others.
- We urge member countries that have not ratified the Rome Statute to do so, to develop their own rules and regulations, and adhere to its Additional Protocol.

JUSTICE

- An appeal is made to states to take effective steps at the national level, especially in strengthening justice. The following are regarded as essential: a) Establish milestones and deadlines to evaluate the measures adopted locally; b) Facilitate access to information produced by each of the government institutions, so that evaluations can be conducted on the basis of empirical information, and the informed participation of civil society can be promoted; c) Where information does not exist or is insufficient or inadequate, mechanisms should be established for production and processing of reliable information to be used in measuring the system; d) Make progress in designing indicators that will make it possible to evaluate the impact of measures at local level, especially with regard to justice reform and its relationship to anti-corruption efforts.

HEMISPHERIC SECURITY

- Establish an effective mechanism for dialogue between CSOs and the Committee on Hemispheric Security, based on paragraphs 33 and 47 of the Declaration of Security of the Americas. This dialogue should take place sufficiently in advance of the Organization's formal meetings so that the views, suggestions, and recommendations emanating from the CSOs can play an effective part in the discussions and decision-making of the OAS.
- Express a need for specific recognition of the contributions and role of CSOs in preventing conflicts in the Americas. The most diverse organizations have demonstrated their capacity to prevent and defuse conflicts. In this regard governments are urged to support the establishment of early-warning mechanisms and CSOs are called on to improve their impact capability with regard to these mechanisms. The capacity of civil society to improve its contributions should be strengthened. It is important to voice the concern of CSOs that the solution to the Haitian problem will require support involving governments, aid agencies, and civil society.
- Express concern over the continued delay in making decisions related to agencies, such as the Inter-American Defense Board, that develop policies with a low degree of transparency and promote the development of parallel diplomacy to constitutional democratic institutions. Confirm the need to establish broad access to information on matters of security and defense of the Americas.

CIVIL SOCIETY PARTICIPATION

- Creation of a working group with the participation of civil society and the OAS Summit Secretariat, to draw up a report for consideration by the General Assembly. The report would contain recommendations to improve, strengthen, and improve citizen participation mechanisms at different stages of the Summits process and OAS activities (consultation, design, planning, implementation, monitoring, and evaluation). In addition, it would analyze institutional structures and legal and regulatory frameworks required to guarantee citizen participation and access to information by the people of the Americas at national level. (There is disagreement regarding the composition of the working group, as some participants propose that the working group be made up only of civil society representatives.)
- In the context of the General Assembly and the Summits of the Americas, institutionalize the Hemispheric Forum of Civil Society, which in the past has been held prior to the Government-Civil Society Informal Dialogue, and ensure that it is held far enough in advance so that civil society proposals can be given effective consideration by governments before both summits and general assemblies. In order for this participation to be effective and relevant, civil society must have access to the draft negotiating documents of member states.
- Once the “Specific Fund for Financing Participation of Civil Society Organizations in OAS Activities and in the Summits of the Americas Process” is approved, discuss and consult widely on the rules and regulations stipulating the criteria for allocating resources and the mechanisms for rendering accounts to civil society organizations.

TRADE AND FINANCE

- The OAS should continue providing technical assistance to regional integration agreements to enhance the negotiating capacity of countries in the FTAA process, a mandate it received from the First Hemispheric Summit. Account, however, should be taken of the changes that have occurred in the negotiating processes, whereby countries are allowed to subscribe to different levels of commitment, according to the Eighth Ministerial Meeting in Miami. If the FTAA is not already unidirectional, or in other words is not limited to providing technical assistance exclusively for states subscribing to all the terms of the FTAA, then the technical assistance offered by the OAS should be multidirectional. This means that assistance should be provided also to those countries that do not want to subscribe to the FTAA document at all levels of commitment.
- The OAS should provide technical assistance to Latin American regional integration agreements, to change their current status as free trade agreements and ensure that they go further and make more efficient use of the regional institutions involved in each agreement, with a view to ensuring more effective and sustainable use of natural and human resources in member countries and to fostering human development. The coexistence of FTAA and regional integration agreements is explicitly recognized by the states on the terms established from the start. This coexistence is facilitated if the agreements are expanded to cover human development. In the same vein, the OAS should provide technical assistance, with an emphasis on human development, to countries that want to negotiate terms different from those established under the FTAA.
- Recommend to governments that in restructuring the public debt of the countries of the Hemisphere, consideration is given to:
 - historical precedents that have proven effective to the parties;
 - the financial effect produced by the speculative rise in international interest rates from 1977 to 1984; and,

- the onerous cost of debt servicing, in view of the fact that these funds cannot be used for social investments.
- Recommend to governments that the terms of integration negotiations in the region be developed through multi-sectoral consultation processes, and that society in general be informed of their development and participation.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

- Create a working group with civil society to carry out the provisions contained in the Declaration of Nuevo León on subjects such as the following:
 - a. Access to public information;
 - b. Effective participation of civil society in decision-making;
 - c. Prior informed consent;
 - d. Due process, and,
 - e. Accountability.

This group should have a diversified representation of civil society.

- Set up a committee of the Permanent Council to deal with environmental issues in the hemisphere; and,
- Request the General Secretariat, in consultation with member states, to draw up draft inter-American conventions establishing minimum standards for environmental conservation covering access to genetic resources, traditional knowledge, and other relevant hemispheric environmental issues.

XI. FORUM “ADVANCES AND CHALLENGES FACING CIVIL SOCIETY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SUMMITS OF THE AMERICAS”, MONTERREY, MEXICO, JANUARY 10, 2004

HUMAN RIGHTS

- Democratic governance depends on a strengthened Inter-American Human Rights System, as a guarantee of the promotion and protection of human rights through compliance with the decisions of the Inter-American Court of Human Rights and the Inter-American Human Rights Commission. This system must be made universal in the region, domestic legislation must be adjusted to guarantee human rights, and it must be granted an adequate budget to ensure it can function effectively.
- For the consolidation of democracy, it is essential to combat impunity, not just of corrupt officials, but also, above all, of perpetrators of grave and/or systematic human rights violations.
- Finally, we consider it fundamental that any internal security action or program to combat terrorism must be based on a full guarantee of all human rights.

TRADE AND FINANCE

- State must acknowledge that all trade and investment liberalization negotiations are subject to existing international law and standards on human rights and protection of the environment. States must formally recognize the primacy of human rights instruments in cases of conflicts international human rights law and international trade law.
- More extensive and comprehensive sustainability impact assessments must be conducted, *ex ante*, of new trade agreements among the countries in the region. These assessments are

needed at the hemispheric and sub-regional level. They must be independent and transparent, and they must be done with full participation of relevant inter-governmental organizations and civil society.

- All new trade and investment agreements must include new social and environmental cooperation mechanisms with specific instruments for civil society participation.
- To achieve a sustainable economic development with equity, new investment in technological, legal and scientific research is indispensable.
- There should be a comprehensive review of subsidy policies in each country in order, on one hand, to ensure that they are sustainable and enable fair competition in the agricultural sector, and, on the other hand, to enable the most vulnerable groups to access the goods and services necessary for the exercise of their human rights.
- Trade liberalization rules should incorporate policies to attain income levels that are in proportion to the cost of goods and services in the countries.
- Public policies to promote foreign investment must also ensure that companies will respect internationally and nationally recognized human rights of workers, environmental laws and standards, and other fiscal policies for equality of national productive conditions.
- The state plays an essential role by investing in physical infrastructure to guarantee access to, and satisfaction of, the basic needs and human rights of its people. The IDB should strengthen its efforts to help countries to guarantee the development of adequate physical infrastructure.

EQUITABLE GROWTH

- The democratic community must protect and strengthen labour rights, including those mentioned in the 1998 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.
- Economic growth policies of today must provide equity among generations: sustainable development.
- To achieve this inter-generational equity, economic policies and institutions must be consistent with social and environmental objectives and regimes.
- One of the most important sustainable development problems facing the Americas is climate change. Governments and societies must take concrete and immediate measures to avoid environmental, social and cultural destruction that will result from its effects. To do so, all countries of the region should ratify and implement the Kyoto Protocol.

XII. REGIONAL FORUM, CIVIL SOCIETY IN THE PROCESS OF HEMISPHERIC INTEGRATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SPECIAL SUMMIT OF THE AMERICAS, MONTERREY, MEXICO, NOVEMBER 24 AND 25, 2003

DEMOCRACY

Electoral processes and procedures

- Ensure transparency in public and private financing of political activities, both in electoral campaigns and in regular activities.
- Establish controls and penalties through independent electoral tribunals.

- Prohibit covert financing of political activities through irregular diversion of public funds and resources allocated through public competitions to non-political public officials; and penalize political patronage, such as, for example, discretionary use of the welfare budget.
- Improve and increase the level of electoral participation and representation of minority groups in the region (indigenous, afro-latins, people with disabilities, and HIV/AIDS sufferers).
- Carry out research on current rules and practices regarding the performance and level of participation of minority groups in electoral processes.
- Implement technical advisory projects with organizations that represent minority groups, in order to encourage them to exercise their right to vote in election processes.

Local government strengthening

- Ensure that the opinion of the citizenry is taken into account in all community development decisions; strengthen mechanisms, such as, *inter alia*, consultations and plebiscites, designed to guarantee the transparency and accountability of local and sub-national governments, as well as citizen participation; and make certain that these mechanisms function effectively.
- Provide technical and institutional training designed to support local government modernization, particularly in the generation and collection of self-generated resources by municipalities.
- Ensure the existence of rules and regulations that clearly determine the jurisdictions and responsibilities of local and sub-national governments in relation to the national government, and make certain there is coherence between the competencies and the resources transferred from national to local government.
- Educate the public in the exercise of all their rights and duties, in order to increase the effectiveness of their participation at the local level.
- Ensure that bodies set up to channel cooperation from sub-national and local government to the citizenry have the necessary resources to perform their legally prescribed functions.

Transparency and good governance

- Encourage the enactment of laws that ensure free access to public information in countries where it does not exist. In those countries where such laws already exist, improve their application so as to ensure effective and timely access for the public. It is essential for such laws to meet certain basic standards to safeguard the right of access to public information.³
- Establish clearly in such laws the exceptions regarding access to public information. Those exceptions should only be basic and fundamental, of restrictive interpretation, and justified.
- Establish effective penalties for officials who break the rules, and create independent oversight agencies to enforce the rules, with the power to impose those penalties.

³ Those basic standards are:

- Public information is any information in the possession of the public administration;
- Any person may request public information;
- It is not necessary to explain reasons for requesting public information;
- The law should clearly set forth exceptions;
- The law should establish time limits.

2002-2006 CIVIL SOCIETY RECOMMENDATIONS

- Educate and raise the awareness of the public, political parties, and public officials about the exercise of this right, in order to reduce the gap between governor and governed.
- Encourage widespread use of official web sites at the regional, national and local level, in order to increase transparency in government procurement processes. At the same time, encourage the use of other media to reach social sectors without access to information technology.
- Improve information mechanisms in order to ensure it is exhaustive, relevant, up to date, free and comprehensible, bearing in mind the cultural diversity of countries, as appropriate. Determine the need for a binding regional instrument that introduces minimum legal standards on access to public information.

HUMAN RIGHTS

- Design and implement economic and social policies and programs based on internationally recognized human rights to ensure their effectiveness and that they are of a sustainable, inclusive and equitable nature.
- Conduct detailed follow-up on the commitments adopted at the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance.
- Comply in full with all the commitments adopted in the Quebec City Plan of Action in the area of human rights.
- Give effect to the undertakings to substantially and progressively increase the budgets of the IACHR and the Inter-American Court, in accordance with the resolutions adopted by the General Assembly in this area; as well as to adopt all the measures necessary to strengthen the inter-American system for protection of human rights, *inter alia*, through effective compliance with the recommendations of the IACHR and the decisions of the Inter-American Court.
- Sign and ratify the inter-American and universal treaties on protection of human rights.
- In the framework of the commemoration of the 10th anniversary of the Convention of Belem Do Para and in keeping with the Quebec commitments, “[i]ntegrate fully the human rights of women into the work of hemispheric institutions, including the Inter-American Court on Human Rights and the IACHR, and increase the nomination of women as candidates for positions in these bodies.”

Migration

- Promote observance of human rights for migrants and their families.
- Strengthen application of the principle of non-discrimination and protection of the integrity of migrants, in particular when they are affected by administrative measures adopted by immigration authorities.
- Urge ratification of the UN Convention on Migrant Workers and their Families.
- Design and implement human-rights-based public policies on immigration.

Freedom of opinion and expression

- Ensure that domestic laws on freedom of expression are consistent with international standards. In particular, all forms of censorship should be eliminated, and the mandates of the Inter-American Commission on Human Rights should be complied with.
- Develop education, awareness raising, and training programs on the exercise of this right for citizens and public officials.
- Ensure protection for journalists, respect their freedom to exercise their profession, and permit free access to public information sources, while guaranteeing at all times respect for people’s right to privacy.
- Implement a reform of the legal framework in order to curb monopolies and ensure that the ownership of the media cannot be concentrated in the hands of a few proprietors.
- Ensure that the domestic laws of each country guarantee freedom of association and of cultural and artistic expression, as well as the possibility for minority groups to express themselves freely.

HEMISPHERIC SECURITY

- States should recognize the need to strengthen the role of civil society where conflict prevention (understood as *identification and prevention of the outbreak, escalation, re-escalation or spread of armed conflict*) and peace building are concerned.
- There should be an increase and improvement in interaction between civil society, the Organization of American States, and governments, with a view to reaching a more integrated and coherent position on conflict prevention.
- We propose a UN-led “World Plebiscite” to be held simultaneously in every country throughout the world, in order to consult each person about an issue of fundamental importance to their lives: to do away with war forever, and abolish the manufacture, stockpiling and sale of arms. In order to give this event legal force, we propose that the constitution of each country be amended to include this agreement.
- As it is necessary to rebuild our current way of life, we propose the creation of an “International Solidarity Fund” with the money that each nation saves as a result of disarmament:
 - a. 10% to assist the most dispossessed peoples and create a culture of peace throughout the world;
 - b. 10% to maintain a Multilateral Peacekeeping Force to prevent any pockets of violence and 10% to indemnify the agencies that are part of the current arms system, so that factories can be retrofitted and defense institutions can be converted into think tanks for growth at the service of humankind. This indemnification will be for 10 years and will be tax-free.

CIVIL SOCIETY PARTICIPATION

- Promote social participation.
- Institutionalize civil society participation in the design, targeting, implementation, and evaluation of social policies. To guarantee the effective participation of society in decision making, a system for dialogue and consensus building will be set up at the national, regional

and local level. The necessary conditions and resources will be made available to ensure this and the involvement of excluded sectors in particular will be encouraged.

- Create a permanent Advisory Committee composed of CSOs accredited to the OAS.
- Formalize and institutionalize dialogue between governments and CSOs in the Summits Processes, in particular:
 - **At the regional level:**
 - Strengthen and enhance at each meeting of the SIRG the dialogue between National Coordinators and CSOs in order to present proposals or evaluate implementation of mandates.
 - Create a permanent Advisory Committee composed of CSOs accredited to the OAS, in order to engage in informal and purposeful dialogue with governments during the Summits preparation and implementation process.
 - Institutionalize in the official Summits agenda a forum for dialogue between Minister of Foreign Affairs and CSOs.
 - The OAS Summits of the Americas Secretariat will be responsible for organizing this participation.
 - **At the national level:**
 - Each Ministry of Foreign Affairs should hold periodic meeting with CSOs in order to provide information on compliance with the Summits Process and to collect ideas.
 - Consider the possibility of including CSO representatives in official delegations at meetings of the SIRG and Summits of the Americas.
 - Prepare an annual report for general distribution on progress and challenges in implementation of the commitments adopted at Summits.
 - As mentioned in the plans of action of past Summits, we recognize the need to provide resources to strengthen the Summits Process with the participation of CSOs.

EQUITABLE GROWTH

- Macroeconomic policies have given priority to stability over growth and should combine both objectives.
- More attention should be given in the opening up of trade to the fiscal dependence of countries that are heavily dependent on foreign trade.
- The problem of the foreign debt of highly indebted countries requires a political solution (lightening the load).
- Ensure quality economic growth; in other words, devote attention to the problem of the structure of growth and to employment creation strategies. This process should be associated with the development of social security networks designed to help reduce vulnerability. The notion of labor should be reexamined and extended to other human activities in other categories.
- Support small business development by making it easier to access credit, creating an appropriate legal framework, and implementing services to enhance competitiveness.

- Adopt decisive and concrete measures on the treatment of less developed economies in trade liberalization processes.
- Include the issue of agrarian transformation on the hemispheric agenda.
- The aim is not merely to achieve growth, but quality growth: attention must be given to the problem of the structure of economic growth and to the strategy for creating quality jobs. This structure determines the quality of the jobs created.
- Job quality should be associated with the development of social security networks designed to help reduce vulnerability. In turn, the notion of labor should be reexamined and extended to other human activities in other categories.
- Small business has been dynamic in the creation of jobs but has proved vulnerable to change. This sector needs comprehensive support: access to credit, legal frameworks, and services to boost competitiveness.
- Strengthen the tax-collection capacity of the State through its fiscal apparatus.

TRADE AND FINANCE

- Trade regulations have not given sufficient attention to the difference in size and development of countries. Decisive and concrete measures should be adopted on the treatment of less developed economies.
- Ensure access to potable water and sanitation as universal rights, giving particular attention to the most unprotected social sectors.

AGRICULTURE

- The rural population and agrarian development are among the main issues conspicuously absent from the hemispheric agenda. At the same time the rural population appears to have lost most from trade liberalization, which has augmented migratory pressure.
- States need to move forward purposefully with agrarian transformation, an agenda in which property rights and the promotion of comprehensive agrarian reform are pivotal aspects. This sector would be part of the integration process and its rights and autonomy would be respected.

EDUCATION

- In a context of fiscal austerity, the state plays a key role in investment in education as a stimulus for economic development and citizen participation.
- Education should focus not only on children and young people, but adults also, in an effort to provide formal education and not simply vocational training. Any enterprise requires basic educational skills.
- Continue to encourage decentralization and demand broad levels of participation in the management of education systems.
- Increase and reallocate the amount of public education expenditure per student, and tackle the serious inequities that exist.

2002-2006 CIVIL SOCIETY RECOMMENDATIONS

- Improve incentives for quality teaching and link new salary increases to the implementation of policies that take performance into account.
- Ensure that the development of standards is linked to other elements of the education system and that they are effectively useful.
- Strengthen application of educational exams at the national level that guarantee equitable access to quality education.
- Invest in formal education for adults, not simply for children and young people.

HEALTH

- Education on reproductive health and access to different methods of contraception and prevention of HIV/AIDS and other STDs for both sexes.
- Prenatal care and follow-up for pregnant women and nursing mothers.
- Child growth and development monitoring, as well as access to multivitamins and drugs.
- Mental health care and addiction prevention.
- Care for priority groups, such as the elderly, people with disabilities, and victims of domestic violence.
- HIV/AIDS: Based on the agreements of the Quebec Summit, which recognized that HIV/AIDS is a major threat to the security of our people, we recommend the increase of resources for prevention, education and access to care and treatment as well as research. We recommend encouraging, through the accomplishment of the following objectives, the participation of society and, in particular, of at-risk populations in plans of action to be implemented
 - Effective information campaigns;
 - Implement effective and measurable national plans to increase access to antiretroviral drugs for people with HIV/AIDS, the results of which shall be presented at the next Summit of the Americas in Argentina, in 2005.

RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE

- The States of the hemisphere should support the preparation and adoption of the proposed American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples with the participation of the interested parties.
- Recommend the creation of a bipartisan (States and indigenous peoples) permanent body at the highest level of the inter-American system, discussed with the interested parties, to follow-up on agreements adopted in this area.
- Recommend to the IDB to establish a development policy for the indigenous peoples of the Americas designed in conjunction with the latter.
- Support the preparation and adoption of the proposed American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples with the participation of the interested parties.

- Recommend the creation of a bipartisan (States and indigenous peoples) permanent body at the highest level of the inter-American system, discussed with the interested parties, to follow-up on agreements adopted in this area.

XIII. CIVIL SOCIETY FORUM ON THE OCCASION OF THE XXXIII GENERAL ASSEMBLY OF THE OAS, SANTIAGO, CHILE, JUNE 7, 2003

DEMOCRACY

Electoral processes and procedures

- Political party finance: There should be obligatory periodic accountability, specifying source, amount and use, through a system of registered accounts, as well as the appointment of a person legally responsible for the execution of funds in each political party.
- The plan of action should include a profound commitment on the part of all member states to develop comprehensive systems to regulate political campaign and party finance.
- The Unit for the Promotion of Democracy, together with the Inter-American Forum on Political Parties should conduct a study on electoral systems and their impact on problems of representation and the cost of elections before the end of 2005.
- The OAS, through the Inter-American Forum on Political Parties, should help to encourage and strengthen internal democratization of political parties, and improve their relations with the media and citizen participation mechanisms that effectively connect them with the demands of society.

Transparency and good governance

- The OAS should encourage member states to adopt laws to foster public probity and good performance on the part of both civil servants and government workers in the interests of the common good and the development of society. These initiatives can be put into effect through criminal codes that recognize and describe conducts that constitute a public offence and provide stiff penalties in order to safeguard the interests of the citizenry.
- The states in the hemisphere should draw up an agenda of institutional reforms that gives particular attention to transparency, accountability and inclusion of non-state actors in monitoring and design of public policies.
- Probity should be instituted as a core element of public administration.
- The countries should be required to implement laws on the right to information, together with measures that include the obligation to facilitate access to all information that does not affect national security and the privacy of persons; the right of appeal, penalties for non-compliance; and training for civil servants to ensure the delivery of information.
- Starting in 2004, the OAS should implement technical assistance mechanisms in order to put into practice access to information systems.
- Restore the public standing of politics. Governments in the hemisphere should encourage institutional reforms to reduce costs in politics, ensure transparency in public administration spending, and generate effective institutional mechanisms for the inclusion of new sectors in political systems. The purpose of the foregoing is to boost public confidence in political parties.

HUMAN RIGHTS

- A mechanism should be created for elections of judges of the Inter-American Court and members of the Inter-American Commission that ensures transparency and the participation of civil society organizations. To that end, a public hearing should be institutionalized, through the appropriate body and prior to the election of judges and commission members, for the presentation of candidates their proposals, suitability and commitment to the protection of human rights.
- The states should guarantee a twofold increase in the current budget of the inter-American system for protection of human rights (Commission and Court) within a maximum of two years.
- The General Assembly should adopt the measures necessary to avert the 20% budget cut currently proposed for the inter-American system for protection of human rights. Those measures should lead to the restoration of the budget by the percentage of the reduction and to a budget increase.
- Overall, states should strive for a progressive increase in the budget of the inter-American system in accordance with its operating needs, in particular those arising from the reform of its rules and regulations.
- States should implement within a year at most an effective and expeditious mechanism that ensures implementation of the decisions of the inter-American system for protection of human rights.
- States have continuously and persistently expressed their concern for respect and protection of human rights defenders in the region as important actors in democracy. That interest should translate into firm and effective support for the Human Rights Defenders Unit established in the Secretariat of the IACHR with a view to creation of a Rapporteurship in this area.
- States should strengthen support for the Executive Secretariat of the Inter-American Commission on Human Rights as the permanently functioning body in the system whose users turn to for immediate protection.
- Support ratification of regional instruments for protection of human rights by all the member states of the OAS.
- States should renew the mandate of the Working Group to redraft the proposed American Declaration on the Rights of Indigenous People, in order to ensure the full and broad participation of indigenous peoples in the overall process of drafting and adopting the proposed declaration; and hold a special session of the Working Group for a comprehensive reading before the negotiations process begins.
- Progress should be made with the initiative to prepare a draft American Convention against Racism.
- States should adopt procedures and mechanisms to ensure the rights of asylum seekers, refugees and migrants, in accordance with the standards contained in international standards on human rights. The states should also strengthen cooperation between members of the Organization, in order to facilitate the return and voluntary resettlement of victims of persecution, as well as leaving their doors open to those victims. States should also accede to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families.

- States should give attention to the issue of discrimination against vulnerable groups, *inter alia*, indigenous people, afrodescendants, women, and children.
- Development of a set of integrated political, economic and social policies designed to:
 - Strengthen the rule of law and the observance of human rights; foster the subordination of the armed forces and the security forces to civilian authority and their non-interference in political matters; make the state an efficient and transparent body with the responsibility to ensure that the basic needs of the population are met, promote the integration of excluded sectors of society, gender equality and a culture of tolerance and respect for differences.
 - Broaden and encourage civil society participation at various decision making levels.
- To ensure equal participation and enjoyment of human rights, states should ensure freedom of conscience and encourage the secularization of their authorities.

HEMISPHERIC SECURITY

- At the coming Conference on Hemispheric Security to be held in Mexico in October, the mechanisms that the states adopt to confront this problem should ensure the observance, respect and protection of human rights in accordance with Article 3 of the Inter-American Democratic Charter.
- The countries in the hemisphere need to adopt a charter on democratic security that gives priority to the security of persons, understood in the broadest possible sense, over the use of armed force.

CIVIL SOCIETY PARTICIPATION

- The OAS should help make itself more easily understood by civil society. In other words, it should provide clear and comprehensible information on the mechanisms and procedures through which it operates.
- Identify and disseminate the various civil society initiatives to follow up on multilateral agreements.
- Support and make use of information mechanisms and articulated organic information networks of civil society to increase dissemination and interaction on issues. In this respect, it is suggested that civil society focal points be contacted to facilitate relations with governments.
- Use the tools offered by information technology to generate more forums for communication and interaction.
- The members should take into consideration the expertise of CSOs on specific issues, which would help support their strengthening.
- The countries of the hemisphere need to establish national and multilateral mechanisms for inclusion of civil society in the decision making process. That requires strengthening mechanisms for transparency and the transfer of information from one sector to another.

EQUITABLE GROWTH

- The states of the hemisphere in conjunction with international financial institutions (IMF, World Bank) should draw up an agenda that targets the reduction of poverty and social exclusion in Latin America with a view to a New Hemispheric Charter.

SUMMITS FOLLOW-UP PROCESS

- Progress and challenges in implementation of mandates of the OAS and of the Summits of the Americas on governance, democracy, and human rights. The follow-up process on agreements is a useful tool for progress on those issues in each country. Hence:
 - The agreements help to forge collaborative relations between governments and civil society.
 - It is important for multilateral dialogue to continue at the national level.
 - Civil society organizations help to further shared agendas.
 - The recommendations put forward entail shared responsibilities
- Broaden the mechanism for civil society participation institutionalized in the SIRG. In this connection it is necessary to improve the meetings calendar to facilitate civil society participation.
- In particular with regard to the FTAA, it is necessary to broaden the existing participation mechanism for the business sector to include civil society as a whole.
- Make government documents public.
- Take into account independent civil society reports on implementation of agreements.
- To ensure implementation of these recommendations, we suggest that member states increase their current financial contribution at least to a figure close to that requested by the General Secretariat as of 2004.
- It is necessary to move forward with the coordination of multilateral agencies in and outside the OAS, in order to provide a concerted, efficient response to meet objectives for which they were created.

XIV. CIVIL SOCIETY'S REFLECTIONS ON THE FIRST INTER-AMERICAN MEETING OF MINISTERS OF CULTURE AND HIGHEST APPROPRIATE AUTHORITIES IN THE FRAMEWORK OF CIDI, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, JULY 12, 2002

CULTURAL DIVERSITY

- Cultural goods and services should not be considered as commodities whose only value is commercial. The equitable flow of cultural goods and services among countries of the Americas affirms cultural identities.
- Ministries of Culture and Foreign Trade of the countries of the Americas must ensure that by signing Free Trade Agreements, they are not jeopardizing the ability to independently formulate public policies on culture.
- Civil society representatives in attendance express the strong will to participate in the Inter-American Cultural Policy Observatory, which we view as the institution responsible for guaranteeing the sustainability and consistency of cultural policies, through follow up and re-assessment. We also believe that civil society should be represented in the Inter-American Committee on Culture.
- The relationship between culture and communication, as well as between culture and education, considered in the twentieth point of the Declaration, should be highlighted in the same manner as the relationship between culture and sport.

- The eighth point of the Declaration, referring to intellectual property, both individual and collective, should be taken up in the Action Plan between points seven and eight.
- We request that the document entitled “Civil society’s reflections”, as well as the “Declaration of professional organizations from the cultural milieu of the Americas” endorsed by eighty-two professional cultural organizations from Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia and Mexico and presented by the Coalition for Cultural Diversity, be included as an annex to the final documents of the “First Inter-American Meeting of Ministers of Culture and Highest Appropriate Authorities” held in Cartagena de Indias, Colombia, July 12 – 13, 2002.
- Finally, we invite the Ministers of Culture and Highest Appropriate Authorities to strengthen the participation of civil society in processes associated to the formulation of cultural policies and promote dialogue, exchange and cooperation between the cultures and regions of the Americas, without exception.